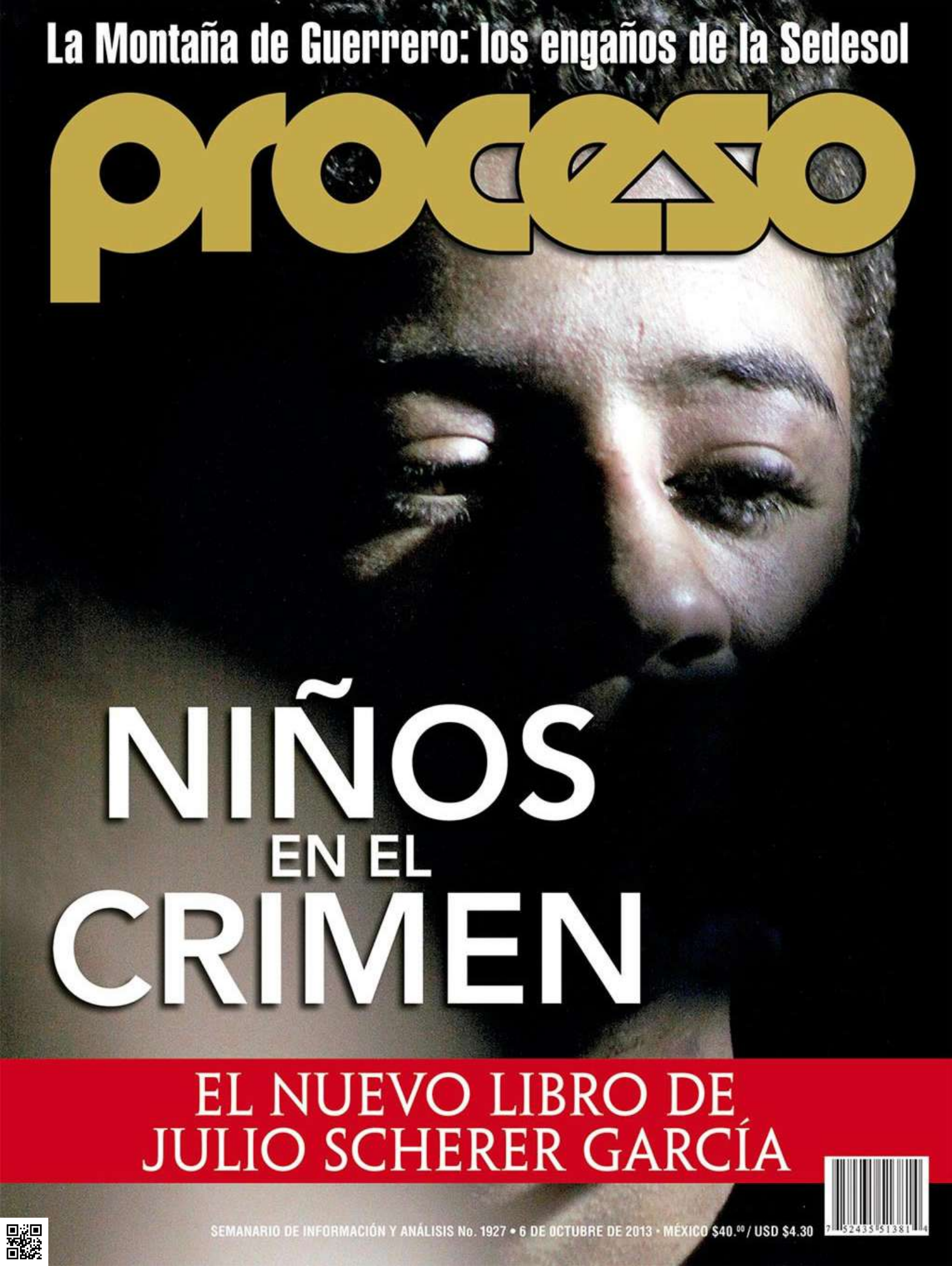
La Montaña de Guerrero: los engaños de la Sedesol

proceso



NIÑOS EN EL CRIMEN

EL NUEVO LIBRO DE JULIO SCHERER GARCÍA

SEMANARIO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS No. 1927 • 6 DE OCTUBRE DE 2013 • MÉXICO $40.00 / USD $4.30

JUSTICIA
El mundo de la infancia sin destino /Julio Scherer García
Privatización carcelaria: Los reos, negocio rentable /Rodrigo Vera

VIOLENCIA
Las cuatro batallas de los nuevos “halcones” /Arturo Rodríguez García

NARCOTRáfico
El noreste, tumba de extranjeros /Juan Alberto Cedillo
Amenazados, miles de mexicanos buscan asilo en Estados Unidos /Emilio Godoy
Evocación del calderonismo: no pudimos frenar la violencia /Jorge Carrasco Araizaga
Nuevo León: La ficción de la reducción criminal /Luciano Campos

LA TRAGEDIA / guerrero
La Montaña, hambrienta y discriminada /Marcela Turati y Ezequiel Flores
13 mil indígenas desplazados /Marcela Turati y Ezequiel Flores
Televisa acalla a Bozzo, pero sus negocios con gobernadores continúan /Jenaro Villamil

PolÍTICA
Bancomer, bajo investigación por el financiamiento a Peña Nieto /Jesusa Cervantes

REFORMA hacendaria
El SAT de defiende: El objetivo, frenar el abuso empresarial /Carlos Acosta Córdova

ANÁLISIS
Pagaré más impuestos cuando... /Sabina BermanPreventivo /NaranjoMafias y mafiosos /Denise DresserLos veneros de petróleo... /Javier SiciliaEl retorno de Fausto /Ernesto Villanueva
La guerra de Francisco /Bernardo Barranco V.
Otro año perdido /Axel Didriksson
Siria en su laberinto /Olga Pellicer

INTERNACIONAL
COLOMBIA: La estrategia antidrogas condiciona la paz /Rafael Croda
CHILE: La campaña que derrotó a Pinochet /Francisco Marín
Lección de Chile para Egipto /Ariel Dorfman

DEBATE
La reforma energética, vista por Krauze y Ackerman
inventario
Álvaro Mutis: Recuerdos del tiempo viejo /JEP

CULTURA
Indigna la “ocurrencia” de intervenir El Caballito: Zaldívar /Judith Amador Tello

Páginas de crítica
Arte: La Esmeralda de Televisa /Blanca González Rosas
Música: La Cenicienta de Rossini /Mauricio Rábago Palafox
Teatro: The Jöker, Jack. La última carcajada de Heath Ledger /Estela Leñero Franco
Cine: Miradas múltiples /Javier Betancourt
Televisión: Gastronautas /Florence Toussaint
Libros: El polícia, de Rodríguez Castañeda /Miguel Ángel Flores

ESPECTÁculos
El éxito de Derbez, por “abuso” del cine de denuncia /Columba Vértiz de la Fuente

DEPORTES / BOXEO
El teatrito se cayó /Beatriz Pereyra
Termina un cacicazgo, comienza la incertidumbre /Raúl Ochoa Palabra de Lector
Mono Sapiens /Ecos del 68 /Helguera y Hernández

El mundo de la infancia sin destino

Julio Scherer García

Niñez interrumpida, adolescencia amargada, juventud frustrada... Procedentes de los barrios depauperados, de la sordidez de calles que carcomen, los menores delincuentes que llegan a los centros de encierro (eufemísticamente llamados en el Distrito Federal Comunidades de Tratamiento Especializado para Adolescentes), lo hacen con el futuro cercenado, frutos como son de la injusticia que prevalece en un país en el que la miseria y el abandono se entreveran con la riqueza y la ostentación. Para su nuevo libro, Niños en el crimen, Julio Scherer García se sumergió en los expedientes de esas instituciones de reclusión y entrevistó a jóvenes, hombres y mujeres, acusados lo mismo de robo que de asalto y aun homicidio, para introducir a los lectores en el alma de seres humanos sin destino posible. Adelantamos fragmentos de la obra ya en circulación, publicada por Random House Mondadori, bajo el sello de Grijalbo.

El crimen devora a los adolescentes. Hay muchos encerrados, pero hay más fuera de prisión. He leído que a los menores internos los inclina malévolamente el instinto oscuro de matar por matar. Para ellos la vida es una abstracción; la muerte, un dato de la realidad. En ellos no hay agravios mayores, no hay venganzas. En sus vidas la ignorancia es la única nada que poseen. No son como los adultos, que asesinan por pasiones amorosas, por pendencias irrefrenables, por el negocio de la droga. Pero los adolescentes, a la zaga, aprenden.

En los documentos que conocí y en las conversaciones a las que tuve acceso, leí y escuché que los adolescentes proceden de familias desintegradas, con padres y padrastros violadores, con madres prostitutas que alquilan su cuerpo por placer, por hastío o por hambre. La ostentación que se mira en la calle y se exhibe en la tele, los degrada. En el círculo de sus inmensas carencias, inaccesible el trabajo y el estudio para ellos, su pobreza es su riqueza, no tienen manera de enfrentarla. Simplemente, matar el tiempo, matar la existencia.

Reviso los legajos que tengo en mis manos. Muchos jóvenes delinquen desde los 12 o 13 años, remota aún la mayoría de edad, o a los 17, a punto de adquirir su plena responsabilidad ante la ley. Sin un hogar que los apoye, no tienen un lugar donde resguardarse. Aun en libertad, transitan por la época de los tragos baratos, la mariguana, los inhalantes. Estarán cerca la cocaína y las combinaciones tóxicas que nublan la razón. Saben que vivirán poco, pero es el precio que les gusta pagar. “Poco tiempo pero a gusto”, dicen.

En los papeles que leí acerca de Erick Gutiérrez Hernández: nació el 11 de abril de 1994. Tiene 17 años y ya es reo por homicidio calificado. Ingresó a reclusión el 3 de septiembre de 2011. Erick pertenece a una familia desintegrada de bajos recursos, a la sombra de su madre. Su padre y tres de sus tíos se encuentran encarcelados en el Reclusorio Sur.

Según los criterios de psicólogos y especialistas que se ocuparon de su caso, este muchacho fue diagnosticado con dependencia a múltiples sustancias tóxicas y

trastorno de la personalidad.
Erick se emborrachaba con sus amigos. Uno de ellos le reprochó que llevara droga consigo, lo cual le molestó tanto al grado de responder a la llamada de atención con golpes. Como la situación no le era ventajosa, los otros amigos lo ayudaron hasta dejar inconsciente al desventurado sujeto, a quien posteriormente subieron a una camioneta y tiraron en el kilómetro 41.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec.
Ya en el suelo, para asegurarse de que estaba muerto, lo golpearon en el pecho y en el cuello con un "talacho", una especie de zapapico utilizado en albañilería.
En los casos de los crímenes que conocí no siempre están presentes las drogas y el alcohol. Sí tienen un gran peso en la oscuridad del mundo infantil, pero existen casos que van más allá de cualquier explicación. Hay muchos ejemplos sobresalientes de madres prematuras que no conocieron la droga ni el alcohol.
De los niños y los adolescentes asesinos que matan con bravatas de hamponería, sería imposible omitir la degradación en la que sobreviven: hacinamiento, insalubridad, violencia, ignorancia, hambre, sed…
A todo lo anterior habría que agregar la estructura de los niños, su carácter, su temperamento, su mundo emocional. ¿Por qué, asesinos, corren el riesgo de acabar consigo mismos? Es sabido que el crimen arrastra al crimen, como la corrupción a la impunidad, como la ignorancia a la oscuridad.

Jocelin Méndez Becerril

Jocelin es originaria del Distrito Federal. Nació el 8 de febrero de 1997 y es hija del señor Dinar Méndez Vázquez. No hay datos sobre su madre.
Jocelin concluyó sus estudios de secundaria en la misma colonia en la que vivía con su padre, la Vista del Pedregal, en Tlalpan. Actualmente tiene 16 años de edad y profesa la religión católica.
Una noche de abril de 2012, la adolescente inició labor de parto en su domicilio y dio a luz a una niña que, según las pruebas existentes, respiró con normalidad fuera de la cavidad uterina. Sin embargo, Jocelin introdujo a la recién nacida en una bolsa de plástico y la arrojó con fuerza a la casa de un vecino, quien dio parte a las autoridades.
El producto sufrió traumatismo craneoencefálico que, a juicio de los peritos, le provocó la muerte.

Irán Geovanny Trejo Carreño

El Pelón era un joven alegre. Hoy tiene 16 años de edad y se encuentra recluido en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes por el delito de homicidio. La medida de seguridad le fue impuesta el 19 de septiembre de 2012. El diagnóstico clínico criminológico determinó trastorno asocial de la personalidad con rasgos de un posible trastorno psicótico.

El domicilio donde ocurrió su detención se ubica en la calle Ferrocarriles Nacionales número 12, en Azcapotzalco. La familia está constituida por su padre, Fabián Trejo Ramírez, jardinero de oficio, de 52 años, residente en Estados Unidos; Socorro Carreño Bueno, de 39 años, madre dedicada a las labores del hogar; Luis Fabián, jardinero como su padre, de 21 años de edad; Abraham Josef, de 18 años, estudiante de preparatoria, e Irán Geovanny, quien apenas cursó el primer año de secundaria. Uno de sus familiares, su primo materno, actualmente se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
El día de los hechos, Karla, amiga de El Pelón, lo había invitado a su casa. Ahí abrió un frasco que contenía 10 pastillas. Le regaló cuatro a su amigo mientras ella consumía el resto. Pasaron la tarde juntos y ya de madrugada decidieron abordar un tráiler que se hallaba estacionado frente a la casa de Karla. Subieron a la cabina para tener relaciones sexuales.
Durante el acto, ella molestó verbalmente al Pelón, por torpe en el amor. Él, drogado y agresivo, ahorcó a su amiga con una prenda de vestir y con un trozo de madera punzocortante la picó por diversas partes de su cuerpo.

Ireli Carolina Briseño Pérez

La Yeya, como le decían de cariño, actualmente tiene 16 años de edad. Es originaria del Distrito Federal, de la colonia Pueblo de los Reyes, en Coyoacán, donde residía antes de ser consignada.
Vivía con su madre, Candelaria Pérez Sánchez, de 50 años de edad, y con sus hermanos, en un departamento modesto. Su padre tenía el oficio de pintor automotriz y había abandonado a Candelaria en cuanto dio a luz a La Yeya. La familia estaba desintegrada y atravesaba por una situación económica precaria. El hermano mayor fungía como proveedor de la familia, pero lo que ganaba ya no alcanzaba para el sustento del hogar. Ireli Carolina no pudo terminar la secundaria.
La Yeya refiere que sufrió dolores estomacales muy intensos durante varios días. Tenía miedo de hablar con su madre o con su hermano, a pesar de que había una buena comunicación entre ellos. Hasta que la madrugada del sábado salió al baño de su casa, que compartían con varios inquilinos de la vecindad. Permaneció recostada en el piso frío hasta que sintió un bulto que salía de sus entrañas. Miró estupefacta al bebé que yacía en el suelo. Ella argumentó que ignoraba su embarazo, puesto que nunca dejaron de presentarse sus periodos menstruales.
Asegura que, estando en el baño, se le nubló la vista y sólo pudo regresar a su casa hasta que se le pasaron los mareos. Descansó el resto de la noche. Al día siguiente, los vecinos encontraron el cadáver del recién nacido en una coladera y denunciaron el hecho ante las autoridades que, luego de una rápida investigación, detuvieron a la adolescente, quien fue acusada de homicidio simple.

Javier Eduardo Pascual Montoya

El Pascual se encontraba solo en su domicilio y pudo observar por la ventana que su vecina se encaminaba a la tienda. A su regreso, la invitó a entrar a la casa con el pretexto de que le iba a hacer un obsequio. Ella cayó en la trampa, y en la cocina, de espaldas a las escaleras, Javier la golpeó en la cabeza. La muchacha se desplomó sobre los escalones, inconsciente. El muchacho aprovechó el momento para hacerse del tensor que estaba en la mochila de herramientas de su padre. Arrastró a la niña por los peldaños hasta la construcción, aún en obra negra, de un inmueble contiguo a su casa, desierta. Ahí, la violó y completó su crimen sin omitir resquicio alguno de su víctima. Ella no reaccionó. Entonces, el malhechor colocó una reata en el cuello de la muchacha y jaló fuertemente la cuerda hasta que la mató por asfixia.

Víctor

Desde pequeño Víctor padeció las agresiones de un padre alcoholizado. En ocasiones lo enviaba al hospital. La primera ocurrió a sus siete años, víctima de golpes en el cuerpo propinados con un cable de acero. La segunda, a los 10, cuando su padre le encajó unas pinzas en la pierna. La madre de la criatura no intercedía por él. El miedo la paralizaba.

Posteriormente, Víctor fue expulsado del kínder como consecuencia de las golpizas que les propinaba a sus compañeros. En la primaria imponía sus hábitos. Ya en sexto grado, luego de una reprimenda de la maestra por el mal comportamiento de su alumno, el papá de Víctor golpeó a la profesora en pleno rostro y, ya en el piso, la pateó. El muchacho fue testigo de esa escena.

En la secundaria, fue expulsado por sus incesantes pleitos con alumnos y profesores. Junto con su padre, trabajó un tiempo en un comercio de herramientas. Desde los 15 años robaba a clientes habituales y ocasionalmente a peatones.

Ingresó a San Fernando por secuestro y homicidio agravado, delitos que cometió en complicidad de dos muchachos mayores que él y de sus padres. La participación de Víctor en el crimen fue directa: convenció a un niño de cinco años de edad para que lo acompañara hasta una casa que rentaban en Iztapalapa. Ahí mantuvo al chiquito durante una semana hasta que, todos juntos, adolescentes y adultos, decidieron matarlo. Víctor amarró de pies y manos al pequeño y le inyectó ácido muriático en diversas partes de su cuerpo.

Los padres de Víctor recibieron una larga sentencia. La de Víctor fue de cinco años. Lo protegió su minoría de edad.

Arturo

Hijo de una familia disfuncional como consecuencia de la separación de los padres, Arturo se fue a vivir con su mamá y sus hermanas mayores a la casa de la

abuela materna. La madre trabajaba en una casa, cordial la vida cotidiana.
A los pocos años de su separación, la señora se unió con otro hombre. En ese momento comenzó una relación violenta entre ella y su hijo. Al ingresar a la secundaria, Arturo se inició en el alcohol y la mariguana. Su madre no tardó en expulsarlo de un hogar que los había unido durante 16 años.
La vida de Arturo cambió. Empezó a trabajar como chofer y a ganar algún dinero. Pero cada vez le gustaban más las drogas.
Antes de su detención, ebrio y drogado, asistió a una fiesta en compañía de una chica. Al salir, Arturo le propuso que tuvieran relaciones sexuales. Ella se negó y él la asió del cuello, hasta provocar su desvanecimiento. Después le impuso la cópula vaginal y le exigió que se hincara. Le colocó la cabeza sobre un escalón del lugar donde consumaba su delito. Ahí la molió a patadas. No satisfecho, rompió una botella de vidrio y le cortó el cuello.

Ariana

Ariana Basurto López ingresó al reclusorio femenil a los 17 años. Ahora tiene 20 y ahí sigue. Se ve sobrada de peso, sobrada de juventud y sobrada de pena. Decido tratarla como lo que es: una mujer mayor de edad.
—¿Extrañas a algún muchacho?
—Sí, pero aquí no están permitidas esas visitas. Aquí no nos dejan.
La sexualidad entre adolescentes hoy es un hecho desbordado. Las madres niñas se multiplican. De una de las paredes del departamento en el que vivo cuelga una litografía de David Alfaro Siqueiros, “La Madre Niña”, que data de 1957. A pocos sorprende mirar en la calle a criaturas hasta de 12 años con niños a cuestas, amarrados éstos con un rebozo para que ellas puedan conservar las manos libres y pedir limosna.
Pienso en la represión que padece Ariana. Por fuera, la cárcel. Por dentro, otra cárcel. Y en el futuro, año y medio más de un encierro que le cierra la vida con doble candado.
Me llega una voz sin altibajos:
—Homicidio.
—¿Me quieres contar?
—Al principio ocurrió porque yo salía a fiestas. Una vez me invitaron a un convivio, ¿no?, al que fui. En el convivio estaba un señor ya grande, como de 45 años, que vendía droga y ese día… —miro a los ojos de esta mujer y mis ojos resbalan a la nuez de su garganta: algo se le atora—. En Tláhuac, en la delegación Tláhuac. Estábamos en la fiesta y pues todo el día convivimos, ¿no? Al siguiente día, al despertarnos, estábamos en su casa, ¿no? Y de ahí ese señor no nos dejaba salir.
—¿A quiénes no dejaba salir?
—A otra chava y a mí.
—¿Conocían a ese señor?
—Más o menos.

—¿Permanecieron en la fiesta por voluntad propia o no?
—Sí.
—Por voluntad propia.
—Sí.
—¿Cuántos años tenías?
—Dieciséis.
—¿Y tu amiga?
—Diecisiete.
—Él, ¿qué hacía?
—Vendía droga. Adentro se drogaban. Le iban a empeñar cosas y así. Nosotras no íbamos con la intención de nada. Él se drogaba; hacía los chochos. Estaba como loco ese señor y no nos dejaba salir cuando quisimos irnos. Estuvimos ahí como una semana y media.
—¿Secuestradas por él?
—Es que también había otro, el que llevaba la droga.
—¿Abusó de ustedes?
—De mí no. De la otra chava, sí. Ya cuando pasó la semana y media entraron dos amigos de nosotras a comprar droga y nos vieron ahí. Ese día en la noche pedimos de cenar. El señor se puso al lado mío y cuando se iba a parar a inhalar sus chochos, se le cayó la pistola. Entonces yo me paré, tomé el arma y disparé.
—¿Te arrepientes?
—No. Y no es que yo sea mala persona o que me enorgullezca de lo que hice, pero ya eran muchas cosas las que me hacía. No sé. Ya tenía demasiado coraje por esa persona.
—¿Lo volverías a hacer?
—No, es que… Hasta ese día agarré una pistola. Fue muy inesperado. Ese día fue más la impotencia de todo lo que me había hecho. Porque yo estaba bien mal. Ya no aguantaba más, porque esos abusos eran todos los días, en la mañana y en la noche. Cada que se le antojaba o cada vez que yo no quería hacer algo, me pegaba. Entonces me entraba la desesperación. Pero no lo volvería a hacer.

Privatización carcelaria Los reos, negocio rentable

Rodrigo Vera

Del delirio privatizador que caracteriza a gobiernos panistas y priistas no se ha escapado ni siquiera el sistema penitenciario nacional. Además de ser “ilegales” e “inconstitucionales”, la construcción y el control de cárceles por parte de la iniciativa privada han demostrado su fracaso en otros países, dice a Proceso Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde luego, lo anterior no detiene los apetitos empresariales de los Slim, los Vázquez Raña, los Aspe o de los Hank...

“La privatización de las cárceles, que se les están otorgando de manera muy confidencial a los empresarios, es totalmente ilegal porque violenta no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales en la materia firmados por México”, asegura categórico Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Entrevistado en su cubículo de ese centro académico, el especialista agrega:

“El artículo 18 constitucional estipula claramente que el Estado debe hacerse cargo de las prisiones y de toda la cuestión penitenciaria. Sin embargo, estamos viendo que el Estado evade esa responsabilidad al entregar a la iniciativa privada el control de algunas prisiones. Está negando y violentando la Constitución.

“La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que no deben privatizarse las prisiones, cuyo objetivo final debe ser reeducar y reintegrar al reo a la vida social, meta muy contrapuesta a la de la empresa privada, interesada solamente en convertir a los reos en un negocio rentable.”

–¿Qué documentos o convenios de la ONU marcan este lineamiento?

–En 1977, las Naciones Unidas expidieron las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, donde quedó marcado ese camino de la reinserción social, e incluso se acordó corroborar su cumplimiento. En ningún punto se le dio cabida a la empresa privada, precisamente por sus fines de lucro. Desde entonces se adoptaron estas reglas mínimas, que fueron firmadas y ratificadas por México.

“Todavía en una reunión de 2002 realizada por la ONU, se emitió el Informe del grupo de trabajo sobre la administración de justicia, donde se censuró a algunos gobiernos de América y Europa por incumplir los acuerdos pactados al permitir el funcionamiento de cárceles privadas y de esta manera reducir las obligaciones asignadas al Estado.”

Para afianzar sus argumentos, Barrón Cruz busca entre sus archivos puestos en el escritorio, los libreros y la computadora. Encuentra algunas conclusiones de especialistas del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), entre ellas la del encargado de este organismo, Elías Carranza, quien hizo la siguiente consideración: “Sería un grave error tratar de resolver la situación de horror que se vive en los centros de América Latina privatizándolos”.

Barrón Cruz deja sus archivos, se dirige al reportero y declara enfático:
"Como puede darse cuenta, los peritos de la ONU coinciden en que la privatización no resuelve los problemas, sino todo lo contrario, los agravan más; las cárceles privadas tienden a ser más violentas que las públicas, la rehabilitación no se cumple, se violan los derechos humanos, aumentan los suicidios y el tráfico interno de estupefacientes sigue dándose.
"Así lo demuestra la experiencia en otros países, como Estados Unidos y Chile. ¡Está comprobadísimo! ¡Demostrado hasta la saciedad! Y pese a ello, en México se empezaron a abrir las cárceles a la iniciativa privada a partir de la pasada administración de Felipe Calderón, proceso que continúa en el actual sexenio."
–¿Cuántas prisiones están actualmente en manos de la iniciativa privada? ¿Qué empresas las manejan?
–¡No lo sabemos! Toda esa información la tenía en el sexenio pasado la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública federal, y hoy la tiene la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Pero esa información se maneja confidencialmente. No la dan a conocer.
"Obviamente que la comisión debe tener un listado completo de las prisiones no sólo federales, sino también estatales y municipales que ya están manejando algunas empresas privadas, así como otra lista con el nombre de esas empresas."
–¿Esa comisión, a cargo de Manuel Mondragón y Kalb, es entonces la que concentra toda esa información?
–Sí, como también la tiene la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que aglutina a todos los directores de las cárceles del país, quienes se reúnen periódicamente para tomar acuerdos sobre las políticas penitenciarias a seguir.
–¿Debe ser confidencial esa información? –se le pregunta.
–No. En mi opinión no debe ser confidencial. Tenemos derecho a saber cuántas cárceles están en manos de la iniciativa privada y qué empresas las están manejando. La autoridad no sólo está violentando la ley, sino que también nos oculta información.

Alta sobrepoblación carcelaria

Barrón Cruz señala que en el país existen 416 prisiones, diseñadas para albergar a 196 mil 742 internos. Sin embargo, indica, la población carcelaria actual es de 244 mil 960 personas, por lo que hay una sobrepoblación de 48 mil 218 reclusos.
Con base en estos datos, el investigador explica:
"Si se tiene una sobrepoblación de más de 48 mil reos, necesariamente se deben construir más cárceles para albergarlos. Es aquí donde el gobierno dice: 'Esa cantidad de presos te los dejo a ti, iniciativa privada, encárgate de ellos'"
–¿La lógica es dejarle a la iniciativa privada la sobrepoblación?
–Puede ser la lógica gubernamental. Es muy probable. Aunque falta saber cuántas prisiones planean construirse para esa sobrepoblación, tomando en cuenta que las prisiones podrían ser de, digamos, alrededor de 2 mil 500 internos cada una, por dar una cantidad razonable.
"Y aquí otra vez saltan las interrogantes: quién las va a construir, quién las va a

manejar y en qué territorios estarán, porque este punto también es importante. Por lo general las zonas donde se construyen las prisiones se van poblando muy rápidamente, ya sea por las familias de los reclusos, los custodios o del personal administrativo, que requieren de urbanización y de servicios.

"Pongo por caso el megacomplejo carcelario de Puente Grande, Jalisco, donde hay una cárcel federal, otra estatal, una para mujeres y otra preventiva. A esa zona llegó a vivir muchísima población, a la que se le tuvo que dotar de servicios. De manera que, para las empresas que construyen prisiones, la urbanización del entorno puede resultarles un negocio incluso más lucrativo que la cárcel misma."

Maestro en ciencias penales con especialidad en criminología por el Inacipe, Martín Barrón es conferenciante, imparte cursos y seminarios y es autor de las investigaciones Una mirada al sistema carcelario mexicano; Policía y seguridad en México, y Guardia Nacional y Policía Preventiva: dos problemas de seguridad en México, entre otras.

El pasado 11 de septiembre participó en el foro Perspectivas de la Reinserción Social y de la Privatización del Sistema Penitenciario Mexicano, realizado en el Inacipe y en el que la comunidad académica ya empezó a abordar el tema de las cárceles privadas en el país.

Entre los ponentes estuvieron Luis González Placencia, quien entonces todavía era ómbudsman del Distrito Federal; la subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, Mayela Almonte Solís, y los investigadores Daniel Cunjama y David Ordaz.

Barrón aclara:

"No es lo mismo subrogar que privatizar las prisiones. Es muy común que en algunas cárceles se subroguen a algunas empresas la lavandería, la cocina u otros servicios. Eso siempre se ha dado. Pero la privatización es muy distinta; implica que desde la construcción, la administración y toda la gestión de la cárcel quede en manos de particulares."

–Esto se está dando en México...

–Sí, pero ese modelo de prisión fracasó en los países donde se ha implementado. Aquí en México las empresas utilizarán la mano de obra de los reclusos. Sus ganancias saldrán del trabajo carcelario. Y uno se pregunta: ¿cuáles serán los derechos laborales de los reos?, ¿qué salario se les dará?, ¿tendrán reparto de utilidades, primas vacacionales y aguinaldos?

–¿Tendrá que modificarse entonces la legislación laboral?

–Por lo pronto, si ya de entrada se está violando la Constitución, de paso se están violando otras leyes más. Y para colmo, ninguna empresa mexicana tiene experiencia en el manejo de prisiones. ¡Ninguna!

Hank González, en el negocio

El joven empresario Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, ya tiene bajo su mando el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que invirtió mil 200 millones de pesos en asociación con la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de la familia Quintana.

Hank también financió dos centros penitenciarios en el Distrito Federal.
Hank González pertenece al llamado Grupo Atlacomulco, al igual que el presidente Enrique Peña Nieto. Es nieto del profesor Carlos Hank González por el lado paterno, y del empresario Roberto González Barrera por el materno. Algunos miembros de su familia –que posee casas de juegos de azar– se han visto involucrados en escándalos por fraudes y acopio de armas.
Carlos Slim, considerado por la revista Forbes como el segundo hombre más rico del mundo, tampoco quiere quedarse atrás en el negocio carcelario. Firmó un acuerdo para participar en la construcción de dos centros penitenciarios: uno en Morelos y otro en Chiapas.
Esta participación la tenía la desarrolladora de vivienda Homex, que decidió vendérsela a Grupo Financiero Inbursa y a Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), ambas de Carlos Slim.
El magnate Olegario Vázquez Raña, dueño del periódico Excélsior y de los hospitales Ángeles, también está metido en el negocio a través de su empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), que construye penales en Durango y Michoacán.
Por su parte ICA –que dirige Alonso Quintana– ya construyó el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Sonora, regido por el esquema empresarial Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
Algunas compañías más que intervienen en el negocio son Tradeco, Arendal, La Nacional y La Peninsular, entre otras. Construyen prisiones federales y estatales en el Distrito Federal, Coahuila, Chiapas, Durango, Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán…
Y Pedro Aspe Armella –mentor del Grupo Atlacomulco y quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– se encarga de diseñar proyectos de inversión carcelaria a través de su empresa Protego Asesores (Proceso 1906).
El proyecto de privatizar las prisiones arrancó en el sexenio pasado y estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP). Hace cuatro años, el entonces subsecretario del Sistema Penitenciario Nacional de esa dependencia, José Patricio Patiño Arias, declaró a Proceso que el plan era construir para los reos del orden federal “por lo menos 45 mil nuevos espacios, que conseguiremos mediante la ampliación de nuestras instalaciones, pero sobre todo de la construcción de 12 nuevos penales, que levantarán empresas privadas confiables y solventes”.
El esquema –dijo– consistía en que las empresas privadas construyeran las prisiones y luego las administraran por un periodo de unos 20 años, al término de los cuales se entregarían al gobierno federal, como en el caso de las autopistas concesionadas. Advirtió que, por motivos de seguridad, a las empresas se les entregarían las prisiones por “adjudicación directa” y no mediante concurso (Proceso 1704).
Ya en este sexenio, Modragón y Kalb se hizo cargo de las prisiones federales y continuó el proyecto calderonista. En marzo pasado reveló que a la iniciativa privada se le encargó la construcción de ocho cárceles; dos ya estaban

terminadas y seis en construcción.
Elogió así las ventajas de la prisión privada: “Las fallas son tan poco sensibles que no se conocen. En ningún caso hay autogobierno ni manejo interno de estupefacientes ni violaciones a los derechos humanos”.
Y adelantó que, aparte de los ocho centros penitenciarios federales ya otorgados, se le pediría a la iniciativa privada la construcción de otros 10.
Martín Barrón comenta al respecto:
“Al comisionado le falta informar a qué empresas se les están dando las cárceles y qué capacidad tendrá cada una de ellas, entre otros puntos. Y es falso eso de que en las prisiones privadas no se violan los derechos humanos. También está por verse la reacción de los grupos del narcotráfico que controlan muchos penales. No creo que se vayan a quedar con los brazos cruzados.”
Explica: “Se justifica el esquema de estas cárceles con el de las carreteras concesionadas a la iniciativa privada, que después de ser explotadas por años se las darán al Estado. Pero en toda mi vida jamás he visto que una carretera concesionada se entregue al gobierno. Igual puede ocurrir con las prisiones; los empresarios ampliarán una y otra vez los plazos de entrega con el argumento de que aún no recuperan sus inversiones.
“Hay una situación muy preocupante en el trasfondo de todo esto: no está clarificado qué tipo de sistema penitenciario nacional es el que se quiere. ¿Uno mixto, donde coexistan las cárceles públicas con las privadas y las subrogadas? ¿Uno más privatizado, donde tenga preponderancia el sector empresarial y la explotación de la mano de obra carcelaria…? No lo sabemos.”
–¿Es novedoso este esquema?
–¡No! ¡Todo lo contrario! En el siglo XIX, durante el proceso de industrialización, a los primeros a quienes se explotó laboralmente fue a los presos, por ser una población cautiva. Se dio el fenómeno de las llamadas “cárceles-fábrica”, que quedó bien documentado. El esquema ya existió hace dos siglos. Podríamos decir que nuestras autoridades penitenciarias son retrógradas en ese sentido.

Recomendación de la CNDH a Mondragón

Rodrigo Vera

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acaba de emitir la primera recomendación a una cárcel privada –el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, Sonora– debido a las "condiciones infrahumanas y peligrosas" en que viven sus internos, así como a las "deficiencias" carcelarias que son incluso "mayores" a las que maneja el gobierno.

Se trata de la recomendación 35/2013 y está dirigida al comisionado Manuel Mondragón y Kalb, por ser el principal responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en las cárceles privadas federales, como es ésta de Hermosillo, a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), propiedad de la familia Quintana.

Fuentes confidenciales revelan que la CNDH ya está preparando más recomendaciones dirigidas a otros penales federales manejados por empresarios, como los de Miahuatlán, Oaxaca, y Ocampo, Guanajuato, pues van en aumento las quejas a pesar de tener poco tiempo.

Por lo pronto, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ya envió la recomendación a Mondragón y Kalb. Ahí le dice sobre el Cefereso de Hermosillo, inaugurado en octubre de 2012 por el presidente Felipe Calderón:

"Ante la recurrencia en la recepción de quejas, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió a dicho centro de reclusión, en el que pudo constatar que la situación de las personas privadas de su libertad, así como las condiciones que imperan en ese establecimiento penitenciario, no son las idóneas para la privación de libertad en condiciones de una vida digna y segura de todos los ahí internos, además de que no hay actividades laborales, educativas ni deportivas, la vinculación social del recluso es inadecuada, se proporciona una limitada y deficiente atención médica a la población penitenciaria, no se cuenta con personal suficiente, por lo que no se llevan las acciones necesarias para la protección y observancia de los derechos fundamentales de las personas internas."

Para empezar, la CNDH señala que a la prisión fueron trasladados mil 849 reclusos provenientes de otras cárceles sin que se les haya avisado a éstos y a sus familias. Al llegar, los reos ni siquiera tenían "conocimiento del lugar en que se encontraban". Y todavía una semana después del traslado "permanecían incomunicados, pues no se permitía la visita de sus familiares ni de sus abogados por disposición de las autoridades federales". Esto provocó "la incertidumbre y la angustia" de las familias.

Indica que "los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de los reclusos, ya que constituyen un acto de molestia, además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, pues generalmente alejan al interno procesado o sentenciado del lugar más cercano a su domicilio".

Y menciona los penales de donde provenían los reclusos, localizados en Veracruz, Nayarit, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Distrito Federal y el Estado de México.

Universo restringido

El ingreso a los abogados defensores está muy limitado, situación que repercute en la "asistencia legal" de los internos, muchos de los cuales ignoran "cuál es su situación jurídica". Con esto se está violando el "derecho a la defensa" y el "derecho al debido proceso".

Todo lo anterior fue constatado personalmente por los visitadores de la CNDH, en enero, febrero y junio de este año, cuando realizaron recorridos por la prisión y entrevistas con los internos.

Estas visitas se hicieron a raíz –dice la recomendación— de "42 escritos de queja" que denunciaban violaciones a los derechos humanos en cuestiones de salud, legalidad, seguridad jurídica, trato digno y reinserción social.

De 31 páginas y fechado el pasado 25 de septiembre, el documento menciona que hay sobrepoblación en el penal, puesto que fue construido para 2 mil 538 internos, y actualmente aloja a 2 mil 841.

Y "la plantilla del personal, que incluye la Dirección General, el área Jurídica y Técnica, así como Seguridad y Custodia, es muy inferior a la necesaria para su adecuada operación".

Y en materia de salud, denuncia que "existen serias deficiencias en la prestación del servicio médico" y hay "desabasto de medicamentos". Ni siquiera se cuenta "con un cuadro básico de medicamentos" y "no hay programas de detección de enfermedades infectocontagiosas". Esto "trae como consecuencia que las enfermedades de los internos no sean atendidas de manera adecuada y apropiada, lo que implica que no exista una detección oportuna de enfermedades infectocontagiosas, crónico-degenerativas y bucodentales".

Sobre la alimentación a los reclusos, señala: "Aun cuando las reglas estipulan que el sistema penitenciario debe proveer todas las necesidades básicas de la población, en la práctica esto no sucede, tan es así, que la población se queja de la escasa cantidad de alimentos que reciben… los alimentos en ese centro penitenciario son insuficientes en calidad y cantidad".

En suma, señala la recomendación a Mondragón y Kalb, la reinserción social no puede darse en estas "condiciones infrahumanas y peligrosas" que padecen los internos. Recalca:

"El respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte son las únicas vías para la reinserción social."

La recomendación hace la siguiente referencia al alto costo de esta cárcel privada:

"El enunciado centro de reclusión corresponde a aquellos construidos y operados con la participación de particulares, cuyo costo asciende a ml 670 pesos por interno diario, bajo el modelo CPS (Contrato de Prestación de Servicios), y que no obstante su alto precio presenta similares deficiencias o incluso mayores que los centros dependientes del propio gobierno federal."

Ante la infinidad de quejas, la CNDH actualmente prepara más recomendaciones a otros reclusorios federales privados: entre ellos el de Ocampo, Guanajuato, manejado igualmente por ICA e inaugurado en noviembre de 2012; así como el de

-Miahuatlán, Oaxaca, administrado por la empresa GIA e inaugurado apenas en mayo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. Las nuevas recomendaciones serán emitidas a principios del año próximo, según reveló una fuente que pide no mencionar su nombre. Y agrega:

“Pese a su poco tiempo de operación, en estas instituciones privadas ya se están violando los derechos humanos de una manera brutal; son sólo grandes almacenes para guardar reclusos como si fueran cosas, sin ninguna intención de reincorporarlos a la vida social.”

–¿A los presos ahí no se les está utilizando laboralmente?

–En esas prisiones se levantaron grandes naves industriales, pero todavía no las echan a andar. Son el puro cascarón. Esas cárceles representan un gran negocio para las empresas y para los funcionarios gubernamentales que les están otorgado los permisos de manera discrecional… son resultado de alianzas político empresariales. L

Las cuatro batallas de los nuevos "halcones"

Arturo Rodríguez García

La policía secreta renació: civiles infiltrados y golpeadores –que suelen usar chamarras azules– han actuado violentamente el 1 de mayo, el 10 de junio, el 13 de septiembre y el 2 de octubre pasados. Son la muestra más burda de una ilegal escalada represiva contra los movimientos sociales, que incluye acoso en domicilios, detenciones "preventivas", utilización de ambulancias como patrullas y empleo de instituciones conciliatorias como aparatos parapoliciacos. En esta andanada la acusación contra grupos "anarquistas" despierta más sospechas que certezas.

El 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República, se inició una escalada represiva contra las protestas sociales que, operada por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), se vale del encubrimiento, la provocación, la brutalidad policiaca y la aparición de un grupo de civiles violentos no identificados.

Policías y encapuchados han embestido contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o transeúntes sin relación con el movimiento social.

Las agresiones fueron documentadas y denunciadas, pero han quedado impunes.

Fue el pasado miércoles 2 cuando se resumió todo lo que a lo largo de 2013 han señalado grupos que se asumen perseguidos por el gobierno capitalino: presuntos policías vestidos de civil que se infiltran en manifestaciones y las violentan, usan uniformes y ambulancias para pasar inadvertidos; encapsulamiento de granaderos a manifestantes, quienes sufren golpizas y detenciones arbitrarias.

La lista se amplía: policías y funcionarios capitalinos que hacen registro fotográfico de manifestantes, revisiones selectivas en el Metro y unidades de transporte público, acoso domiciliario y "detenciones hormiga" bajo cualquier pretexto previo a las marchas: así pasó el miércoles 2, cuando se les fincaron cargos por delitos contra la salud (narco) a cuatro jóvenes, presuntamente torturados.

A través del registro que víctimas, activistas y periodistas han realizado en medios tradicionales y en redes sociales, así como de imágenes obtenidas por Proceso, fue posible documentar nueve episodios de alta violencia en 2013. De esos, al menos cuatro implicaron la participación de civiles infiltrados como grupo de choque. Algo parecido a lo que pasó el 10 de junio de 1971, El Halconazo.

Hasta ahora, el gobierno no ha asumido la responsabilidad por la violación de garantías.

Infiltrados

El miércoles 2 la mayoría de los contingentes que conmemoraba la matanza de 1968 se abstuvo de incurrir en acciones violentas. Por el contrario, llamó continuamente a "no caer en provocaciones" y a mantener la paz en una marcha

que tradicionalmente termina en el Zócalo, tomado desde el pasado 13 de septiembre por fuerzas federales.

El operativo demostró que las tácticas denunciadas por miembros de diferentes colectivos y periodistas eran ciertas: policías vestidos de civil infiltrados entre manifestantes o realizando detenciones y propinando golpizas a manifestantes.

La brutalidad comprobada: un video difundido por Amnistía Internacional, localizable en YouTube como “Policías agraden a visores de derechos humanos”, muestra el momento en que el activista del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Víctor Carlos Banda, es tirado al suelo y pateado en el rostro por policías, aun cuando su chaleco e identificación son visibles. También del mismo órgano de defensores fueron agredidos Aracely Olivos, Xosé R. Figueroa, Simón Hernández León y Quetzalcóatl Fontanot, quien resultó lesionado.

No fueron los únicos. También estuvo Tonathiu Vidal, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Fue detenido por una mujer vestida de civil y salvajemente golpeado cerca del Caballito.

Aunque desde hace tiempo jóvenes de diferentes organizaciones habían denunciado que miembros de Concertación Política del GDF y policías se disfrazan de socorristas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), nunca hasta ahora se había mencionado a la Cruz Roja.

En entrevista con Proceso, Tonathiu Vidal afirma que tras la golpiza pudo identificarse como miembro de la ANAD. “Fue selectivo, de eso estoy seguro”, dice.

El abogado fue conducido primero a una patrulla y luego a una ambulancia de la Cruz Roja.

“Revísenlo, está bien”, dijeron los policías a los rescatistas quienes, por su parte, desestimaban los golpes pues no había sangrado.

Sin embargo, durante una hora lo mantuvieron retenido en la ambulancia y no quisieron decirle a dónde lo trasladarían. Sólo por la presión de activistas del Comité Cerezo lo llevaron a las instalaciones de la Cruz Roja de Polanco, donde fue puesto en libertad.

Casi en tiempo real, las estampas mostraron la brutalidad: El Universal publicó en su página de internet la imagen de un policía que apuntaba su escopeta lanzabombas de gas a la nuca de un hombre arrodillado y con los brazos en alto.

Efecto TV difundió el video de agentes que se ensañan contra comerciantes y civiles reducidos sin actitud violenta. Una y otra vez descargan su casco contra ellos, los embisten con su escudo y un civil acompañante de los policías los jalonea.

Los fotorreporteros de Proceso Miguel Dimayuga y Alejandro Saldívar atestiguaron los excesos. Las bombas de gases no se disparaban al suelo con fines disuasivos, sino al cuerpo de manifestantes. En imágenes documentaron cómo hombres vestidos de civil, presuntamente policías, realizaban detenciones.

La organización internacional Artículo 19 desplegó una campaña para documentar las agresiones a periodistas. El resultado: hasta el viernes 4 se tenía la cuenta de al menos 39 periodistas agredidos por policías capitalinos. Entre ellos hay un caso en el que agentes, vestidos de paisano, dan una golpiza a un reportero que

documentaba detenciones arbitrarias.
Los pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros se acumularon en las siguientes horas: Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, Red Todos los Derechos para Todos y decenas más condenaron lo ocurrido.
El saldo oficial de esa manifestación: 75 detenidos, 22 de los cuales fueron presentados al Ministerio Público.
La cifra estimada por colectivos como el Frente Oriente es del doble. Alrededor de 150 detenidos, muchos de los cuales no fueron ingresados: se les dejó ir debido al mal estado en que se encontraban por los golpes.

10 de junio

Tonathiu Vidal señala que las detenciones selectivas han sido una constante. Un caso notorio fue durante la conmemoración del 10 de junio.
Imágenes obtenidas por Proceso muestran que, ese día, motopatrullas tripuladas por policías vestidos de civil participaron en el operativo. Llevaban el número económico cubierto y no portaban placas.
Además, se observa cómo policías usan cámaras fotográficas.
La serie de enfrentamientos muestra la violencia de los manifestantes –quienes afirman que fueron provocados– y la brutalidad policiaca. Que por otra parte, en un momento sin confrontación, prepara piedras para enfrentarse con los manifestantes.
Ese 10 de junio, un funcionario de Concertación Política tiró a un ciclista para detenerlo junto con granaderos; un joven que muestra una cartulina pacíficamente fue sometido de manera violenta por los agentes; integrantes del Frente Oriente fueron pateados y, en el caso de Luna Flores, arrastrada varios metros por policías (Proceso 1922).
En entrevista, el director de Gestión Social de Concertación Política del GDF, Pedro Bello –quien fue retenido y golpeado por manifestantes el 10 de junio–, niega que él o su personal señalen, fotografíen, detengan o registren a manifestantes. Por el contrario, afirma, su labor consiste en facilitar el diálogo en toda problemática que se dé en la ciudad y contribuir a la resolución de conflictos. “No soy policía. Si fuera policía no estaría en este cargo”, asegura.
A través de imágenes de protestas, contrastadas con el directorio del GDF, fue posible identificar que efectivamente, en diferentes manifestaciones, el personal de Concertación Política, a cargo de Alejandro Marín Juárez Durán, fotografió y participó en detenciones.
Entre los identificados figura Juan Manuel Cholula Cambray, jefe de la Unidad de Base de Datos y Registro Estadístico.
Además del personal de Concertación Política, una fuente del gobierno capitalino asegura que los policías de civil que actuaron el 10 de junio, el 2 de octubre y en otras protestas pertenecen a la Dirección de Apoyo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del GDF.
Respecto de las detenciones selectivas, el caso más reciente ocurrió con José

Luis Ramírez, Irene Pérez, Antonio Carmona y Aztlali Cabrera, quienes desde hace semanas denunciaron que eran objeto de acoso en el plantón que mantenían en Ciudad Universitaria.

El pasado 2 de octubre, cuando se dirigían a la marcha conmemorativa, fueron detenidos a bordo de un autobús de transporte público. Diferentes medios de comunicación han mostrado como "antecedentes" de los detenidos su participación en la toma del CCH Naucalpan en febrero y la toma de rectoría de la UNAM en abril. Esta vez fueron acusados de narco por, presuntamente, llevar un kilo de mariguana.

El abogado Francisco Estrada, quien ha defendido diversos casos de detención arbitraria desde el 1 de diciembre de 2012, considera que se trata del mismo operativo, mediante el cual se criminaliza selectivamente a jóvenes.

Un caso similar ocurrió el 1 de septiembre, cuando se preparaban las protestas en el marco del primer informe de gobierno de Peña Nieto. El 31 de agosto, Julián Luna fue detenido por "infiltrados" que se hicieron pasar por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Este 2 de octubre no fue la excepción: al menos tres portales informativos consignaron la versión –con fuente anónima– de que el GDF "controlaría" a manifestantes desde sus domicilios, difundiendo los sectores a los que se dirigirían los operativos. Integrantes del Frente Oriente detectaron que dichas zonas eran precisamente las de integrantes de esa organización. Recurrentemente acusados de propiciar la violencia, optaron por no participar en la marcha conmemorativa, para evitar señalamientos.

Presuntos anarquistas

La imagen es clara. Un joven alto, de cabello largo, delgado con playera verde. Es el primero en lanzar piedras contra los granaderos la tarde del 10 de junio en el Zócalo. Una y otra vez arremete contra el contingente policiaco y, cuando otros lo siguen, se repliega. Durante la retención del funcionario Pedro Bello aparece siempre detrás, con los brazos cruzados.

Aparentemente es detenido, pero semanas después, el 1 de septiembre, aparece como uno de los que atacaron a los granaderos durante una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rumbo a San Lázaro, el día en que la organización gremial y otros contingentes expulsaron a los supuestos anarquistas porque pretendían reventar la protesta.

Ninguna organización consultada sabe quién es, como tampoco saben de muchos que participan violentamente en las protestas.

Nadie sabe… pero tanto autoridades como medios de comunicación los etiquetan como "anarquistas", pues con frecuencia muestran el símbolo de esa corriente en camisetas y banderas.

Aparecen entre contingentes pacíficos y atacan a policías, sucursales bancarias o emblemas de trasnacionales. Saquean tiendas y cuando la policía reacciona, termina deteniendo a quienes no forman parte de su contingente.

La confusión sobre ellos es evidente. Para aludir a sus acciones se refieren a la

organización Bloque Negro, y el gobierno capitalino los clasifica, por eso, en "bloques". Pocos saben que Bloque Negro no es una organización formal sino un conjunto de partidarios de la "acción directa" y colectiva.
El abogado Francisco Estrada añade: "Es un operativo policiaco de Estado, realizado por gente entrenada y adiestrada, que pretende llegar a los jóvenes que protestan. Cuando llegan a detener a los agresores, los entregan a los Cobra (grupo táctico), Concertación o granaderos".

Cronología de la represión

El 1 de diciembre, alrededor de 70 personas fueron detenidas –incluyendo numerosos manifestantes pacíficos o transeúntes sin participación en protestas–. Además, unas 25 personas resultaron heridas, entre éstas, Uriel Sandoval, quien perdió un ojo por el impacto de una bala de goma.
Los disturbios del 1 de diciembre marcaron también la aparición de grupos de encapuchados con métodos violentos, cuyos integrantes, a pesar de actuar frente a los grupos policiacos, no han sido detenidos, como sí lo son quienes participan en las protestas sin capucha.
El pasado 5 de febrero, una protesta en el CCH Naucalpan concluyó con intervención policiaca. Algo poco común, cuyo único antecedente se remonta al año 2000, cuando la policía desalojó a huelguistas de la Ciudad Universitaria.
Unas decenas de jóvenes marcharon por Insurgentes, del Parque Hundido a CU, el pasado 20 de abril. Fueron custodiados por un contingente de cientos de policías durante su trayecto. El Frente Oriente, el cual se solidarizó en aquella ocasión con la protesta, denunció las dimensiones de los operativos y la aplicación del llamado Protocolo para el Control de Multitudes, que consideran un instrumento represivo del GDF.
El 8 de marzo en Iztapalapa: Durante una protesta, un grupo de jóvenes fue atacado en Rojo Gómez y Ermita, con dos jóvenes detenidos acusados de ataque a las vías de comunicación, pero cuya causa no se sostuvo.
El 1 de mayo, el acoso policiaco fue videograbado por el Frente Oriente. Además de ponerles un marcaje personal durante su trayecto de arribo y de regreso, dos motopatrullas tripuladas por hombres vestidos de civil condujeron con violencia contra los jóvenes, que subieron un video bajo la etiqueta "Hostigamiento GDF marcha 1 de mayo".
El 1 de junio un grupo de jóvenes intentaba protestar en Los Pinos, pero en la estación Insurgentes del Metro los confrontaron los granaderos.
Las revisiones en el Metro se volvieron más agresivas desde el 13 de septiembre.
La marcha conmemorativa del Halconazo resultó en la detención de 22 personas, de las cuales siete fueron internadas en el Reclusorio Oriente. Ahora enfrentan juicio en libertad bajo fianza (Proceso 1922).
El 1 de septiembre pasado, durante las protestas por el primer informe de Peña Nieto, los enfrentamientos se repitieron. También el 13 de septiembre, durante el desalojo de los maestros de la CNTE del Zócalo, cuando un grupo de supuestos anarquistas se confrontó con la policía. En redes sociales fue denunciado un

contingente de civiles que llegó junto con la Policía Federal. No hubo explicación oficial.

Ese día, cuando el grueso del contingente magisterial iba en retirada pacífica rumbo al Monumento a la Revolución, los supuestos anarquistas salieron enfrentándose con los federales hasta que en el cruce de Eje Central y 16 de Septiembre desaparecieron. Los policías arremetieron contra los maestros. El saldo: 31 detenidos y siete enviados al reclusorio.

Con el operativo del 2 de octubre se superaron todos los registros también en cuanto a la cantidad de detenidos, tanto en la cifra oficial como en las estimaciones de las organizaciones.

Hasta el cierre de esta edición, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, evitó hablar sobre el operativo, pero desde el jueves 3 y en diferentes entrevistas el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, rechazó que policías vestidos de civil hayan detenido a manifestantes y aseguró: “Las detenciones son totalmente legales, sujetas a la norma, sujetas a derecho”.

tumba de extranjeros

Juan Alberto Cedillo

Ser extranjero no es garantía de seguridad en el noreste mexicano. Franceses, canadienses y chinos han sido víctimas de levantones y asesinatos. Otro tanto les ha ocurrido a estadunidenses: Veteranos de guerra, periodistas y hasta exagentes del FBI se reportan como desaparecidos. Pero estos casos en nada se comparan con la violencia casi genocida desatada contra miles de migrantes centroamericanos que sólo están de paso en el país; crímenes que, por cierto, a las autoridades parece no importarles un bledo.

SALTILLO, COAH.- Durante casi tres décadas los estadunidenses John Frank y Wanda Casias, de 76 y 67 años, respectivamente, recorrieron las pequeñas comunidades del municipio de Santiago, Nuevo León, predicando el evangelio. Ellos edificaron la primera Iglesia bautista fundamentalista independiente en la comunidad de El Cercado, unos 35 kilómetros al sur de Monterrey.
El 31 de enero de 2012 sus hijos encontraron a los dos misioneros asesinados en su domicilio, “con golpes en la cara y cada uno con un cable enrollado en el cuello”, precisó Jorge Domene Zambrano, portavoz de Seguridad de Nuevo León.
Este doble homicidio es uno más de los muchos casos criminales no resueltos en Santiago, municipio dominado por la delincuencia organizada.
En 2010 otra pareja de misioneros fue ejecutada en la carretera La Ribereña, la cual corre paralela a la frontera entre Tamaulipas y Texas. Los asesinatos obligaron a los religiosos de Estados Unidos “a reducir sus tareas o cancelar viajes”. Incluso algunas iglesias evangélicas comenzaron a enviar a sus voluntarios a campos de entrenamiento en seguridad, contó a la agencia AP John David Smith, director de la Asociación Misionera Bautista.
John y Wanda Casias engruesan las estadísticas de ciudadanos de Estados Unidos asesinados en el noreste de México: alrededor de 40 en los últimos tres años.
Oficialmente el consulado de Estados Unidos en Monterrey –el cual atiende a Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí– tiene documentados 25 homicidios de sus connacionales entre 2010 y 2013. Hay alrededor de 15 más reportados por autoridades y medios locales.

Desaparecidos

Este semanario solicitó a la embajada de Estados Unidos en México y al consulado en Monterrey información sobre el número de estadunidenses desaparecidos en los últimos tres años en el noreste mexicano.
Entre los reportados como secuestrados por el crimen organizado hay veteranos de guerra, periodistas e incluso exagentes del FBI. La cifra ronda el medio centenar.
El consulado aclara: “En cuanto a los desaparecidos será una cifra más difícil de

precisar, ya que muchos familiares no los reportan".
La mayoría de ellos ha desaparecido en Tamaulipas.
Uno de los casos más recientes es el del veterano de la Guerra del Golfo Armando Torres III, privado de la libertad junto con su padre, Armando Torres, y su tío Salvador Torres, por un comando.
El marino cruzó la frontera para visitar a sus familiares en el rancho La Barranca, cerca de Matamoros. La noche del pasado 14 de mayo llegó a La Barranca una camioneta con un comando a bordo. Testigos declararon ante las autoridades que minutos después ese vehículo fue visto seguido por dos más pertenecientes a la familia Torres, rumbo al poblado de Ramírez.
El secuestro de los Torres no fue informado por las autoridades mexicanas. El hecho no se conoció sino hasta que el FBI solicitó la intervención de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT).
Las pesquisas de las autoridades estatales arrojaron que el veterano de la marina estadunidense pudo ser secuestrado por integrantes de la familia Pecina Chaires, pues algunos de sus miembros tienen vínculos con el crimen organizado. Una fuente de la PGJT cuenta a Proceso que las investigaciones ahora están estancadas.
El 10 de diciembre de 2008 el estadunidense Félix Batista fue privado de la libertad en Saltillo por Los Zetas. Este exagente del FBI había sido contratado por empresarios saltillenses para que los asesorara en el tema de protección contra secuestros.
Los Zetas supieron que Batista "tenía en su poder una gran cantidad de información muy valiosa y decidieron quitarlo del mapa. Estaba obstaculizando los trabajos de la banda", dijo Rodrigo Esparza Cristerna, comisionado de la Policía Federal cuando se detuvo al capo que organizó el plagio.
El jefe de la plaza de Saltillo era Germán Torres Jiménez, El Tatanka o Z-25, de 29 años, uno de los fundadores de Los Zetas. Cuando ordenó el secuestro de Batista provocó una división en el grupo.
"Este hombre llevó a cabo el secuestro de Félix Batista por una decisión personal, sin consultar a los demás. Esto originó una diferencia con el jefe, El Z-40, quien decidió eliminar al Z-25", agregó Esparza Cristerna.
El Tatanka, perseguido por sus propios excompañeros, fue a ocultarse a Poza Rica, Veracruz, donde fue capturado por policías federales. Pese a la captura del autor intelectual del secuestro, Esparza Cristerna informó que el exagente del FBI continuaba en calidad de desaparecido.
Un caso más: el mes pasado buzos del agrupamiento de bomberos exploraron las aguas de la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León; buscaban a cuatro jóvenes desaparecidos hace más de cinco años. Uno de ellos vivía en McAllen y sus padres en San Antonio, Texas.
Óscar Noé Chavana Leal, Daniel Treviño Rodríguez, Julio Alberto Josué López Alonso y Leonardo Garza –este último de origen estadunidense– desaparecieron el 12 de enero de 2008. Ese día llegaron a bordo de una camioneta para dejar una embarcación en la zona conocida como Puntas Cristalinas. Después de las 19:30 horas fueron levantados por presuntos zetas.

El año pasado la madre de Julio Alberto López, Julia Alonso, protagonizó una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación y recientemente se plantó de nuevo ante esa dependencia para exigir que se busque a su hijo.

En respuesta, las autoridades federales comenzaron la búsqueda en la presa de La Boca. Pero las inmersiones de los buzos han sido infructuosas y los cuatro jóvenes permanecen en calidad de desaparecidos.

En Nuevo Laredo sicarios secuestraron al periodista estadunidense Zane Alejandro Plemmons Rosales el 21 de mayo de 2012, luego de que éste tomara fotografías de uno de los cotidianos enfrentamientos a tiros en esa ciudad. Esa noche un comando llegó por él a su cuarto de hotel. Desde entonces nadie lo ha visto.

La embajada de Estados Unidos en México respondió a la petición de Proceso precisando que no tiene cifras sobre el total de sus ciudadanos extraviados en México.

Pero otras fuentes pueden arrojar algunos datos. La página en internet del Departamento de Seguridad Pública de Texas reporta 728 personas desaparecidas; algunas de ellas en ciudades fronterizas con México, como El Paso y Laredo, y otras más cuyos rastros se perdieron en territorio mexicano. Como Angelio Rivera, jugador de futbol de 25 años; la última vez que se le vio fue el 2 de marzo de 2002 en Monterrey.

Entre quienes han sido levantados o secuestrados en México también hay chinos, franceses, españoles y canadienses.

Destaca la tragedia de la francesa Ludivine Barbier de Cázares, quien viajó a Matamoros con Rodolfo Ignacio Cázares, su esposo y destacado pianista y director de orquesta en Alemania. Ambos fueron secuestrados el 9 de julio de 2011 junto con 17 miembros más de su familia.

Ludivine y el resto de las mujeres y niños fueron dejados en libertad días después en el estacionamiento de un centro comercial de aquella ciudad tamaulipeca. Pero Cázares, su padre y otros familiares siguieron secuestrados. Y pese a que se pagó el rescate exigido, el músico y sus familiares no aparecieron.

Ludivine ha gestionado ayuda para rescatar a su marido ante los presidentes de Francia, Alemania y Estados Unidos, e incluso con Benedicto XVI. En México las autoridades mantienen silencio en torno al caso.

También desapareció en Tamaulipas el canadiense Marc Menard, de 44 años. El 12 de diciembre de 2012 salió de Laval, Quebec, a bordo de su camioneta rumbo a Yucatán.

Las investigaciones de las autoridades mexicanas arrojan que Menard fue secuestrado en Nuevo Laredo por al menos dos hombres armados, para robar su vehículo. Pese a la captura de uno de los secuestradores, hasta ahora se desconoce el paradero del canadiense.

El pasado 14 de junio criminales plagiaron en Monterrey a ocho ciudadanos de China. La comunidad china denunció en ese momento tres secuestros más de al menos otros nueve asiáticos.

En protesta, el 18 de junio 95% de los restaurantes de comida china en Monterrey cerraron y el cónsul general en México, Liang Jinan, presentó una denuncia antes

autoridades de migración.

Contra centroamericanos

Sin embargo la peor parte de este tipo de violencia la sufren los centroamericanos. Los Comités para Familiares de Desaparecidos en México de Honduras, Guatemala y El Salvador tienen documentados más de mil casos de desapariciones.

Los más de 50 refugios de la Iglesia mexicana para albergar a los centroamericanos que viajan al norte tienen documentada la desaparición de más de nueve mil migrantes en los últimos años.

La tragedia humanitaria ha sido registrada por responsables de los albergues–como Alejando Solalinde, en Ixtepec; Pedro Pantoja, en Saltillo, o Francisco Gallardo, en Matamoros–, quienes han denunciado esos casos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y autoridades locales.

Sin embargo una ejecución no fue reportada ante las autoridades: la de Miguel Villarreal, El Gringo, capo del Cártel del Golfo, quien le disputaba la plaza de Reynosa al ahora detenido Mario Rodríguez Treviño, Comandante X-20 o Mario Pelón.

El pasado 10 de marzo hubo varias horas de tiroteos entre sicarios de Mario Pelón y los de El Gringo Villarreal, apodado así por su origen estadunidense. Esa noche la ciudad se paralizó con narcobloqueos y por los enfrentamientos entre los delincuentes. El saldo fue de alrededor de 30 muertos.

Pero las autoridades tamaulipecas sólo reportaron el fallecimiento de un menor y un taxista, atrapados en medio del fuego; nada dijeron del resto de los muertos, entre ellos El Gringo Villarreal. L

Amenazados, miles de mexicanos buscan asilo en Estados Unidos

Emilio Godoy

Para los defensores de los migrantes mexicanos que buscan asilo político en Estados Unidos debido a la violencia en México, el país vive una "catástrofe humanitaria". Los desplazamientos, dicen, no han dejado de crecer desde 2008 y se cuentan por miles. Pero, lejos de atender a los solicitantes, las autoridades estadunidenses les ponen innumerables obstáculos. Uno de los casos críticos es el del exsoldado Víctor Hugo Tapia Madrigal y el del empresario zacatecano Antonio Medina, ambos amedrentados y agredidos físicamente por Los Zetas.

Víctor Hugo Tapia Madrigal padeció secuestro, amenazas y persecución por parte de Los Zetas. Eso lo llevó a buscar refugio en 2008 en Estados Unidos, donde lucha en los tribunales de ese país para lograr el estatus de asilado político.

El de Tapia Madrigal, quien llevaba tres años en el Ejército, es uno de los cientos de casos de connacionales que cruzaron la frontera para escapar de la violencia desatada por la llamada guerra contra el narcotráfico durante la Presidencia de Felipe Calderón. Ese fenómeno, que se agudizó desde 2008, hoy inunda los tribunales de Estados Unidos y preocupa a las organizaciones de derechos humanos de ambos países.

El 15 de mayo último un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, integrado por los jueces William A. Fletcher, Raymond C. Fisher y Raymond J. Dearie, determinó que la Oficina de Apelaciones Migratorias (BIA, por sus siglas en inglés) revisara el caso de Tapia, según el legajo 10-73700 consultado por Proceso.

Tapia ingresó al Ejército en 2005, cuando tenía 18 años. Después de un entrenamiento básico fue asignado a una base militar en Jalisco, donde participó en operaciones contra el narcotráfico durante dos años y medio. A mediados de 2007 tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a un jefe regional de Los Zetas y a nueve sicarios de esa organización.

Y aunque Tapia no participó en el operativo, apareció en televisión cuando vigiló el traslado del grupo del poblado donde fue capturado a Guadalajara.

Poco después pidió un permiso para descanso y salió de la base militar. Ya en la calle, dos enmascarados lo secuestraron en la parada del camión. Le cubrieron la cabeza y lo introdujeron en una camioneta, donde comenzaron a golpearlo con sus puños, botas y objetos contundentes. Le dijeron que lo iban a matar por su participación en el traslado de los zetas capturados.

Veinticuatro horas después fue liberado. Sus captores le pidieron informar a su comandante, Fortino Castillo León, que dejara ir a los sicarios; de lo contrario, serían ejecutados. El militar no le creyó.

Luego de un día de recuperación, Tapia fue comisionado durante tres meses a la localización y destrucción de sembradíos de mariguana. Al regresar a su base supo que los soldados que detuvieron a los zetas habían sido decapitados.

Abandonó las Fuerzas Armadas y se refugió durante unos meses en la casa de su familia. Pero cuando se enteró de la ejecución del comandante Castillo, huyó a otro pueblo. Meses después, ya en 2008, unos desconocidos le dispararon cuando caminaba por la calle. Entonces optó por irse a Estados Unidos.

En 2009 las autoridades de ese país iniciaron un procedimiento de deportación contra Tapia, quien pidió asilo político y tramitó un recurso para postergarla y ampararse bajo la Convención contra la Tortura, vigente desde 1987.

Para el abogado Carlos Spector –representante legal de solicitantes de asilo en el país vecino y quien ganó el primer caso en 1991–, situaciones como la de Tapia son parte de una "catástrofe humanitaria".

"Sigue viniendo gente de México y el gobierno estadunidense hace todo lo posible por desanimarla. En el puente fronterizo incluso la regaña; luego viene su detención prolongada. El mensaje para la comunidad mexicana es: Si pides asilo, te van a dar bote", comenta el abogado a Proceso vía telefónica.

Fundador en 2012 de la organización Mexicanos en Exilio, Spector representa a 250 personas, de las cuales sólo les cobra honorarios a unas cuantas. Con frecuencia, dice, activistas y defensores de derechos humanos de Michoacán, Coahuila y Veracruz le llaman para preguntarle sobre los procedimientos legales para buscar asilo.

En enero del año pasado, él logró que Saúl Reyes Salazar y su familia obtuvieran ese estatus, luego de que seis de los miembros de ésta fueron asesinados impunemente entre 2008 y 2011.

La activista Cipriana Jurado, de Ciudad Juárez, también obtuvo el asilo en 2011. Desde 2008 estuvo amenazada de muerte por protestar contra el despliegue militar en esa ciudad fronteriza.

Otro récord nefasto

Las estadísticas ilustran la magnitud del problema. Si en 2004 México ocupaba el escalón 21 en la lista en materia de refugiados, en 2007 ya era el número siete, detrás de Irak, Rusia, China, Serbia, Pakistán y Somalia.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el año fiscal 2007 ese país recibió 3 mil 133 solicitudes mexicanas; sólo aceptó 49. Sin embargo, en 2008 empezó la espiral que aún no cierra su curva: se registraron 3 mil 650 aplicaciones, de las cuales sólo 73 fueron aceptadas. En 2009 se mantuvo ese ritmo: 3 mil 855 solicitudes y 65 aceptaciones; en 2010 fueron 5 mil 98 peticiones, 49 de ellas aceptadas.

Para 2011 la estadística siguió escalando: 7 mil 616, de las que 107 resultaron positivas; en 2012 se recibieron 9 mil 206 peticiones; 126 fueron concedidas. Entre octubre de 2012 y junio pasado la cifra saltó a 14 mil 610 solicitudes; según los expertos, las aceptaciones no superan 5%.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, sostiene que este fenómeno no tiene precedentes. Antes, dice, cuando en Estados Unidos se hablaba de exiliados, por lo general se pensaba en africanos, asiáticos o sudamericanos.

“El sistema estaba hecho para lidiar con otros, menos con mexicanos –expone–. Solían ser refugiados económicos, gente buscando trabajo. Y tiene que ver no sólo con la existencia de guerra, cárteles y grupos criminales, sino también con la omisión del gobierno mexicano y sus aparatos de seguridad en su deber de proteger a los ciudadanos. La gente sale porque el Estado no puede protegerlos.”

Ariadna Estévez, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISAN-UNAM), asegura que la mayoría de los jueces objeta las peticiones por no apegarse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, no aplicables a víctimas de la delincuencia organizada.

La especialista distingue la ola de solicitantes de los noventa, quienes lo hacían por cuestiones políticas, y la de la última década, vinculada a la militarización de la política antidrogas, la impunidad y la corrupción. “En comparación con Colombia y China –dice a Proceso–, México tiene un trato menos favorable. Los solicitantes de asilo están atrapados en la relación bilateral. Estados Unidos responde a sus intereses de política exterior. México es un caso más”.

Estévez, quien efectuó un trabajo de campo sobre el fenómeno en El Paso, explica que los asilados son pobres o de clase media baja, con algunas propiedades o un capital modesto. Las razones de su huida, precisa, son la negativa a pagar extorsiones, exigencia de justicia, denuncia de corrupción o la colusión del Estado con los criminales.

Persecución sistemática

El empresario zacatecano Antonio Medina González, proveniente de una familia acomodada del municipio de Huanusco, donde dos tíos suyos y un primo fueron presidentes, es otra víctima de Los Zetas.

Antonio, quien quedó al frente de un rancho tras la muerte de sus padres en 1997, y con su hermano Francisco, son criadores de ganado y siembran agave. El 17 de diciembre de 2008, Antonio fue secuestrado cerca de su rancho de Huanusco por presuntos sicarios de Los Zetas, quienes lo trasladaron por carretera a la ciudad de Zacatecas. En el camino le preguntaron por su hermano Francisco, ciudadano estadunidense radicado en Novato, California, según su testimonio contenido en el expediente 10-73112 del Noveno Circuito de Apelaciones.

Durante el viaje, según Antonio, oyó cuando el conductor del vehículo conversó con policías en dos retenes. Al llegar a Zacatecas, sus captores le vendaron los ojos y le colocaron una bolsa de plástico sobre la cara. Permaneció secuestrado hasta el 28 de diciembre.

Durante ese periodo, contó, fue golpeado y sus custodios jugaron a la “ruleta rusa” con él; también lo molestaron sexualmente. Según el reporte médico, Antonio sufrió golpes, quemaduras de primer grado y la fractura de una costilla del lado izquierdo.

Francisco Medina contactó a su prima Martina, quien trabajaba para el gobierno de Zacatecas, a fin de localizar a su hermano. Martina le respondió que era muy peligroso ayudarlo, por lo cual le recomendó a un abogado de la Ciudad de México

de apellido López, quien suele trabajar como mediador en ese tipo de casos.
Francisco Medina le pagó a López 5 mil dólares y entregó otros 15 mil a los secuestradores para la liberación de Antonio. Al final, el litigante le dijo que habían sido Los Zetas.
Al mes siguiente, en enero de 2009, los secuestradores llamaron de nuevo al celular del empresario zacatecano para pedir más dinero, así como las escrituras de sus propiedades y vehículos.
Antonio Medina se fue de inmediato a Estados Unidos. Semanas después, en mayo de ese año, fue colocado en proceso de deportación por carecer de visa para entrar en el país. El empresario se quejó de la conducta de los policías durante su traslado de Huanusco a Zacatecas, e interpuso un recurso el 12 de octubre de 2010.
Sin embargo, el 13 de agosto último, la BIA emitió su veredicto. En 25 páginas sostuvo que por lo general los finqueros ricos y educados –como Antonio Medina– no eran considerados como grupo coherente bajo la Ley de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés).
Por casi 30 años, la BIA ha reconocido que la tenencia de la tierra puede formar la base de un grupo social particular dentro del significado de la INA, escribió el juez Stephen Reinhardt, quien integró el panel junto a los magistrados Mary H. Murguia y Jack Zouhary.

Presión sobre Estados Unidos

Carlos Spector insiste en que problemas como el descrito, motivados por hechos de violencia y amenazas en el país de origen, constituyen un fenómeno social y político que requiere de una respuesta política.
El pasado 16 de septiembre el abogado participó en una audiencia legislativa en El Paso para denunciar las fallas en el esquema de asilo, en la cual estuvieron los congresistas Beto Rourke, Raúl Grijalva y Filemón Vela.
Tanto él como Fernando García demandan una reunión con el director de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para revisar el problema.
El propósito, según ellos, es desarrollar planes alternativos para los solicitantes de asilo, así como pedir la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar los casos y entrevistar a los candidatos. Ello servirá para determinar el alcance de las políticas de detención de ICE y permitir a organizaciones civiles locales entrevistar a los detenidos y asesorarlos.
Los defensores de los solicitantes de asilo preparan un reporte con casos paradigmáticos para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el caso del exsoldado Víctor Hugo Tapia Madrigal, su argumento es que sus agresores –pertenecientes a Los Zetas, un grupo que el gobierno mexicano no puede controlar– indagaron su paradero e incluso le dispararon, además de enviarle una carta intimidatoria a su madre sólo porque perteneció al grupo particular de tropas de la Sedena que capturaron a 10 sicarios de esa organización criminal.

“Un candidato (como Tapia) que alega persecución pasada tiene el peso de demostrar que su tratamiento equivale al nivel de persecución, (que) ésta se debió a una o más consideraciones y (que) la persecución fue cometida por el gobierno o fuerzas que éste es incapaz de controlar o no está dispuesto a hacerlo”, escribió el juez Fisher en su resolución del pasado 15 de mayo (legajo 10-73700).

Y añadió: Si la BIA concluye que el gobierno mexicano no puede controlar a Los Zetas y que Tapia tiene un miedo bien fundado de maltratos severos, entonces es elegible para asilo, porque existiría necesariamente un nexo causal entre ese maltrato y su pertenencia a un grupo social particular.

A su vez, Ariadna Estévez, adscrita al CISAN-UNAM, sostiene que la inercia de la violencia en México da pie para pensar que el flujo de asilados en Estados Unidos se mantendrá; “de ninguna manera va a disminuir”.

Evocación del calderonismo: no pudimos frenar la violencia

Jorge Carrasco Araizaga

Que la violencia ya estaba ahí cuando ellos llegaron, que Felipe Calderón no "incendió" el país y el problema del crecimiento de las mafias del narco viene de antes, desde los gobiernos priistas, y que la estrategia calderonista fue la adecuada, aun cuando su administración fue incapaz para contener esa violencia… Son éstas algunas de las ideas que expone a Proceso Guillermo Valdés, quien encabezó el Cisen durante la mayor parte del sexenio pasado y acaba de publicar Historia del narcotráfico en México, libro en el que busca explicar por qué el país acabó convertido en un gigantesco cementerio.

En el violento sexenio de Felipe Calderón hubo un diálogo de sordos. Ni él ni sus detractores se escuchaban. El propósito de hacer de su estrategia antidrogas una política de Estado fracasó. La violencia no cedió... Al contrario.

Su sucesor, Enrique Peña Nieto, tampoco ha logrado aceptación, sobre todo entre quienes le entregaron el aparato de seguridad del Estado y desconfían de sus propuestas. Guillermo Valdés Castellanos,- director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) entre 2007 y 2011, es uno de ellos.

Responsable de la principal agencia de inteligencia civil del Estado durante casi todo el gobierno de Calderón, Valdés Castellanos sale en defensa de lo hecho en materia de seguridad por esa administración, estigmatizada por la violencia.

El motivo es la publicación de su libro Historia del narcotráfico en México, primero en el cual un funcionario de alto nivel del gobierno calderonista sale a explicar, a toro pasado, las razones de su actuación. "Quedamos a deber esta explicación de por qué emprendimos esta lucha y cómo estaba diseñada la estrategia de seguridad".

Socio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA), empresa de consultoría muy cercana a la candidatura presidencial de Calderón en 2006, salió de ahí para dirigir el Cisen. En el último año del gobierno de Calderón fue becado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para escribir el libro en España con apoyo de la Fundación Ortega y Gasset.

En entrevista el jueves 3 en las oficinas del grupo editorial español Santillana, el exdirector del Cisen pone reservas a la creación de la Gendarmería Nacional, a la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y a la concentración de la Policía Federal (PF) en la Secretaría de Gobernación, medidas tomadas por el gobierno de Peña Nieto.

Justifica en cambio la "apuesta estratégica" de seguridad del gobierno anterior; niega que éste haya improvisado y que el gabinete de seguridad se hubiera dividido o subordinado a Estados Unidos.

Si bien rechaza que una "supuesta falta de legitimidad" haya impulsado a Calderón a declararle la "guerra al narcotráfico", admite que el tema de la seguridad "estuvo

durante todo el sexenio muy politizado y partidizado". Es más: "En muchas ocasiones fue un diálogo de sordos. Ni la otra parte oía al gobierno ni el gobierno a la otra parte".
En ese debate, donde "cada quien oía lo que quería", el calderonismo no se movió. Tampoco sus detractores, quienes le atribuían a su estrategia los altos índices de violencia en el país que hicieron que durante ese gobierno Ciudad Juárez se convirtiera en la más violenta del mundo por las dispu-tas entre los cárteles de Juárez y Sinaloa.

"El incendio ya estaba"

Las propias cifras oficiales ubican en alrededor de 70 mil los muertos relacionados con la guerra contra la delincuencia organizada durante el sexenio pasado, más de 20 mil desaparecidos y otros miles de desplazados. Pero el exdirector del Cisen deslinda al gobierno de Calderón.
"La violencia fundamental, sobre todo en 2008 y 2011, tiene que ver con la dinámica del mercado de las drogas y con la fragmentación de las organizaciones de la delincuencia organizada en México. En Estados Unidos hubo una reducción importante del mercado de la cocaína y al mismo tiempo aquí tuvimos una disputa por ese mercado menos rentable."
Así explica la mayor parte de la violencia, aunque reconoce: "Evidentemente en algunos momentos la intervención estatal puede generar algún tipo de violencia, pero es temporal y no esencial. Cuando uno está consciente de que ciertas acciones del Estado pueden provocarla, entonces se pregunta si conviene o no".
En su insistencia en que "la estrategia del presidente no era para generar violencia", asegura que el Ejército, la Marina o la PF "intervenían cuando ya estaban rotos todos los mecanismos de contención de la violencia. Su llegada no provocaba el incendio. El incendio ya estaba y en ocasiones no éramos tan eficaces para controlarlo de manera rápida".
–¿Es decir que no pudieron contener la violencia?
–Eso es evidente. Fuimos incapaces. Ahí están las estadísticas. El Ejército llegó en 2008 a Juárez y durante dos años la violencia no se frenó. Eso fue la ineficacia del Estado, no del gobierno de Calderón. Es muy importante el matiz porque el Estado mexicano durante décadas no generó las capacidades para enfrentar esto.
–Tampoco se pueden negar las diferencias importantes entre los miembros del gabinete de seguridad.
–Se exagera. En temas tan estratégicos como éste, cuando un gobierno se enfrasca en una política prioritaria, son lógicas las diferencias. Por supuesto que a veces eran públicas las discrepancias entre la PGR y la SSP o el Ejército y la Marina. La existencia de puntos de vista distintos era normal. Cuando ya había posiciones que no se movían, el presidente decidía.
–Mientras la violencia crecía, la propaganda presidencial puso énfasis en el uso de la fuerza y de ahí la idea de que fue un sexenio de violencia institucional, de que estaba generando más violencia.
–No se puede negar, pero no era el único componente del discurso. También

estuvo muy presente la parte de la reconstrucción institucional. Había otros tres componentes, como el de la prevención y el de la cooperación internacional, pero era un debate muy politizado y se oía lo que se quería.

–También dio la impresión de que no sabían en qué se estaban metiendo cuando deciden sacar a las calles a los militares para enfrentar a narcotraficantes.

–Por supuesto que sabíamos en qué nos estábamos metiendo. La estrategia fue la correcta. Si analizamos la experiencia colombiana vemos un ciclo de 10 años de crecimiento de la violencia, de 1983 a 1993. Luego hubo una caída ligera y después ocho años de crecimiento. Nosotros tuvimos un ciclo de crecimiento fuerte de la violencia entre 2008 y 2011, pero luego empezó una tendencia a la baja.

Según las cifras que maneja en su libro, provenientes de la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese periodo hubo 48 mil 682 homicidios vinculados con la delincuencia organizada.

"Lo que a Colombia le llevó 18 años para iniciar el punto de inflexión hacia abajo, a nosotros nos llevó cuatro. Espero que siga la tendencia decreciente", dice en espera de los resultados del gobierno de Peña Nieto, el cual hasta agosto ubicó en 12 mil los homicidios dolosos con armas de fuego en el país, una cifra superior en mil a la del mismo periodo del año anterior, el último de Calderón.

Valdés alude entonces al régimen del PRI que gobernó el país casi todo el siglo pasado y cuyas relaciones con los traficantes de estupefacientes expone en Historia del narcotráfico en México. "Una violencia de esta naturaleza se debió a que por décadas nos hicimos tontos y creamos un problema desproporcionado de crimen organizado con grandes capacidades de operación".

–¿El PRI solapó al narcotráfico en México?

El exdirector del Cisen evade la respuesta directa: "Hay una especie de omisión colectiva del Estado y de la sociedad mexicana frente al fenómeno. Hay complicidades y mucha omisión. México vive dos tragedias: la del crimen organizado poderoso que ejerce violencia y la de un Estado omiso y en muchos casos cómplice".

El gobierno de Calderón, dice, tuvo como prioridad el combate al narcotráfico e intentó hacerla una prioridad de Estado. Pero, en el "diálogo de sordos" al que se refiere, no pudo hacerlo y su sucesor ha marcado distancia de esa estrategia, en particular en la relación con Estados Unidos.

Valdés, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, rechaza que Calderón haya abrazado la política y el discurso antidrogas de Estados Unidos, como ningún otro presidente mexicano lo había hecho. "Fue al revés", dice enfático. Hizo que Estados Unidos asumiera el discurso de la corresponsabilidad.

"Teníamos la necesidad política de poner freno a la expansión de un crimen organizado que había comenzado a dar señales de capturar partes del Estado. Era un problema de seguridad nacional. Eso no tiene nada que ver con el discurso de la guerra de las drogas de Estados Unidos."

Pero los estadunidenses se metieron hasta la cocina. "No es cierto", ataja cuando se le señala que durante el gobierno de Calderón agentes de Estados Unidos participaron en operativos y tenían acceso a la información y a los detenidos en la

entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

El edificio de los espías

El actual procurador general Jesús Murillo Karam aseguró a este semanario (Proceso 1923) que debió pedir la salida de agentes estadunidenses de la PGR porque habían cambiado los términos de la relación.

Valdés asegura que con Estados Unidos el gobierno de Calderón sólo tuvo "programas de colaboración, fundamentalmente en la generación de inteligencia de información. Los norteamericanos no participaron en operativos acá. Sólo compartíamos la información, pero ellos no dirigían".

Incluso dice: "Las líneas estratégicas de la Iniciativa Mérida las puso México". Los cuatro pilares de esa iniciativa corresponden a la estrategia definida por el gobierno desde 2007: la recuperación de territorios y detención de los líderes y debilitamiento de las organizaciones, la prevención de las adicciones, la reconstrucción institucional y la cooperación internacional.

"Nosotros definimos las prioridades y les dijimos que queríamos apoyo logístico, material, equipamiento, información y tecnología. Eso hicieron. Pero que ellos definieran la política, estuvieran metidos hasta la cocina y dieran órdenes, eso no fue cierto."

–Pero abrieron más oficinas de inteligencia, incluidas del Pentágono, lo cual antes no había ocurrido en México.

–Que yo sepa, no.

–Como parte de la Iniciativa Mérida se abrió una oficina bilateral.

–Era una oficina para la burocracia, para llevar el seguimiento de los programas de apoyo. Estaba en Reforma y se dijo que era un centro de espionaje. Era una oficina para el papeleo y los programas de capacitación. No tenía nada que ver.

En noviembre de 2010 Proceso (número 1776) dio a conocer que Washington había concentrado en el edificio Knoll, en Paseo de la Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos, los servicios de agencias de inteligencia civil y militar como parte del Comando Central de Inteligencia de la Oficina Central de Inteligencia creada por la Iniciativa Mérida.

Valdés Castellanos niega que se tratara de un centro de espionaje: "Era para llevar el proceso administrativo de la instrumentación de los programas de apoyo de la Iniciativa Mérida. Había gente de las distintas dependencias que participaban en el asunto, pero eran burócratas, no espías".

–¿El gobierno de Estados Unidos perdió la confianza en el Ejército?

–No. Esto se ha politizado demasiado y visto como que el gabinete de seguridad era un aquelarre. No fue así. Era insuficiente la gente del Ejército porque además de sus tareas de combate al narcotráfico tenía muchas otras. Además la geografía del conflicto se fue extendiendo por muchas partes.

"Teníamos un conflicto muy fuerte en Ciudad Juárez, luego en Sinaloa entre la Federación y los Beltrán Leyva. Después, cuando Guerrero y Michoacán estaban incendiados, salió el conflicto Golfo-Zetas en Tamaulipas y Veracruz. No había

gente pero sí solicitudes de envío de militares en cada estado."

El exdirector del Cisen rehúye cuando se le pide una evaluación de la estrategia de seguridad de Peña Nieto. Pero responde con la defensa de las acciones del gobierno al que perteneció, sobre todo con lo hecho por la Secretaría de Seguridad Pública, central en la estrategia de Calderón y la cual Peña Nieto decidió desaparecer para regresar sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

"Es poco funcional el actual esquema de Gobernación. Es una secretaría demasiado grande para que tenga tantas tareas. Me gusta más el esquema de secretario del Interior y de secretario de Seguridad. Estoy convencido de que o hacemos una transición al estado de derecho o el país va a empezar a hacer agua en muchos otros lados, y una parte fundamental es el tema de la seguridad. El actual esquema es muy complicado."

A diferencia del gobierno anterior, el de Peña Nieto elevó a nivel de subsecretaría las funciones de prevención del delito. "No sé si sea el mejor esquema administrativo", dice escéptico.

–¿Es necesaria una Gendarmería Nacional?

–Qué bueno que acabaron por ubicarla dentro de la Policía Federal, como una división más. Las gendarmerías surgieron para enfrentar los problemas de seguridad pública en los países europeos. Era un cuerpo intermedio entre la policía civil y el Ejército. La tendencia desde hace varios años es que desaparezcan las gendarmerías y se creen policías civiles. Aquí en México íbamos a hacer lo contario.

"Tenemos ya una incipiente Policía Federal que desde mi punto de vista debería ser de 100 mil o más policías. Nos va a llevar mucho tiempo reclutar, seleccionar, entrenar y controlar. Pero mientras no tengamos las policías estatales y municipales que requiere el país, va a ser imposible controlar la violencia."

Nuevo León: la ficción de la reducción criminal

Luciano Campos Garza

La sociedad de Nuevo León tendría que estar respirando más tranquila por el hecho de que las cifras de la violencia en la entidad disminuyen: menos asesinatos, menos plagios, según lo ha presumido de manera incansable el gobernador Rodrigo Medina. Pero algunas voces alertan: no hay tal baja de la actividad criminal, y lo que dice el mandatario tan sólo forma parte de su nueva estrategia de comunicación social; oficialmente su gobierno ya no habla de matanzas, homicidios dolosos ni de secuestros.

MONTERREY, NL.- A lo largo de este año los medios de Nuevo León han reportado cada vez menos homicidios pese a que desde 2010 en la entidad ha habido asesinatos, incluso masivos, casi diario. De pronto hubo una aparente baja en la tasa de ese delito y el crispado ambiente social en la capital estatal se relajó.

El gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz proclamó el triunfo de las fuerzas del orden, las cuales derrotaron a esos delincuentes que durante años trastocaron la vida de los nuevoleoneses y pregonó que la crisis de inseguridad había pasado.

Fue a Nueva York a presumir el modelo de seguridad que, aseguró, había bajado las estadísticas criminales hasta en 70%. La recién creada policía estatal Fuerza Civil es un ejemplo de corporación que debe ser copiado por otros estados mexicanos, dijo.

Sin embargo en agosto pasado la violencia comenzó a resurgir, aunque el gobierno estatal se niegue a reconocer lo evidente: las bandas criminales siguen tan activas como antes.

Los reporteros de la fuente policiaca fueron los primeros en entender el fenómeno. Se percataron de que la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) decidió bloquear la información, entre otras cosas con un cambio en los procedimientos para levantar cadáveres.

Los periodistas notaron que ahora el Servicio Médico Forense (Semefo) acude a las escenas del crimen en vez de hacerlo la Cruz Verde, la tradicional encargada de esa labor. Y a partir de este año los reporteros se enteran de los homicidios y los secuestros gracias a las redes sociales, ya no por los pitazos de “las cruces”.

Mauricio Fernández Garza –exalcalde de San Pedro Garza García– señala que si bien hay una disminución estadística de delitos, la crisis de inseguridad no ha pasado, alerta sobre el surgimiento del Cártel del Norte, integrado por zetas de la vieja guardia reagrupados para operar en Nuevo León y dice que la aparente baja en los índices de violencia puede deberse a una tregua entre las mafias.

Por su parte el diputado local panista Enrique Barrios acusa a Medina de ocultar las cifras de muertos y secuestrados con el propósito de proyectar a escala nacional una imagen agradable de Nuevo León, lo que le haría quedar bien con el presidente Enrique Peña Nieto.

El gobierno estatal se abstuvo de hablar de este tema con el reportero.

Medina, el “salvador”

Rodrigo Medina tuvo su momento de gloria la mañana del pasado 17 de mayo cuando se reunió con integrantes de la Cámara Americana de Comercio. Les dijo que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, estaba maravillado ante el resurgimiento de Nuevo León después de la crisis de inseguridad que llegó a colocar al estado como un sitio indeseable.

Se ufanó: “Ayer tuve una reunión productiva con el embajador de Estados Unidos y me decía que estaba impresionado con las cifras de crecimiento económico de la entidad. Y me hacía una pregunta: ‘¿Cómo le están haciendo, cuál es la clave para que Nuevo León se distinga de manera extraordinaria frente a los demás estados de la República para ser atractivos?’

“Le contesté que Nuevo León ha construido durante muchos años y generaciones una cultura de trabajo que tenemos muy arraigada, pero ha sabido –y aquí subrayo esta palabra– adaptarse, que hemos sabido entender cómo se está moviendo el mundo en relación a la inversión.”

En los meses siguientes el gobernador se esforzó por mantener la sensación de que la tranquilidad había llegado al estado.

A los alumnos de maestría en administración militar y seguridad interior de la Defensa Nacional les ofreció un discurso sobre sus acciones frente a los problemas estatales y, según el boletín de la administración estatal, les expuso “las acciones implementadas por su gobierno para salir de la inseguridad que afectó a los nuevoleoneses”.

El 10 de julio se fue a presumir a Nueva York el modelo Nuevo León. En la Bloomberg Mexico Conference, en la Academia de Ciencias de esa ciudad, afirmó que Fuerza Civil tiene 85% de aprobación popular y antes, cuando se llamaba Seguridad Pública del Estado, sólo llegaba a 10%.

Pero cometió un desliz: se refirió a su estrategia de ocultamiento: “Creo que del tema de seguridad se tiene que hablar menos. Estoy hablando de las autoridades, no de los medios. Se tiene que hablar menos y sentirse más, se tiene que sentir más; la población debe sentirse segura. Para eso están los gobiernos y el Estado”.

Pero luego regresaron los homicidios masivos, los cobros de piso y los -secuestros.

El 5 de agosto fue acribillado en su domicilio el director de Obras Públicas del municipio Doctor González, Rigoberto Chapa Gutiérrez. El gobierno estatal ocultó el hecho hasta que tres días después fue difundido en la página de Facebook de la alcaldía.

El empresario panadero Alejandro Castillo López fue asesinado la tarde del 24 de septiembre al salir de su oficina, en la colonia España, en el sur de Monterrey. Fue abatido a tiros cuando abordaba su camioneta, afuera de su empresa. El procurador estatal Adrián de la Garza afirmó categóricamente que el crimen no estaba relacionado con el cobro de piso.

Tres días después, en un desplegado los integrantes de la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares

desmintieron airadamente al procurador. Afirmaron que Castillo murió por no "pagar piso" y que "durante más de tres meses fue víctima de diversos intentos de extorsión", señalaron y pidieron permiso a las autoridades para armarse a fin de protegerse.
El 25 de septiembre fue secuestrado Jorge Luis Martínez Martínez, padre del alcalde de General Zuazua, Jorge Luis Martínez Gutiérrez. Un día después Álvaro Ibarra, secretario general de gobierno, dijo desconocer el hecho. Ante la insistencia de los medios, Medina tuvo que aceptar el ilícito. Hasta ahora se desconoce el paradero del plagiado.
El 26 de septiembre fueron asesinados cuatro jóvenes en el bar Chato's Grill, en el municipio de Santa Catarina. Se presume que la agresión está relacionada con el cobro de piso.
Medios locales denunciaron que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ocultó otro plagio. El 30 de septiembre, en un negocio de plomería de la colonia Hidalgo de Monterrey reportaron el secuestro del propietario, sólo identificado como Gonzalo.
Según El Norte, la AEI informó que se trató de un asalto, no de una privación ilegal de la libertad.
El mismo periódico informó del secuestro del estadunidense Christopher Phillip, que habría ocurrido el 26 de septiembre. No hubo pronunciamiento oficial del hecho. Trascendió, al día siguiente, que el hombre había sido liberado en condiciones no reveladas.

Cifras maquilladas

Pero las cifras alegres comenzaron. Según estadísticas de la PGJNL los homicidios dolosos este año se redujeron casi a la mitad en comparación con el anterior. Hasta agosto de 2012 hubo mil 111; hasta ese mes de 2013, 540.
En cuanto a asesinatos relacionados con la delincuencia organizada aparentemente hubo también un ligero declive en los últimos meses. El gobierno estatal informó que en julio, agosto y septiembre pasados hubo, cada mes, 30 muertes de este tipo. Oficialmente durante todo 2012 hubo 61 secuestros. Hasta agosto de este año, 28.
Iram Oviedo ha sido reportero policiaco desde hace 24 años. Señala que la PGJNL se ha encargado de dificultar el trabajo periodístico. Explica que desde que él empezó en la cobertura de noticias de seguridad pública, eran las ambulancias de la Cruz Verde las encargadas de levantar los cuerpos de las víctimas de homicidio.
Los reporteros establecían guardias en "las cruces" del área metropolitana y viajaban junto con los socorristas a reportar los hechos violentos, sobre todo, en años recientes, tiroteos con múltiples fallecidos.
Ahora, con el cambio de estrategia del gobierno, desde febrero los levantamientos los hace directamente el Semefo. No hay forma, dice, de que los reporteros monten guardia en las instalaciones del forense.
Por eso ya hay menos historias de violencia que contar, incluso cuando hay

hechos de sangre en el centro de Monterrey pues hasta esos, en ocasiones se les pasan a todos los reporteros porque nadie los alertó.
Reconoce que las matanzas han disminuido este año en Nuevo León. Pero hay un intento oficial por ocultar lo que sí sucede.
“Antes estábamos de base en la Cruz Verde. Ahora vemos las redes sociales, donde nos dicen que hay situaciones de riesgo y hacia allá nos movemos.
“Hay que estar atentos a Twitter y Facebook y atender los contactos en los puestos de auxilio. Los vecinos también hablan a las redacciones de los periódicos y las televisoras y de ahí nos dicen que hay movimiento de patrullas en tal o cual casa”, explica.
“Pero de que hay violencia, la hay y no está todo bonito, como parece que quieren hacernos ver”, afirma.
Un fotorreportero, quien pide el anonimato, coincide con Oviedo. Señala que durante este año, tras la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, ha habido una tendencia en el estado para tapar la información policiaca. El interés evidente del gobierno de Medina es ocultar los hechos violentos, asegura.
El fotógrafo, con más de 10 años en el oficio, señala que ya no hay posibilidad de conocer al instante, como antes, las eventualidades de inseguridad. Ahora los reporteros se reúnen en algunos puntos de Monterrey desde donde salen en caravana, para protegerse mutuamente.

La violencia no decrece

Fernández Garza considera que si bien hay una evidente disminución de hechos violentos en la entidad, el gobierno de Nuevo León se ha equivocado al declararse vencedor en la lucha contra el crimen.
“El punto ahora es ver a dónde van orientados los programas de seguridad, porque Fuerza Civil está a 20% de la capacidad que se pretende. Puede haber bajado el índice criminal, pero eso a lo mejor no quiere decir que se esté resolviendo el problema de inseguridad. Puede que haya una tregua en el crimen organizado u otra serie de factores que indiquen reducción, pero no necesariamente porque la combates”, señala.
El trabajo por hacer es inmenso, dice quien es conocido aspirante a la gubernatura de Nuevo León para 2015.
Es indispensable que los municipios hagan su propia labor preventiva a conciencia y la ciudadanía también se involucre a través de la denuncia, en el esfuerzo colectivo para abatir la incidencia criminal, añade.
“No veo que la crisis haya pasado. Además mucho de lo que se ha logrado es por intervención federal, no estatal. Tampoco puedes pensar que vas a tener aquí todo el aparato federal siempre. Mientras no tengamos un respaldo real, con esfuerzo propio de ciudadanos, municipio y estado, eso de cantar victoria se me hace completamente fuera de tono y se puede revertir en cualquier momento”, apunta.
También hace referencia al surgimiento de una nueva organización delictiva. “Se menciona que hay un grupo nuevo, el Cártel del Norte; por lo que he escuchado pueden ser zetas de la primera generación”, dice sin aportar más detalles.

A su vez desde la tribuna del Congreso local el diputado panista Enrique Barrios Rodríguez pidió a Medina de la Cruz que se abstenga de promover acciones para ocultar a la ciudadanía las noticias relacionadas con la -inseguridad.

“El pleno del Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al procurador estatal a que se abstenga de ocultar la información de ejecuciones. Están ocultando los levantones, los descuartizados y decapitados”, dice.

Barrios afirma que la manera de escamotear estos hechos a la opinión pública es prescindiendo de los servicios de la Cruz Verde, cuyos paramédicos eran, tradicionalmente, acompañados por los reporteros de policía.

El Semefo utiliza camionetas como ambulancias y en ellas levantan los muertos, dice el legislador. “Ahora la procuraduría niega los hechos y no salen a la luz pública hasta que un familiar dice que su hija o su sobrina fue descuartizada. Es criminal hacernos creer artificialmente que todo está mejor”.

“El discurso de Medina está armado con una intención de hacernos sentir más seguros, pero los hechos lo desmienten cada mañana cuando leemos en la prensa los homicidios de ayer. Nos damos cuenta de que todos los días hay ejecutados, secuestrados y levantados. Ahí está el caso del muchacho asesinado porque le ayudaba a una señora a llevar el mandado en la colonia Tanques de Guadalupe”, ejemplifica.

El diputado considera perniciosa la nueva estrategia de Peña Nieto de ocultar los crímenes con el propósito de mantener tranquila a la ciudadanía.

Es evidente, dice, su interés de diferenciar este sexenio del anterior con la instrucción que ha dado de no presentar detenidos ni escenas de enfrentamientos; además ha modificado su discurso, pues ya no utiliza palabras como “guerra”, “cárteles” o “alias”.

Pero este ocultamiento hace que la sociedad no sepa cuál es su realidad. “Por ejemplo, en el norte del país podemos pensar que ir a la frontera tamaulipeca es seguro... y no lo es. Y como ya no ve la gente en las noticias nacionales las balaceras de Matamoros, Reynosa o Nuevo Laredo, las familias van para allá y son víctimas de la inseguridad”, dice.

Con la proyección de esta falsa atmósfera de seguridad que Medina quiere transmitir al país, busca obtener dividendos para sus aspiraciones políticas, afirma.

“En Nuevo León, los gobernantes han malinterpretado el cambio de discurso y hacen esto, que es esconder los crímenes para hacerle sentir al presidente que en el estado todo está bien y con esto ganan puntos frente al ejecutivo federal”, asegura.

Por esta política irresponsable de desinformación, sentencia Barrios, la ciudadanía corre peligro al no saber si en el estado hay una guerra entre cárteles o al desconocer que en algún sector de esta ciudad alguien está cobrando piso.

A escala federal es lo mismo, señala, porque el gobierno no advierte de los peligros que hay en estados como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas. L

La Montaña, hambrienta y discriminada

Marcela Turati y Ezequiel Flores

En una de las zonas más pobres del país, miles de damnificados son convocados por la Sedesol y el gobierno de Guerrero al reparto de despensas. Los titulares de ambas instancias, Rosario Robles y Ángel Aguirre, saben que asistirán los que puedan, y preparan su discurso: ellos siempre han estado atentos a las zonas afectadas por los ciclones, la ayuda repartida alcanza para todos y los programas para pobres tienen prácticamente saturada la entidad con recursos públicos. Pero muy distinta es la realidad de la región de La Montaña que describen los habitantes y los presidentes de sus municipios…

Cochoapa El Grande, Gro.- Las indígenas de huipil se acercan a la secretaria Rosario Robles, la primera funcionaria de alto nivel que pisa el municipio después de las inundaciones, para pedirle ayuda en voz bajita y en escaso español. La experredista les dice que se anoten en el Programa de Empleo Temporal para que cobren como cocineras de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Otra confiesa su miedo a que, con los caminos bloqueados, la comida escasee, a lo que Robles responde que en las dos cocinas comunitarias que existen en la cabecera comerán todos.

A cada petición de los damnificados, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estira la cobija de los programas ya existentes para los pobres. Si solicitan refugio, la receta es que acudan a los albergues para niños de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Si hay hambre porque los víveres no llegan, ahí está ya el maíz de Diconsa. Si se teme a las enfermedades, menciona a los médicos de la Secretaría de Salud. Dicta desde el mundo ideal de la teoría lo que en la vida real no se ve por ningún lado.

A unos metros de donde se realiza el encuentro de Robles y el gobernador Ángel Aguirre con los habitantes de este municipio mixteco, clasificado como el más pobre del país, las tres cocineras del único Comedor Comunitario de la estrategia contra el hambre en esta cabecera hierven en plena calle un sartén lleno de agua, sobre una pira de ocotes que despide humo denso. No tiene ingredientes, en estos días están escasos. Tampoco hay mesas, platos o sillas ni se ven sartenes. Lo que sí se ve es mucha hambre.

“Falta agua, atún, arroz, sardina, mayonesa, jugos, Maicena, frutas, chile, verduras, ya casi no hay Minsa ni frijol, sufrimos para conseguir agua”, dice la señora Concepción Flores Francisco. Otras dos señoras asienten.

“Falta todo: comal, olla, cacerolas, cucharas, tortilleras, estufa de tres quemadores, leña, despensa, gente que ayude... Había todo cuando nos vinieron a enseñar los soldados, pero estuvieron una semana nada más y cuando se fueron se llevaron sus trastes y estufa, porque todo era de ellos”, agrega la cocinera Guadalupe García García, una de las “voluntarias” asignadas a la fuerza por la comunidad para esa labor.

Desde fines de agosto, cuando se fueron los soldados del Plan DN-III-Social –como bautizó la Sedesol a las visitas de los militares que durante varias semanas enseñarían a las mujeres de todas las comunidades a cocinar sanamente– es una proeza mantener el comedor funcionando.

Este 2 de octubre las cocineras están tan concentradas en atizar la lumbre rebelde que no se enteran de que el alboroto en el auditorio de enfrente es por la visita de Robles, su patrona, la mujer encargada del programa para el que ellas trabajan gratis y a diario, desde las cuatro de la mañana hasta las cinco de la tarde, amasando cada una 10 kilos de tortilla, acarreando agua limpia, cortando, picando, pelando y sazonando ingredientes, cuando hay, para darles desayuno y comida a 500 niños y ancianos.

Por más damnificados que se digan, los adultos no tienen permiso de servirse. Aunque Robles invite a todos a comer ahí, la comida no alcanza.

Los militares asignados al pueblo respaldan sus quejas. Repelan porque ellos tienen que compartir sus botellas de agua, sal, cebollas y chiles para que la comida esté limpia y no quede desabrida. También las ayudan a cargar los leños de ocote que de tanta humareda que suelta los obliga a llevar cubrebocas (y ellas sólo tienen la opción de cerrar los ojos al acercarse a la lumbre).

Los militares las apoyaron también cuando la esposa del presidente municipal quiso quitarles la lona que les sirve de techo, cuando les negaron el pedazo de calle adonde alimentan a la gente, y hasta solicitaron en vano, a nombre ellas, que el municipio apoye la cocina con personal y alimentos.

“Ni siquiera querían abrirles aquí porque era la comisaría y tuvimos que quitar a los comerciantes de este pedazo de banqueta porque no querían dejarles lugar”, comenta uno de los uniformados. Son jóvenes, se notan aburridos. Dicen que una semana atrás los mandaron a una misión de reconocimiento, pero sus superiores los dejaron en este lugar, que no les causa mucha gracia.”

¿A quién le va a gustar Cochoapa El Grande? Si transitar por sus descoyuntados caminos puede costar la vida; si en tiempos de mala cosecha la gente se alimenta de raíces; si el municipio tiene índices de desarrollo similares a los del África subsahariana, es el África mexicana; si los niños vienen desnutridos desde el vientre de su madre; si todavía hay mujeres que mueren por partos y cualquier diarrea puede ser asesina. ¿Cómo les va a gustar estar aquí?

Promesas de oficina

Cinco costales de maíz y dos bolsas de despensa lucen como escenografía en el templete del auditorio donde el gobernador Aguirre y la titular de Sedesol repiten por micrófono que la región de La Montaña (que consta de 19 municipios, entre ellos Cochoapa) no fue discriminada durante la emergencia causada por la tormenta Manuel a pesar de que siempre se les vio recorriendo Acapulco, La Pintada o Chilpancingo. Explican que desde el inicio de la crisis enviaron gente a esta zona.

Se presentan aquí 17 días después de que pasó la tormenta que dejó a las comunidades sin alimentos, sin vías de comunicación, cercadas por agua y con

casas tiradas, y a una semana de que líderes indígenas recriminaron a Robles (“la acribillaron”, tituló un medio informativo) que, como siempre, los pueblos indígenas fueron los últimos en ser atendidos.

Hasta el 26 de septiembre, la secretaria y el gobernador destacaban ante la prensa lo difícil que era entrar a Metlatónoc y Cochoapa (los dos municipios vecinos, sinónimos de la miseria en México) porque las nubes permanecieron estancadas y las carreteras y caminos quedaron triturados. Pero en esta visita cambian su versión y dicen que desde el 17, dos días después de la devastación, ya había brigadistas de la Sedesol y la CDI que llegaron a pie, así como militares en esos dos municipios.

Una situación distinta registraron los presidentes municipales.

“Estuvimos una semana sin teléfono, sólo entró una llamada que hice a la CDI y mandaron apoyo para trasladar heridos de Río Encajonado (el 18 de septiembre). Una semana después pude comunicarme al gobierno del estado, cuando viajé a Tlapa a pedir apoyo. Hasta el domingo (27) nos enviaron 3 mil despensas, pero eso no alcanza, hay familias numerosas, de entre ocho y diez integrantes, y en el municipio hay 18 mil 600 habitantes”, señala el alcalde de Cochoapa, Luciano Moreno López, en una entrevista realizada el 30 de septiembre.

La versión del presidente municipal de Metlatónoc, Neftalí Hernández, es parecida. Desde el día 15 mandó mensajes por internet a la Secretaría de Gobierno del estado, avisando de la destrucción. No tuvo respuesta. Hasta el 20, Protección Civil se comunicó para informarle que su demarcación había sido declarada zona de emergencia. Los primeros víveres llegaron entre el 21 o el 22, no recuerda bien; eran cerca de 4 mil despensas que no alcanzaron a repartir en las 65 localidades porque varias aún estaban incomunicadas.

“Ya tenemos cinco días que sí llegan a las comunidades –dice en la entrevista del 1 de octubre– pero la gente se siente un poco triste porque el señor gobernador se tardó en atender la Montaña, le dio prioridad a Acapulco y cuando salieron de allá vinieron para acá. Aunque mandaban gente no había respuesta”, dice.

La misma sensación expresan en entrevistas sus homólogos de Acatepec, Cochoapa, Tlacoapa e Iliatenco, que se reunieron en Tlapa con el gobernador, quien repetía que siempre se ocupó de La Montaña.

Según una nota comparativa del periódico Reforma, basada en un informe del gobierno federal, en los 19 municipios de esta región, la más marginada y la que peores daños sufrió, se habían entregado sólo 14 mil 569 despensas hasta la noche del 27 de septiembre.

En el mismo periodo, en los ocho municipios de la Costa Grande se habían entregado 64 mil 584 despensas. En Tierra Caliente sumaban 58 mil 350; en la Costa Chica, 46 mil 213; en la región Centro, 33 mil 790, y sólo en el Municipio de Acapulco 26 mil 847.

Algunos municipios habían recibido nada más 200 despensas.

El 2 de octubre, cuando por fin pisó los dos municipios emblemáticos por sus altos niveles de pobreza, el gobernador Aguirre comienza su discurso recordándole a la gente que su gobierno siempre ha trabajado “de la mano” con Metlatónoc y Cochoapa con su programa Transformemos Nuestro Entorno, conocido por las

clases de zumba contra la obesidad a cuyos asistentes les paga el gobierno, y que en estos parajes convoca a desnutridas viejitas mixtecas que danzan enfundadas en sus huipiles con tal de conseguir unos centavos.
Habla también del restablecimiento de los caminos, la luz, la electricidad, los alimentos y hasta de una cancha deportiva que está por construir.
En su turno, el presidente municipal Moreno López explica a los invitados que durante las inundaciones Cochoapa estuvo incomunicado varios días, que la restauración de caminos hacia las 140 comunidades lleva un avance del 20%, que ya escaseaba el alimento, que el río se llevó las tuberías y los postes de luz, y que por eso la cabecera municipal no cuenta con esos servicios, los cuales no existían desde antes en muchos de estos pueblos.
Robles menciona los avances en la restauración de los servicios. Anuncia que para enfrentar la emergencia el gobierno abrirá dos comedores de la estrategia de Sedesol contra el hambre fuera de la cabecera municipal, en algunas de las 140 comunidades donde no hay, y explica la razón: “Nos dimos cuenta que durante la contingencia sirven de mucho”.
Habló del censo casa por casa que levantan jóvenes becarios de Sedesol. Del maíz que compró la CDI (la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) para suplir las milpas destruidas. Del abastecimiento de productos básicos garantizado por las tiendas Diconsa. De la continuación del programa Oportunidades. Del Programa de Empleo Temporal al que podrán inscribirse para tener dinero en efectivo.
Termina su discurso, camina entre la gente. Una mixteca le suplica que no entreguen tarjetas de débito para el apoyo alimentario a las beneficiarias de Oportunidades –como les anunciaron los promotores del programa– porque en el municipio no hay bancos. Un grupo de universitarias se queja de que han trabajado durante tres meses para la estrategia Sin Hambre, visitando casa por casa para armar un padrón, y la Sedesol les debe los 5 mil pesos mensuales de salario. Robles, incómoda, pide a una asistente que las aleje y las atienda aparte para que no se den cuenta los periodistas.
“Además nos pagan muy poco, nosotros terminando poniendo de nuestro dinero porque tenemos que pagar transporte y comida en las comunidades”, dice a este semanario una de las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional defraudada, mientras anota su nombre entre los 26 quejosos. Un día después el subsecretario Javier Guerrero llamará a este semanario para informar que el viernes se les pagaría, ya que se trató de un problema técnico.
Terminado el acto la gente sale sin despensas. Los camiones de Diconsa Puebla, enviados desde temprano desde Tlapa como avanzada para dar realismo al anuncio oficial de que ya viene el maíz, están varadas. Aunque los operarios de las máquinas retroexcavadoras se esforzaron, no pudieron abrirles paso a tiempo.
Los funcionarios están a punto de abordar las camionetas para ir a los helicópteros en los que llegaron. Alguien avisa que ya llegan los camiones. Robles y el gobernador regresan y piden a la gente que vuelva al auditorio para que ahora sí le entreguen las despensas.
A unos pasos del comedor comunitario, decenas de hombres esperan que se

estacionen los camiones de volteo para descargar 600 bultos de maíz en la tienda Diconsa.
El establecimiento “estuvo vacío tres semanas, apenas hoy que abrió camino el retro estamos volviendo a surtir”, explica Francisco Moreno, el joven vendedor, quien dice que el hambre se encanijó durante los días que permanecieron incomunicados.
“(De las comunidades) vinieron muchos que querían maíz, pero no había. Estaban dispuestos a ir hasta donde el camión llegara porque lo necesitaban, querían irse caminando y cargar todo, pero les dije que esperaran, que ya venía la maquinaria. Tardó más días pero hoy llegó”, dice sudoroso, sin despegar la vista de los bultos, codiciados por quienes lo rodean.

¿El futuro?

Junto al auditorio se encuentra el albergue El Futuro de la Montaña, de la CDI, que la publicidad oficial ofrece como refugio para damnificados. Pero ahí los niños y niñas internos se van a dormir con hambre. No tienen agua. Nunca han tenido luz. Duermen hacinados de a cuatro por litera. Las cocineras dicen que no pueden recibir a ninguna persona externa.
“Casi tres semanas van que no podemos surtir la despensa en Tlapa, por lo malo del camino, pero aunque sea frijolitos estamos dando”, dice Martina Victorio Villanueva desde la choza que sirve de cocina. A sus espaldas se ve el desfile de niños y niñas de ocho a 15 años, que cargan cubetas de agua hasta vaciarlas en un tambo. Cada uno tiene que acarrear cinco por día.
Sentados en una litera, en el dormitorio, seis niños hojean sus libros de Ciencias. Uno de ellos, llamado Esse, de 14 años y proveniente de la comunidad de Yosentacua Llano del Carmen, dice que su casa se derrumbó con las lluvias y, como su familia quedó a la intemperie, lo enviaron de nuevo al albergue escolar donde al menos tiene garantizados pan y techo.
Él ha notado que la cocina enfrenta problemas. “Antes nos daban carne, chorizo con huevo, y comíamos dos veces y un atole en la noche, pero como llovió y no pueden surtir, ahora nomás nos dan frijol, a veces sopa, a veces huevo, y nomás comemos dos veces”, dice serio.
Este albergue estaba a punto de ser reemplazado por uno recién construido, que no ha podido ser habitado por peligroso, ya que estuvo cerca de quedar atrapado por el alud que escupió un cerro.
En el mismo terreno del albergue donde teóricamente está instalado un Comedor Comunitario (resulta inexistente) una manta anuncia: Brigada Médica Cruzada Nacional contra el Hambre. Aunque la publicidad oficial indica que en estos puestos se atiende a todas las personas que lo requieran los 365 días del año, fue imposible entrevistar a un encargado. “Sí estuvieron el médico, la enfermera y el técnico, pero se fueron por San Miguel; regresan el martes”, dice la cocinera.
Para el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ubicado en La Montaña, la “emergencia humanitaria” aún no ha pasado. Mucha gente sigue incomunicada, la ayuda fluye lenta, las milpas se perdieron, las lluvias arrebataron a la gente lo que

aún no cosechaba y lo que apenas iba a llevarse a la boca.

El sacerdote Rodolfo Valdez, vicario de la parroquia de Cochoapa, confirma que aún no se tienen noticias de varios pueblos. Las religiosas y el otro sacerdote que vive en el municipio intentan llegar a pie. En tiempos buenos pueden recorrerse 90 kilómetros en siete horas, pero con los caminos rotos quizá tarden varios días.

“Sabemos que todavía no hay medicinas ni alimentos y el transporte todavía no tiene acceso. Urge abrir caminos. Además sigue lloviendo. Por algo Cochoapa significa ‘lugar de la lluvia’, porque de mayo a octubre llueve”, explica en entrevista.

El misionero comboniano dice que la ayuda comenzó a llegar el 20 o 21 de septiembre y se concentró, como siempre, en la cabecera. “¿Cuántas bolsas de despensa caben en un helicóptero que aterriza sólo en la cabecera, donde nomás alcanzan los que están cerca, y no los de las comunidades? De por sí la gente está olvidada, y peor con esto. ¿Cuántos comen en un comedor si dicen que hay sólo uno en la cabecera y no sé si está funcionando? ¿Qué está pasando a donde no hemos llegado? La están pasando mal porque se vinieron abajo sus milpas, las tierras donde siembran maíz y frijol. ¿Cuánto puede durar una despensa a una familia numerosa si además no les dan cosas que ellos acostumbran a comer?”, dice.

Este es el despostillado panorama que se aprecia cuando se recorren dos cuadras en este pueblo, ubicado en el sótano de la miseria. En esta esquina, donde los boletines oficiales redactados en un escritorio se estrellan contra la realidad de los siempre olvidados. Donde los mismos programas pobres diseñados para pobres son estirados ahora como cobija deshilachada para cubrir ahora a los mismos beneficiarios, ahora también damnificados. L

Soberbio, un gobierno impotente rechazó la ayuda internacional

Arturo Rodríguez García

Rebasado por la emergencia en amplias zonas del país, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió ser autosuficiente y evitó solicitar ayuda internacional. Cuando, ante la gravedad de los daños, se le ofreció de todas formas, no fue capaz de coordinar las donaciones de organismos ciudadanos con redes en el extranjero.

A tres semanas de que los ciclones Ingrid y Manuel afectaran la mayor parte del país y el segundo causara desastres sobre todo en Guerrero, hay municipios y comunidades donde la autoridad no puede garantizar la seguridad alimentaria ni cubrir las necesidades básicas.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña ha denunciado que en la Costa Chica y en la parte alta de la montaña amuzga no se ha "visibilizado" el desastre, pues los esfuerzos gubernamentales y el envío de ayuda se concentra en áreas como Acapulco, Coyuca de Benítez y Atoyac, que captaron la atención de los medios. Pero aún en esos lugares, de acuerdo con organizaciones civiles, la coordinación no ha sido suficiente.

Por ejemplo, en Acapulco hay zonas a las que el gobierno no ha llegado y las despensas son insuficientes en número y calidad, pero sobre todo deja que desear la distribución de alimentos porque no se instalaron bastantes comedores comunitarios, afirma Israel Guadarrama, vocero de Oxfam México, una organización de cooperación internacional y ayuda humanitaria que trabaja en más de 90 países.

Aun así, tras la conmoción de los ciclones de septiembre no se solicitó oficialmente ayuda al extranjero, y no se respondieron las solicitudes de organismos civiles internacionales para coordinar el envío de donaciones.

La desorganización del gobierno federal se hizo evidente desde los tropiezos en la emisión de alertas y sigue vigente con la ausencia de acciones planificadas para superar la contingencia e iniciar trabajos de reconstrucción, no se diga ya en la nula previsión de las carencias para la producción en el siguiente ciclo agrícola.

Así, si bien se declaró la alerta por la posibilidad de brotes epidemiológicos de dengue y cólera en La Montaña, la Costa Chica y Acapulco, no se ha establecido un programa para garantizar el abasto de agua potable. Guadarrama lo dimensiona: "En Atoyac y Acapulco, hay daños a los sistemas de agua, en Papagayo 1 y 2… se corre el riesgo de que 789 mil habitantes no tengan agua de calidad".

Desde la noche del 15 de septiembre, cuando el presidente Peña Nieto instaló el Comité Nacional de Emergencia, la coordinación recayó en el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

No obstante, la dependencia no respondió a las organizaciones civiles, que para llevar ayuda a los damnificados hicieron contacto directo con y sus similares locales y las autoridades municipales.

"(El gobierno) no ha solicitado ayuda internacional, sin embargo, entramos con la

Cruz Roja. Hemos estado presentes en Veracruz y Guerrero y logramos establecer diálogos con autoridades municipales y federales en campo", explica el activista de Oxfam.

Por su cuenta

"No hay capacidad logística (del gobierno federal) para responder de manera adecuada", afirma Gustavo Ugalde, vocero de World Vision, organización con presencia en más de 100 países que también se sumó por su cuenta a la atención del desastre en Guerrero.

Añade que en municipios como Tlacoachistlahuaca y Metlatónoc no se ha podido superar la etapa inicial de atención, es decir, cubrir la seguridad alimentaria de la población y sus necesidades básicas. Esta situación también se mantiene en Acapulco, donde las familias que perdieron sus hogares continúan en albergues.

Con vuelos a cargo de Eurocopter para trasladar personal, equipo y ayuda en especie, los activistas de World Vision se ha concentrado en los municipios de la zona amuzga, donde aplican un procedimiento de emergencias que, entre otras cosas, incluye un método de evaluación de daños. Hasta ahora han registrado 525 viviendas afectadas, 110 de las cuales con pérdida total, en Ometepec y Xochistlahuaca. En Cuajimicuilapa hay sectores donde el agua no ha bajado, por lo que no han podido obtener esa información.

Desde los días que siguieron a los aguaceros y deslaves, World Vision llevó plástico para cubrir techos dañados, mosquiteros y despensas para las familias afectadas. Además ayudó a instalar espacios amigables dentro de albergues para atender a los niños con estrés postraumático y brindar educación, dada la destrucción de las escuelas.

Esto les dio un respiro a las familias, pues como el gobierno no ha enviado cuadrillas de trabajo, los damnificados están desazolvando y limpiando calles.

Ese es el "campo" donde la organización pudo coordinarse con la Secretaría de Salud guerrerense, el DIF municipal y los mandos militares destacados ahí. No existe otro contacto con el gobierno federal.

A través de World Vision canalizaron sus donativos empresas y organismos mexicanos y extranjeros, como JP Morgan, que donó 50 mil dólares para la reconstrucción, y la Fundación Gonzalo Río Arronte, que aportó mil filtros de agua.

En vista de que uno de los principales problemas actuales en las zonas devastadas es la falta de agua apta para el consumo humano, uno de los objetivos inmediatos de Oxfam México es instalar plantas potabilizadoras en Acapulco, Atoyac, Coyuca y al menos 18 comunidades rurales.

Según Guadarrama, la organización considera indispensable tender puentes con las instancias gubernamentales en campo; mientras tanto, ya desplegó una campaña de salud y reparte kits de limpieza a fin de prevenir enfermedades, en especial por el riesgo de dengue.

El siguiente paso

A decir de Gustavo Ugalde, para World Vision es importante garantizar la transición de la actual etapa de seguridad alimentaria y necesidades básicas, a la de reconstrucción y restablecimiento de actividades productivas, pues sólo así se conseguirá la seguridad alimentaria hasta el próximo ciclo agrícola.

Por su parte, Guadarrama calcula que esta primera fase durará aproximadamente dos meses, pero subraya que deben rehabilitarse los medios de vida y fortalecer la capacidad de acción comunitaria, todo ello con enfoques de desarrollo sustentable y planes de riesgo, porque no se sabe cómo responder a tiempo a calamidades como las presentes.

“La semilla es un tema importante. Ser requiere alimentación ahorita, pero se tiene que atender lo que sigue, la siembra del siguiente ciclo agrícola”, añade.

Enfatiza que las aseguradoras estiman los daños en 75 mil millones de pesos, pero dichas empresas sólo cubrirán entre 12 mil y 15 mil millones, mientras que los perjuicios a casas, cosechas y herramientas de trabajo carecen de cobertura.

De ahí que Oxfam México –que ha participado en la atención de otros desastres como la inundación de Villahermosa Tabasco en 2007 y la de los Tuxtlas en 2010– considere indispensable fortalecer las capacidades de la población, no sólo para reponerse de la actual contingencia sino también para contar con planes preventivos eficaces.

Para World Vision, en las emergencias humanitarias todos los sectores de la sociedad tienen que coordinarse; sin el apoyo del sector privado, afirma, no se podría dar atención a todas las necesidades.

Además, la participación conjunta permite compartir experiencias y profesionalizar el trabajo asistencial, generar nuevas metodologías de colaboración y avanzar en el diseño de un plan estratégico de prevención, acción y recuperación ante este tipo de desastres. L

13 mil indígenas desplazados

Marcela Turati y Ezequiel Flores

La tormenta que se ensañó con los municipios de La Montaña guerrerense no se contentó con despojar a sus habitantes de sus casas, los escasos muebles, ropa y trastes, sino que arrancó los cultivos y aplastó bajo toneladas de lodo aquello que, pese a todo, permanecía en pie. Las personas que lograron salvar su vida buscan regresar aunque sea a su miseria anterior, pero no podrán: el suelo donde crecieron ya no sirve ni para pararse sobre él.

SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO, Gro.- Humberto Rojas Vázquez tiene ocho meses y su única posesión es la camiseta que lleva puesta, tiesa por tanta mugre. En 10 días no lo han cambiado de ropa. No tiene otra, ni cobija. Este día es el niño más pobre del mundo. Está resfriado y molesto. Forcejea en los brazos de su mamá, en una mezcla de hartazgo, frío, incomodidad y hambre.

Las últimas 10 noches ha dormido entre sus padres, sus hermanitos y sus abuelos sobre un tendido de hojas que hacen que cale menos la tierra húmeda, bajo un plástico blanco que no detiene la terca lluvia. Todos duermen en el cerro, en un paisaje de nubes estacionadas. A unos pasos está el precipicio. Enseguida, el panteón. Abajo, su casa sepultada por el cerro.

Este es uno de los 49 campamentos improvisados en La Montaña de Guerrero, la región más pobre del país, el sótano de la miseria mexicana, donde viven algunos de los 13 mil 200 indígenas damnificados por el aplastamiento de sus pueblos bajo toneladas de lodo desgajadas por la tormenta tropical Manuel.

Humberto, aunque no se da cuenta, ya pasó a ser uno de los miles de desplazados de La Montaña, de los Jacintos Cenobios expulsados de sus paraísos, a punto de convertirse en nómadas.

“Llora mucho, no tiene cobija, no tiene huarache. Necesita Minsa, masa. No hay nada, se va todo, también ropa, tiene gripa de una semana”, lamenta su madre, Natalia Vázquez Martínez, una de las niñas-madres que pueblan esta zona.

No ha podido lavarle la ropa al bebé, dice, y muestra la bolsa de detergente vacía.

Un par de ancianas cocinan chayotes y ejotes en una lata de chile adaptada como sartén, arriba de una fogata. Las rodean niños semidesnudos.

Humberto no es el único niño desnudo y con hambre. Hay otro, de dos años y con la panza inflada, sin mechas de pelo, la piel marchita, cubierto sólo por una camisa casi transparente de tanto uso. Tres niñas tiritan. Traen el pelo mojado. Están recién bañadas aunque no tuvieron jabón para lavarse. Encogidas, tronando los dientes, se secan bajo este sol que no calienta, entre nubes que empañan la vista.

La adolescente que ayuda como traductora habla con una mujer y luego dice: “Sí, quiere ir a otro lado, aquí está muy feo. Milpa se cayó, toda cosa. Ni un traste lleva ella. Nomás ella siempre prestado”.

Hacia abajo de la barranca está su pueblo. Los caminos parecen tasajeados con machetes gigantes, que le marcaron con saña zanjas profundas a la tierra. Los

cerros no tienen pellejos que los cubran, los empinados plantíos saltaron al precipicio. Las rocas quedaron a la vista.
El pueblo quedó hecho un lamento. Las casas enterradas en una lava de lodo que sólo dejó a la vista los techos, algunas copas de árboles, postes tirados enseguida de la iglesia, esa sí erguida, como testigo entre la destrucción.
"¿Parece La Pintada, no?", dice José Alfredo, un universitario na' saavi que se ofreció como guía, en referencia a la comunidad sepultada por un alud en la que fallecieron sepultadas más de 70 personas en el municipio de Atoyac.
"Ese techo rojo que se ve era la primaria, a un lado estaba la Casa de Salud, esa ya no se ve, ni siquiera su pista. Dicen que como 40 casas quedaron sepultadas", explica Meche Ortiz, otra universitaria que conduce al grupo de periodistas.

"Manuel" les quitó hasta el suelo

Caminar por San Miguel es como meterse a un laberinto a escala de gigantes. Para caminar 10 metros a veces hay que buscar veredas, cruzar nuevas barrancas y nuevos ríos para cambiar de una sección a otra. Hay que hacer alpinismo y agarrarse de troncos, de plantas con la raíz plantada en la tierra para no caer. Cuidar no pisar las grietas que se abren en el suelo. Tampoco acercarse a los bordes porque son resbaladizos. La tierra está suelta. Cada tanto el cerro se sacude, se deshace en moronas que se convierten en pequeñas avalanchas.
Este día los militares intentaron aterrizar dos helicópteros en la arena que parece movediza, que chupa cualquier peso, pero no lo consiguieron. La gente nomás se saboreó la ayuda que les pasó de cerca y no se quedó.
"Nomás comimos todo lo que trajo el helicóptero. Un día trajo 30 despensas, otro vino a dejar 33. Ayer vino UPN, dejó un poco allá arriba y en Tierra Blanquita. Todo ya lo comimos", dice la joven Obdulia García Vázquez, otra niña-madre de tres.
Las voces de las mujeres y los ancianos del campamento, traducidas por la adolescente, repiten las frases. Juntas se escuchan así: "Sufrimos mucho porque aquí hace mucho frío, aquí sí entra un poco". "No hay nada, quedó bien feo todo, tabla se va toda, ropa se va toda". "Necesito cobija, también huarache, jabón, ropa". "Tanque todo se rompió, también manguera". "Se cae casa de adobe, mira cómo quedó, se fue ropa, todas sus cosas. Ella es madre soltera, no tiene marido". "La casa se quedó, mis ropas, las comidas, todos, lo que necesitamos, pues, allá está". "Bien rapidito se acaba despensa porque somos mucho". "Que nos apoye más porque aquí sufrimos mucho, la Diconsa toda se tapó". "Los niños es obligación estudiar, queremos maestro que mande que pueda enseñar". ·El niño no tiene medicina, duele cabeza".
Los desplazados saben que no podrán habitar este lugar, pero tampoco se imaginan en otro sitio. "Mejor que nos den otro lugar porque puede bajar eso que ya está bajando, que ayer se rompió, parece que quiere caer toda", agrega la señora Obdulia, ya con reservas para nombrar a la tierra del cerro, aflojada por la tormenta.
Mientras las autoridades deciden su suerte, los pobladores de San Miguel, como

los personajes malditos en la antigüedad, viven junto al panteón. Y lanzan cohetes al aire como desesperados, festejan a San Miguel para agradar al ser que les mandó el diluvio y como pidiendo que les retire su castigo.

En toda la región de La Montaña Manuel se llevó al menos 22 almas. Según un reporte del gobierno federal, también provocó que más de 13 mil personas huyeran de sus casas, dejó a 30 mil familias damnificadas que pasan penurias para conseguir alimentos porque los caminos están cortados y sus milpas no resistieron.

Cuando se cumplen tres semanas del diluvio, 250 comunidades permanecen incomunicadas porque 165 tramos carreteros quedaron destrozados y 63 puentes se cayeron.

La naturaleza desplazó a 2 mil 657 familias, la mayoría indígenas me'phaa, na'saavi y nahuas. Las autoridades comunitarias de 32 poblados no quieren volver al mismo lugar, demandan que los reubiquen.

El poder destructivo de Manuel fue tal que 18 de los 19 municipios de La Montaña fueron declarados zona de desastre. Se ensañó más con aquellos donde habitan los más pobres del país: Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Malinaltepec, Acatepec, Tlacoapa, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte y Alcozauca.

De las 50 mil hectáreas de tierras de cultivo, unas 14 mil quedaron arruinadas. Como si alguien hubiera rebanado los maizales y los hubiera arrojado del cerro. Otras están bajo el lodo. La mayoría son de maíz y el resto de arroz, frijol, café, plátano, mango, mamey y aguacate. El acceso a las cabeceras municipales ya se rehabilitó, pero unas 250 comunidades de 11 municipios siguen incomunicadas. Son pocas las noticias que llegan de allá.

Uno de los helicópteros que hace piruetas en el cielo, intentando aterrizar, recoge a uno de los varios geólogos que comienzan a aparecer en la Montaña para determinar si la gente puede habitar otra vez los poblados pisoteados o será necesaria la reubicación.

"El geólogo que vino dijo que este es lugar de alto riesgo, que nuestra comunidad le sigue a La Pintada de la Costa Chica (en peligrosidad)", dice el secretario municipal, Celso Santiago Cayetano, desde el techo de la iglesia, donde se aprecia ampliamente la destrucción. L

En la entidad no hay culpables

Ezequiel Flores Contreras

TLAPA DE COMONFORT, Gro.- Mientras la administración de Enrique Peña Nieto afirma que las alertas por los ciclones Ingrid y Manuel fueron emitidas oportunamente y se deslindó así de la tragedia en Guerrero (101 muertos hasta ahora, caminos destruidos, pueblos incomunicados y miles de damnificados), el gobernador Ángel Aguirre Rivero declaró que si bien el estado cumplió los protocolos de prevención, las autoridades federales "no advirtieron lo suficiente" para evitar la catástrofe.

El 30 de septiembre, Luis Felipe Puente, coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el primer aviso sobre Manuel se emitió el 13 de septiembre a las 11:30 horas y que desde entonces se ratificó la recomendación a las entidades para que aplicaran medidas preventivas.

En conferencia de prensa, Puente dijo que los estados y municipios deberán responder por dichas acciones, ya que se les advirtió a tiempo. "La actuación de la Secretaría de Gobernación no se redujo solamente a la aplicación de alertamientos, sino a llamadas con todos y cada uno de los titulares de Protección Civil de las entidades que podían verse afectadas", dijo.

Al término de una evaluación de daños en La Montaña, que visitó después de 15 días de la tragedia y en medio de fuertes críticas por la tardía reacción, el martes 1 Aguirre Rivero contestó al funcionario federal desde Tlapa de Comonfort: "Nosotros no nos sentimos en falta (…) Ya habrá quien dictamine o investigue quiénes dicen la verdad y quiénes no la están diciendo".

El equipo de Aguirre elaboró el informe Acciones preventivas ante el paso de la tormenta "Manuel", que fue presentado por el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, una hora después de que la administración federal se deslindara de responsabilidades por el desastre.

El documento, que puede ser consultado en la dirección electrónica prevencionmanuel.guerrero.gob.mx, contiene una cronología de las acciones del gobierno estatal e indica que las primeras alertas se emitieron desde el 12 de septiembre a través de las cuentas de la Subsecretaría de Protección Civil estatal en Twitter y Facebook.

En ese reporte se indica que fue hasta la tarde del 14 cuando el gobierno de Aguirre llamó por la radio a que la gente adoptara medidas de prevención ante las lluvias, que ya habían provocado inundaciones en Acapulco y la Costa Chica.

Una noche antes, Aguirre Rivero había celebrado junto a sus predecesores en la gubernatura, Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, además de otros políticos y funcionarios, el bicentenario de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac y la promulgación de Los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos.

El festejo se realizó la noche del 13 de septiembre en la residencia oficial Casa Guerrero, en el oriente de Chilpancingo, y la fotografía que muestra el convivio ambientado con alcohol y mariachis fue difundida por la Dirección de

Comunicación Social en los primeros minutos del día 14, cuando la tormenta ya azotaba la entidad.

Incluso, el documento indica que la mañana del 14, Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino y coordinador de asesores externos de Aguirre, asumió la responsabilidad de encabezar las sesiones extraordinarias del Consejo estatal de Protección Civil, en lugar de que lo hiciera el mandatario, como exige la normatividad.

También se registra que a las 22:56 horas del mismo 14, el gobernador escribió un mensaje en su cuenta personal de Twitter: “El apoyo a los afectados por la tormenta Manuel es coordinado por el secretario general de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil”. Fue la primera reacción del mandatario tras el festejo en Casa Guerrero.

El gobernador siguió tuiteando y la tarde siguiente, el 15, apareció en Chilpancingo, donde recorrió albergues y visitó a damnificados. Guerrero ya había sido devastado.

Sin embargo, varios alcaldes afirman que no fueron alertados debidamente ni por autoridades federales ni por las estatales. El de Acapulco, Luis Walton Aburto, y sus homólogos de Tierra Caliente, afirmaron que tampoco les avisaron sobre el peligroso incremento del nivel en las presas La Venta y El Caracol, cuyo desfogue provocó inundaciones y cortó caminos y puentes en la cuenca del Balsas y en el río Papagayo.

Consultado al respecto, el doctor en Ingeniería Roberto Arroyo Matus, quien en 2009 recibió el Premio Nacional de Protección Civil en el campo de la prevención, considera que poco se puede hacer para evitar estas tragedias si las autoridades siguen otorgando permisos de construcción en zonas de alto riesgo, como la ubicación de desarrollos inmobiliarios y obras públicas en terrenos inestables o potencialmente inundables, o bien mientras se continúe bloqueando el cauce natural de los ríos con toneladas de desechos no degradables y deforestando zonas de captación de agua.

“En suma, si se sigue afectando nuestro entorno de forma desmedida, la naturaleza nos va a cobrar la factura”, advierte. L

Televisa acalla a Bozzo, pero sus negocios con gobernadores continúan

Jenaro Villamil

El conflicto entre la conductora estrella de Televisa, Laura Bozzo, y Carmen Aristegui, de Noticias MVS escaló muy alto en medios de comunicación y en las redes sociales, a tal punto que el consorcio de Emilio Azcárraga le ordenó a la peruana que cerrara la boca. Demasiado tarde… Con el escándalo afloró no sólo el historial presuntamente delictivo de la peruana en su país, sino un caudal de componendas entre ella, Televisa y los gobernadores Eruviel Ávila, del Estado de México, y Ángel Aguirre, de Guerrero, quienes gastan millonadas de dinero público en su adicción a la publicidad televisiva.

El uso irregular de fondos del erario para su talk show, el apoyo prestado en pantalla para lanzar "guerras sucias" contra adversarios políticos y mediáticos, y las reiteradas acusaciones e investigaciones por presentar falsos testimonios de víctimas de desastres naturales o de supuestos abusos sexuales, constituyen una constante en la carrera de la conductora Laura Bozzo.

La polémica generada por la utilización de recursos públicos del Estado de México para lucirse como "rescatista" en las zonas afectadas por las tormentas en Guerrero, así como su disputa con la periodista Carmen Aristegui, a quien Bozzo tachó de "mentirosa" y amenazó con iniciarle una guerra sucia en la pantalla, es una fórmula aprendió durante la presidencia de Alberto Fujimori en Perú, cuando se convirtió en aliada y comunicadora privilegiada de ese régimen.

En el expediente 031-2002 de la Corte Superior de Justicia de Lima se incluyen varias acusaciones contra ella, incluso que recibió dinero de Vladimiro Montesinos, jefe de la inteligencia peruana, cuando fue conductora del Canal 4 y apoyó a la campaña de reelección de Fujimori en 1999 mediante programas favorables al mandatario.

"Otro rubro de la imputación versa sobre la disposición de fondos públicos realizada por Montesinos Torres a favor de Bozzo Rotondo relacionados con los programas especiales conducidos por dicha acusada, entre ellos el tema relacionado con los lisiados por terrorismo", se consigna en la página 80 el expediente.

Una testigo de estas imputaciones, María Angélica Arce Guerrero, relató cómo Bozzo armó un programa especial sobre lisiados de las fuerzas armadas para favorecer mediáticamente los intereses de Montesinos, el temido jefe de los servicios de inteligencia de Perú:

"Se realizó un programa de los lisiados de las fuerzas armadas. Montesinos conversó con el general Villanueva Ruesta y Fernando Dianderas para que enviaran a los lisiados que tenían en esos momentos producto de la subversión. Llegaron en ambulancias y por tratarse de lisiados no pudieron subir al segundo piso, sino que se quedaron en el primer piso. Montesinos se encontraba en el segundo piso de la Sala de Edecanes con la señora Laura Bozzo a la que se le

comunicó que ya habían llegado los lisiados. Montesinos le indicó a la señora Bozzo que bajara y hablara con los lisiados.
"La señora Bozzo bajó a hablar con cada uno, entre ellos soldados, oficiales y técnicos de la policía. Después subió, habló con Montesinos y me pidió que le entregara unos quince sobres de manila tamaño pequeño. Se los di y él siguió caminando por el pasadizo hasta llegar a la Sala de Edecanes. Después, la señora Laura Bozzo bajó y vi que les entregaba los sobres a cada uno de los lisiados y éstos salieron al día siguiente en su programa de televisión."
En contraste con este testimonio, los abogados de la conductora presentaron a los lisiados Juan Polanco Barrientos y Alberto Barrantes Vásquez, quienes negaron haber recibido dinero. El tribunal colegiado de la tercera sala penal consideró por mayoría que "no se ha acreditado que en este programa los lisiados hayan recibido dinero del Estado" porque "no hay un dato objetivo que lo corrobore".
Lo mismo sucedió con el programa especial Colombia al borde del abismo. Otros testigos afirmaron que Montesinos y el general colombiano Harold Bedoya visitaron a Bozzo para proporcionarle "planos o mapas de Colombia que se mostraron en dicho programa".
Bozzo admitió que asistió a las oficinas de Montesinos "a efecto de entrevistarse con el general de Colombia, sin aceptar habérsele proporcionado documentos elaborados en dicha entidad para su programa". El colegiado tuvo que admitir que este hecho sí fue acreditado.
El largo expediente, cuya copia obtuvo Proceso, subraya que entre 1999 y 2000 Bozzo se reunió en 10 ocasiones con Montesinos, actualmente preso en su país, "para que le facilitara información respecto a los temas que la doctora Bozzo debía tratar en su programa de televisión, tales como el Plan Colombia o sobre el terrorismo".
La conductora se libró de pisar la cárcel frente a las imputaciones por asociación delictuosa que le hicieron durante la investigación contra Montesinos en julio de 2006 –incluyendo el regalo de un collar y una pulsera de oro con brillantes que, según ella, fue "un regalo de parte de su padre" –. Sin embargo, su prestigio quedó dañado para siempre en su país natal al señalársele como parte de la red de promoción mediática de Montesinos y de Fujimori.
El tribunal judicial peruano sentenció a Bozzo a una "prisión suspendida" –equivalente a libertad condicionada– por presunta complicidad en los delitos de peculado y de asociación ilícita. Pasó tres años encerrada en la citada televisora, desde donde siguió transmitiendo su programa.
Otro caso de manipulación televisiva que obra en el expediente se relaciona con la forma en que Montesinos puso a disposición de Bozzo al general Juan González Sandoval, mejor conocido como El Chacal, para desacreditar en su programa al candidato presidencial opositor, Alejandro Toledo.
En marzo de 2000, González Sandoval convenció a Lucrecia Orozco, madre de una pequeña llamada Zaraí, para que se presentara en el programa de Bozzo y le exigiera a Toledo que reconociera públicamente la paternidad de la menor y el pago de una pensión.
Esta operación fue financiada por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el

aparato de represión dirigido por Montesinos, según reportó el corresponsal Ángel Peláez (Proceso 1786).

Montajes

Esta no es la primera ocasión que Bozzo utiliza su espacio en la pantalla para capitalizar en su favor las tragedias personales derivadas de desastres naturales. En 2007, a raíz del terremoto en Pisco, una investigación del novelista y conductor televisivo Jaime Bayly comprobó que una niña afectada por el desastre y "hallada" por Bozzo entre los escombros era en realidad una actriz presentada anteriormente en uno de sus programas como víctima de abuso sexual. Así lo consignó en su edición del 26 de septiembre pasado el periódico El Comercio de Perú.

Bozzo dejó su país y comenzó Laura en Acción en la cadena estadunidense Telemundo. Ahí también fue acusada de falsos testimonios. Periodistas de Panamericana TV reconocieron en uno de los programas a Cecilia Zorrilla, una chica del medio televisivo que hacía las veces de panelista de Bozzo en su emisión.

Frente al escándalo detonado, en mayo de 2008 Telemundo puso "en receso" el programa de la peruana. Los ejecutivos reconocieron que sus "falsos testimonios" afectaron a los anunciantes.

En su programa El Francotirador, Bayly afirmó: "Telemundo tuvo la decencia de sacar a Laura de la televisión y suprimió sus dos programas: el de las nueve de la mañana y el de las cuatro de la tarde. Ahora, en su lugar pusieron dos telenovelas. "Laura no está más en televisión. Telemundo decidió retirarla, expectorarla como cuando uno tiene una presencia molesta. Le echaron agua bendita", se mofó el escritor peruano, quien se ha convertido en uno de los principales y constantes críticos de la conductora.

Tras su salida de Telemundo, Bozzo fue reclutada por TV Azteca, la segunda cadena privada más grande de México. Pero el contrato con la empresa de Ricardo Salinas Pliego se canceló abruptamente, en medio de versiones en revistas de espectáculos sobre supuestos conflictos con Paty Chapoy, conductora de Ventaneando, programa estelar de Canal 13.

En YouTube circuló un video titulado "Laura Bozzo maltrata e insulta a sus empleados de TV Azteca". Ahí se escucha a la conductora peruana quejarse porque los casos y los invitados a su programa "no funcionan".

Promoción política

La entrada de Bozzo a Televisa incluyó convenios millonarios de gobernadores con la empresa de Emilio Azcárraga Jean, sobre todo con Ángel Aguirre, de Guerrero y Eruviel Ávila, del Estado de México. Ambos mandatarios son adictos a la promoción televisiva sufragada con recursos públicos, y ahora están involucrados en el escándalo de la conductora de talk shows de Televisa.

La peruana ha prestado su imagen para promover a estos gobernadores, como lo

hizo en su país natal con Fujimori y Montesinos. En marzo de 2012, en el marco de las secuelas dejadas por el sismo en la Costa Chica guerrerense, Bozzo acompañó en una gira a Aguirre, quien prometió despensas, nuevas viviendas y programa de empleo temporal.

"Yo, señores, soy del pueblo. Cuando hay un desastre soy la primera en estar porque vengo representando a la Fundación Televisa que quiere ayudar… rehabilitaremos escuelas con computadoras, aulas deportivas y una serie de cosas para evitar el alcohol y las drogas, los problemas que tenemos. ¡Estoy acá y estaré siempre con ustedes!", arengó Bozzo, según consignaron los reporteros de este semanario Marcela Turatti y Ezequiel Flores (Proceso, 1848).

"Es una burla para la gente que busca ayuda y le traen un show", dijo hace año y medio el conductor de la radio independiente Ñnomandaa (La Palabra del Agua), de la comunidad de Xochistlahuaca, al comentar la llegada de Bozzo como acompañante del gobernador.

La conductora apoya y elogia a los gobernadores que tienen convenios millonarios de publicidad con Televisa. Es el caso de Eruviel Ávila, a quien la defendió en el caso del escándalo por el uso irregular de los helicópteros Relámpago.

De acuerdo con los contratos recientemente exhibidos por el gobierno de Eruviel Ávila, de enero a diciembre de 2012 el erario mexiquense destinó a Televisa 52 millones 700 mil pesos en contratos por adjudicación directa; el concepto: "publicidad y propaganda en medios de comunicación electrónica, difundiendo información de mensajes y actividades gubernamentales". Con TV Azteca también firmó un contrato, aunque menos cuantioso, pero también multimillonario: 23 millones 200 mil pesos, por el mismo concepto.

Para el presente año, el gobierno de Ávila presupuestó 191 millones de pesos a fin de publicitarse en medios de comunicación, cantidad 3.6% superior a la de 2012. No se conoce la cifra exacta que destinará a Televisa y a su repetidora Televisa-Toluca, pero en los medios locales se calcula que superará en más de 60% por ciento lo pagado el año anterior.

En el Congreso mexiquense la oposición ya solicitó que se investigue el uso irregular de helicópteros de rescate por parte de medios de comunicación, y en especial de Laura Bozzo. Además, la Asociación Nacional de Seguridad y Emergencias (ANSE) la desconoció como rescatista.

"Ninguna organización de rescate de Chile y Perú, sobre todo aquí en México, ha colaborado con este personaje en ningún solo rescate de emergencia", desmintió la ANSE en su comunicado a Bozzo, quien ha presumido ser colaboradora de los Topos en los países sudamericanos.

Silenciada

"No puedo declarar nada sobre el escándalo. En Televisa me pidieron que ya no abundara", declaró Bozzo el miércoles 2, en una entrevista con el Canal 2 de Perú. Sólo aceptó hablar de su rating –según ella tiene "más de 50 puntos"– e insistió en que ella ama a México y se quedará aquí.

Ya no mencionó a Aristegui, quien esta semana entrevistó al fiscal anticorrupción

de Perú, Julio Arbizu, uno de los abogados que investigó el vínculo entre Bozzo y Montesinos.

El peruano declaró a Noticias MVS que durante la investigación se comprobó “el pago que el gobierno de Fujimori hizo en la televisora donde trabajaba Laura Bozzo”. Agregó que la conductora “desarrolló métodos denominados psicosociales que funcionan como desvíos de atención pública sobre los problemas reales de ese país”.

Aristegui afirmó que Bozzo es “un personaje con una biografía y una historia muy compleja relacionada fundamentalmente con una historia criminal”.

La única reacción de Bozzo fue llorar en la pantalla. El martes 1 acusó a Aristegui de atacarla con “información vieja y falsa”. Insistió en su petición sobre derecho de réplica en el espacio informativo de la periodista de MVS.

El jueves 3 la Asociación a Favor de lo Mejor en los Medios exigió mediante un comunicado que se retiraran del aire los programas Laura, de Canal 2 y Cosas de la vida, de Canal 13. Francisco Javier González, presidente y vocero de esa agrupación, que integra a universidades y fue creada bajo el patrocinio de Lorenzo Servitje, propietario de Bimbo, consideró que la reciente polémica entre Bozzo y Aristegui “aceleró y le dio más fuerza a esta petición constante porque ayudó para que la gente manifestara nuevamente su disgusto ante este tipo de contenidos que no son nada edificantes”.

En la emisión de su programa del viernes 4, Bozzo ya no mencionó nada sobre Aristegui ni sobre los damnificados de Guerrero. Eso sí, en su peculiar estilo, le gritó a uno de los invitados: “¡Gracias a la Fundación Televisa tienen una casa!”.

Bancomer, bajo investigación por el financiamiento a Peña Nieto

Jesusa Cervantes

El Consejo General del IFE, que ya había exonerado en una primera fase al PRI por el Monexgate, acaba de dejarlo libre de culpa por completo al decidir que los millones de pesos de las tarjetas repartidas para las elecciones presidenciales del año pasado no se destinaron a la compra y coacción del voto. Pero detrás del entramado en el cual se quiere hacer perdedizo el origen y destino de aquel dinero aparece una sorpresa: no sólo Monex emitió plásticos para esos comicios, también lo hizo Bancomer.

Una investigación encabezada por el consejero electoral Alfredo Figueroa sacó a la luz datos para apuntalar la acusación de que el PRI recurrió a la triangulación ilícita para hacer perdedizo el origen y destino de los millones de pesos usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y exhiben también "falta de competencia" e "incongruencia" de la Unidad de Fiscalización del IFE para indagar el llamado Monexgate.

Lo anterior viene a sumarse al hecho de que, el pasado 23 de enero, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) exoneró al partido que llevó a Peña Nieto a la Presidencia.

La investigación de Figueroa fue motivo de un amplio debate en la sesión del IFE del pasado 26 de septiembre; pese a ello, los medios se limitaron a consignar que se exculpaba al PRI de la "compra y coacción" del voto a través de la madeja bancaria y mercantil del Monexgate y que se aprobó un recurso "oficioso" para indagar a Bancomer. No más.

Sin embargo los resultados del escudriñamiento a los casi ocho mil destinatarios de los monederos Monex que realizó la Comisión de Quejas y Denuncias, encabezada por Figueroa, reveló que Alfredo Cristalinas Kaulitz, jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE "se negó" a investigar un cuarto banco –Bancomer– el cual aparece en la trama financiera del PRI pese a contar con elementos suficientes para hacerlo".

Lo más grave, dice Figueroa a Proceso, "se descubrió que los 70 millones de pesos que aceptó el PRI manipular mediante los monederos no fueron para 'el pago de estructura electoral', como justificó ante la autoridad electoral, versión aceptada sin investigar".

"Monexgate" de nuevo

La historia del Monexgate se destapó el 26 de junio de 2012, nueve días antes de la elección presidencial, cuando el Partido Acción Nacional denunció el uso de tarjetas Monex por parte del PRI para la "compra y coacción del voto"; incluso presentó varios plásticos y narró cómo fue el operativo, estimando que para la maniobra se había dispuesto de por lo menos 700 millones de pesos.

Días después, el 5 de julio la coalición PRD-PT-MC robusteció aquella denuncia al presentar cientos de facturas emitidas por Monex a nombre de las empresa Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora Efra, S.A. de C.V., propiedad de Emilio Fraga, recientemente sumado la dirección nacional del PRI, y las cuales respaldan la compra millonaria de tarjetas Monex.

Una semana más tarde la coalición de izquierda reveló la participación de otras compañías: Atama, con operaciones financieras por 13.9 millones de pesos; Tiguan, con 9.2 millones y Koleos, con 3.2 millones.

Tras la denuncia del PAN el IFE dijo en conferencia de prensa que había detectado la emisión de tarjetas por 70 millones 815 mil pesos por parte del PRI para "el pago de su estructura electoral".

A partir de ese momento y ante el alud de denuncias y evidencias presentadas por la oposición, el PRI hubo de aceptar públicamente el 17 de julio que su partido contrató a una empresa para la emisión de tarjetas Monex: 7 mil 851 monederos por tan sólo 70 millones, misma cantidad que el Instituto Federal Electoral había detectado.

Las denuncias sobre el caso Monex empezaron a desahogarse el 23 de enero de 2013 en el Consejo General del IFE. Ese día la Unidad de Fiscalización sostuvo que el PRI no sólo había recurrido a Monex y Santander en su entramado financiero, como lo había denunciado la coalición de izquierda, sino sumó a la veintena de empresas que Proceso reveló en su momento, otras 14, además de la participación de cuatro personas físicas y tres bancos más: Banamex, Banorte y Bancomer.

Sin embargo a éste último nunca lo investigó. La Unidad de Fiscalización tampoco buscó a los propietarios de las tarjetas. No obstante en su dictamen consideró que el "origen y destino" de los recursos utilizados por el PRI estaban plenamente identificados: "Para el pago de la estructura electoral", además de que el entramado financiero no fue ilegal.

El Consejo General avaló el dicho de la Unidad, pero al aparecer el nombre de Alkino, la empresa a la cual el PRI –como reconoció el 17 de julio– había contratado para la adquisición de las tarjetas, también surgió el término de "contrato de mutuo acuerdo" firmado entre empresa y partido.

Al no estar validada la figura "contrato de mutuo acuerdo" en el Reglamento de Fiscalización del IFE e incluso no haber sido notificado cinco días antes de su firma al órgano electoral como obliga la regla, se ordenó a Cristalinas que investigara sobre "la legalidad o ilegalidad" de ese instrumento financiero. El pasado 26 de septiembre la Unidad dictaminó que sí fue legal y el Consejo lo respaldó por mayoría de votos.

El PRI mintió

En paralelo, la Comisión Quejas y Denuncias abrió una investigación sobre el caso de las tarjetas.

En entrevista, su presidente, Alfredo Figueroa relata que ellos sí hicieron el trabajo nunca realizado por los más de 50 empleados de Cristalinas: acudir con cada uno

de los propietarios de las 7 mil 851 tarjetas para comprobar si de verdad eran los dueños y utilizaron el dinero para lo que la “Unidad y el PRI dijeron” –el pago de la estructura electoral– así como los montos.
“La investigación mostró dos cosas: lo planteado por la Unidad de Fiscalización (el 23 de enero) para lo que se habían empleado los recursos no fue así (en su totalidad para el pago de la estructura).
“Las personas nos dijeron en una proporción muy grande que no fue eso; ni era el monto ni era para lo que la Unidad de Fiscalización y el PRI decían que se había destinado el monto”, relata Figueroa.
Añade: “Esta otra investigación hecha desde la comisión y el Jurídico, muestra la ausencia de congruencia y consistencia de los datos de fiscalización ¡desde el origen de la queja! En la indagatoria viene el porcentaje de quienes dijeron que el dinero no era para lo que se decía, el porcentaje de quienes no contestaron y el de quienes dicen no haber recibido el dinero que dicen la Unidad y el PRI; uno dijo: ‘Yo fui representante distrital para otros efectos’ (es decir no para la estructura electoral)”.
Figueroa, quien concluirá su plazo de siete años como consejero electoral el miércoles 30, señala que la investigación de la comisión “revela en realidad para qué fue el dinero” y todavía más preocupado suelta: “Es decir, no estaba comprobado el destino del dinero”. Destino que la mayoría del consejo general del IFE y la Unidad de Fiscalización dieron por comprobado el 23 de enero.
Se le comenta que con esta indagatoria se echa abajo la justificación del PRI sobre el uso de los 70 millones de pesos emitidos en tarjetas Monex y en cuyo proceso participó la empresa Alkino, así como la aceptación de la Unidad de Fiscalización.
“Sí, pero también de la mayoría del Consejo General que votó en esa dirección”, dice y añade: “Las conclusiones de esta investigación que hicimos y las de la Unidad de Fiscalización no son las mismas”.
Ante las contundentes evidencias de la nueva indagatoria realizada por la Comisión de Quejas y Denuncias, Figueroa propuso dar vista y remitirla en su totalidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior porque el tribunal tiene desde el 23 de enero pasado el recurso de impugnación tanto del PAN como del PRD, PT y MC por la decisión que tomó el Consejo General del IFE, queja que hasta el momento no se ha resuelto. “En este país los tribunales no investigan, pero ahora van a tener ya dos investigaciones terminadas en distintos momentos; ambas las deben sumar a su reflexión sobre la resolución principal”, detalla Figueroa.

Antecedente para la impunidad

En la emisión de las tarjetas el PRI dijo haber utilizado a Alkino. En el dictamen que la Unidad de Fiscalización presentó el 23 de enero se reveló el entramado financiero: El PRI contrató a Alkino la cual, por incapacidad de crédito, solicitó un préstamo a Atama en un monto a ser dispersado en las tarjetas contratadas. Luego Atama solicitó a Inizzio la adquisición de las tarjetas de prepago para que

después ésta y Banco Monex celebraran un contrato para adquirir las tarjetas. Y finalmente Atama realizó a través de empresas mercantiles y cuatro ciudadanos los pagos a Monex.
En todo este entramado el PRI firmó un “contrato de mutuo acuerdo” con Alkino por 66 millones que con todo e intereses sumaba los 70 millones de pesos. La Unidad de Fiscalización determinó que el instrumento financiero fue legal y así lo respaldó en su mayoría el consejo General.
No obstante Figueroa votó en contra. En primer lugar, explica, porque el “mutuo acuerdo está reglamentado por la autoridad civil y el Reglamento de Fiscalización no lo permite; lo único que avala para financiamiento a partidos son los créditos bancarios y éstos se deben notificar con cinco días de anticipación.
“En el sistema electoral no debe permitirse un financiamiento con una contratación de mutuo acuerdo por las siguientes razones: porque Alkino le dio al PRI una tasa de interés de apenas 3% y con esto lo que estaríamos legalizando es la vía por la cual las empresas mercantiles (las cuales tienen prohibido por ley financiar) o los hombres más ricos del país podrían financiar un partido a diez años. ¿Acaso una persona mercantil puede hacer un convenio mutuo a diez años?”
Se defiende ante cualquier suspicacia y recuerda que la Unidad consideró legal el “contrato de mutuo acuerdo”; pero “voté en contra y perdí la votación pero también en la anterior (la de compra y coacción del voto). Lo que planteé en este tema es que no podía advertirse el destino de los recursos empleados, no estaba acreditado y por lo tanto ameritaba una sanción”.

De Monex a Bancomer

En la misma sesión del 26 de septiembre salió a la luz la participación de Bancomer en el tinglado financiero del PRI. En su investigación Figueroa detectó dos tarjetas emitidas por tal banco. Es decir, no sólo Monex fue utilizado para la dispersión de recursos y no sólo Bancomer fue utilizado para hacer transferencias o depósitos bancarios sino que también vendió plásticos.
El descubrimiento de Figueroa llevó a ordenar a la Unidad de Fiscalización que inicie una indagación “oficiosa” sobre la participación de este banco. Es decir, el caso Monex sigue abierto en el IFE y ahora podría surgir el Bancomergate.
Al buscar a cada uno de los propietarios de las casi 8 mil tarjetas, relata el consejero, se detectaron dos plásticos emitidos por Bancomer. “Encontramos a dos personas quienes nos dijeron que ellas no habían sido financiadas con Monex sino con tarjetas Bancomer”.
En paralelo, continúa Figueroa, fuimos con el PRI y le preguntamos si ellos habían utilizado otro mecanismo de dispersión de recursos y nos contestaron que no.
El consejero llama la atención sobre el actuar de la Unidad de Fiscalización a la cual seis meses atrás le informaron del descubrimiento y le pidieron investigar. “Hubo una relación epistolar con la unidad preguntándole sobre estas cuentas, su respuesta fue que como no tenían relación con Monex no iba a investigar nada y no estaba investigando nada.
Aclara, “no se puede prejuzgar qué se puede encontrar, pero... así empezó el caso

Monex: con dos tarjetas. Ahora deberán investigar si esos números de tarjetas existen o no y si es positivo habrá que establecer quién las fondeó, quién se las dio, cuántas fueron. Esta investigación tendría que llevar a la cuenta central y seguir así la ruta del dinero.

“Otra cosa que se debe investigar es por qué el PRI no lo reportó”, dice Figueroa. “Incluso lo negó”.

Con la resolución del Consejo General, la Unidad de Fiscalización abrirá una nueva línea de investigación a cargo de su titular, Alfredo Cristalinas, una personaje a quien Figueroa califica de “incompetente”.

Por lo pronto, ante la nueva reforma político-electoral que se discute en la Cámara de Diputados, existe el planteamiento de desaparecer la Unidad de Fiscalización ante su inoperancia y falta de credibilidad por el Monexgate y regresar nuevamente las investigaciones a los consejeros auxiliados por un órgano técnico.

No se sabe quiénes habrán de hacer las nuevas investigaciones sobre fiscalización pues se ignora cuál será la composición del próximo Instituto Nacional Electoral. De ahí que la elección de los cinco espacios que se deberán renovar, según la ley vigente, el miércoles 30 está en el limbo.

El SAT se defiende El objetivo, frenar el abuso empresarial

Carlos Acosta Córdova

Tras deslindarse –"nosotros no definimos la política tributaria"–, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, sostiene que la agresión fiscal a la clase media es sólo un mito y añade que el propósito de la reforma hacendaria es frenar los privilegios. Hábil para no meterse en política, el funcionario dice a Proceso que incluso los empresarios y legisladores ya hicieron recular a la autoridad en materia de IVA y otros temas fiscales.

Ni ataques a la clase media, ni obstáculos a las empresas; mucho menos, atropellos a los trabajadores.

"Lo único que queremos con la reforma hacendaria es frenar los abusos de quienes hacen todo lo posible por no pagar impuestos, o pagar lo mínimo; regresarle a las leyes la progresividad que han perdido en el tiempo; acabar con los privilegios, y tapar, de una vez por todas, las vías de elusión y evasión fiscales".

Así responde Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al cúmulo de críticas de los contribuyentes, empresas y personas físicas a la reforma hacendaria propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Licenciado en administración industrial por el Instituto Politécnico Nacional –oriundo de Oaxaca, de 44 años–, Núñez Sánchez sostiene que, sobre todo, muchas grandes empresas han abusado de regímenes especiales, como la consolidación fiscal o el régimen simplificado, para no pagar impuestos o reducir al mínimo su tributación.

O que miles de empresas, de todos los tamaños, prefieren atascarse de bienes inútiles antes que pagar impuestos, aprovechando el beneficio de la deducción inmediata de las inversiones.

También, que miles de personas físicas de altos ingresos acaban pagando menos al fisco que quienes ganan menos pues, entre otros mecanismos, meten tantas deducciones que terminan teniendo saldos a favor.

O que hay miles de empresas "exportadoras" con altos volúmenes de producción pero que sólo exportan 10% de ésta, pero sí aprovechan las exenciones de ley: importan insumos sin pagar IVA (la ley se los permite) y luego venden sus productos elaborados en el país, deslealmente, lo que le pega brutalmente a los productores nacionales.

El funcionario que dirige el órgano fiscalizador –brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda– es un tipo tranquilo; no se altera –sólo le crispa el click de la cámara fotográfica– y es hábil para eludir los comentarios de orden político.

–El gobierno preparó todo para dar el gran salto con el IVA en alimentos y medicinas. Hasta obligó al PRI a cambiar sus documentos básicos. Al final decidió no darlo. Los grandes industriales de alimentos procesados seguirán gozando de multimillonarias devoluciones; los más ricos del país seguirán sin pagar IVA, como

los más pobres, y el fisco federal dejará de recibir en 2014 cerca de 204 mil millones de pesos, poco más de un punto del PIB, según el Presupuesto de Gastos Fiscales –se le plantea.

–Esa es una definición de política tributaria que no nos corresponde tomar a nosotros. El SAT es un órgano que ejecuta, que observa y que busca que se cumplan las leyes. Nosotros no definimos la política tributaria.

–Para muchos analistas el cálculo político apuntaba como mejor salida la alianza con el PRD y las izquierdas y el aplauso de gran parte de la población.

–La decisión de no generalizar la tasa de 16% del IVA en alimentos y medicinas, o en otros rubros como transporte urbano, es que poco más de la mitad de los hogares en México gastan alrededor de 60% de sus ingresos en eso: alimentos, transporte y medicinas.

"Tomar la decisión de aplicarles el IVA en un momento en que ese 50% de la población tiene ingresos muy bajos hubiera provocado afectar mucho su ya precaria situación económica.

"Si lo vemos en perspectiva, hay muchos países que tienen el IVA generalizado. Algunos, en 21%, como España; otros, 19%, como Chile. Pero las condiciones económicas que viven los hogares en esos países son diferentes. Es ahí donde se explica en qué momento y en qué condiciones sí se puede o no determinar, por quien tiene la política tributaria, una definición como ésta."

Una gran controversia, y la más fuerte oposición de los grupos empresariales, es la que ha causado la propuesta de eliminar dos de los regímenes especiales más nocivos del sistema tributario nacional: la consolidación fiscal y el régimen simplificado.

En el primero, empresas de un mismo grupo tributan como una sola, permitiéndoseles neutralizar las utilidades de unas con las pérdidas de otras y así bajar la carga impositiva. En el segundo, que aplica a las empresas del campo y del transporte, pagan un ISR de hasta 10 puntos menos que el resto de las empresas, además de contar con apoyos sociales diversos… y entre ellas se encuentran, inclusive, grandes trasnacionales mexicanas de alimentos procesados.

Aristóteles Núñez dice que con esos tratamientos especiales ha habido abusos de escándalo, verdaderamente vergonzosos. No puede dar nombres. La ley se lo prohíbe. El secreto fiscal es un dique.

Explica con un ejemplo la perversidad en que ha caído la consolidación fiscal:

"Un grupo empresarial con diferentes ramas de actividad crea una empresa propietaria de aviones. Y los aviones le dan servicio a los ejecutivos del grupo y a sus familias. Una empresa que se dedica a administrar aviones y solamente vuelos para los ejecutivos, nunca va a ganar. Porque ese no fue su fin, sino el de proveer servicios. Entonces va a perder. El costo de los aviones, su mantenimiento y su operación, genera una pérdida alta que está neutralizando con la utilidad de una empresa productiva y rentable.

"Y si vas un poco más allá, identifica a dónde volaban los aviones y quiénes eran los pasajeros. ¿Hacía sentido económico?, ¿hacía sentido de negocio? No necesariamente. A veces era para fines recreativos. Lo que estaban haciendo era

erosionar la base del impuesto en esta figura de la consolidación a través de empresas, algunas perdedoras, nacidas para ello, con el ánimo de neutralizar utilidades y obtener los servicios que regularmente contratabas con particulares o de terceros."

El régimen de consolidación fiscal empezó a pervertirse desde 1982, y la etapa más crítica de abusos fue de ese año y hasta 1999, dice Núñez. "Los grupos empiezan a comprar empresas con pérdidas. Ya no era el origen ni los principios que dieron lugar al decreto de 1973, que era el de que tú mismo crearas una empresa y que en algún plazo tendría utilidades y que tendría un financiamiento razonable, pero no dejar de pagar.

"A partir de esos años se da una perversión del régimen. Empiezas a comprar empresas con pérdidas, con el ánimo de comerte las utilidades, o empiezas a generar empresas perdedoras, que sabes que nunca van a llegar a un punto de equilibrio".

En su origen, la consolidación era un instrumento para promover la inversión, pues permitía a las empresas financiarse a través de una baja carga tributaria en tanto lograban su punto de equilibrio para generar utilidades, según establecía el decreto presidencial de 1973.

Hoy se abusa del esquema para diluir las utilidades de unas –para pagar menos impuestos, o no pagar nada– en las pérdidas –deliberadas– de otras.

De acuerdo con información proporcionada por la oficina del propio entrevistado, al mes de julio de este año había 400 grupos empresariales y 5 mil 12 empresas controladas que se benefician del esquema de la consolidación fiscal.

Y según el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Secretaría de Hacienda, este año el fisco federal dejará de recibir mil 600 millones de pesos por ese concepto.

–Legisladores dicen que en realidad no desaparece la consolidación; que sólo se le da la vuelta.

–Pues no han leído bien la propuesta. Sí desaparece como existe ahora. Se crea el régimen de sociedades transparentes. Se limita la entrada de empresas con pérdidas. Es decir, empresas que traen pérdidas no pueden entrar a la consolidación. El diferimiento de impuestos se da a sólo tres años y no a cinco como es hoy. En tres años tendrás que haber pagado todo. A diferencia de lo que hoy tienes que pagar consolidado, ahora se lleva el control individualizado, y entonces conoces, de los integrantes del grupo, quién tiene pérdida, quién tiene utilidad, pero en lo individual y no sólo del grupo consolidador como hoy.

"Si tú quieres conocer el comportamiento de cada uno, llegas al grupo y auditas a cada uno, lo cual ya lo hace complejo. Ahora lo que tienen qué hacer, con la propuesta, es llevar una contabilidad individualizada de sus resultados. Y esa es la información que tiene validez para efecto después de concentrar en una empresa integradora.

"Hay otro elemento más. Que en ese régimen de tres años habrás pagado todo lo que diferiste y en esos tres años nosotros pudimos conocer el comportamiento de cada uno de los integrantes del grupo porque se obliga en la ley a que cada una de las empresas te reporte la información en lo individual y también lo haga público, pues hoy no es público.

“Si se revisa bien la reforma, la intención es que las empresas que están difiriendo impuestos lo hagan público, y no nada más las que están en el mercado de valores (en la bolsa) –que en el mercado de valores, por su ley y la transparencia que exige, deben revelarlo– sino cualquiera que entre al proceso de consolidación y cualquiera que entre al régimen de sociedades transparentes tendrá qué hacer públicos los impuestos diferidos.”

Del régimen simplificado, un tratamiento preferente del ISR –una tasa baja, de hasta 10 puntos menos– por el que han pasado Bachoco, Maseca y Bimbo, entre otras trasnacionales de alimentos, Aristóteles Núñez prefiere no abundar.

“Le puedo platicar de lo que se propone: eliminar ese régimen y dejar la tasa general de 30%; pero no de las omisiones del pasado y de los abusos escandalosos”.

Otra de las principales críticas a la reforma propuesta por el gobierno es que golpea sobremanera a las clases medias. A quienes tengan ingresos anuales que superen los 500 mil pesos se les aplicará una tasa marginal de 32% de Impuesto sobre la Renta. Es decir, hasta los 500 mil de ingreso pagarán la tasa máxima de 30%, y la cantidad que supere esa cifra pagará el 32%.

Adicionalmente, el clasemediero pagará IVA en las colegiaturas de sus hijos, en los intereses reales de sus créditos hipotecarios, o si vende su casa o si paga renta; ya no podrá deducir todos los gastos como lo hacían hasta ahora; también pagará IVA si compra una mascota o alimento para ésta, o si compra chicles; le costarán más los refrescos.

Y por si fuera poco, pagarán IVA cuando compren boletos para entrar al cine, al futbol, a la lucha libre, al box, a los conciertos, a las presentaciones musicales, y a cuanto espectáculo público sea posible, excepto el circo y el teatro.

Pero entre las patas se llevarán también a quienes no son de la llamada clase media.

Pero Aristóteles Núñez niega que haya un propósito expreso de afectar a la clase media por la vía del IVA o con el ISR. “En el caso del IVA, el secretario (Luis) Videgaray ha sido claro: en atención a la preocupación externada por los contribuyentes, se revisarán los temas, y quedará en manos de los legisladores tomar las decisiones correspondientes”.

Respecto del ISR, sugiere que es todo un mito la agresión a la clase media. Lo que se quiere, en general, con la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta es “disminuir los regímenes especiales y los tratamientos preferenciales, esos que erosionan la base y que hacen que se tenga una carga impositiva menor a la que en un principio la ley tenía como sentido. En otros países la tasa es mucho mayor que la de México. Y uno podría decir: sí, pero quizá el transporte público es gratuito y tiene una calidad mejor.

“Pongamos el caso de las personas físicas. Tienen una tabla progresiva, con una tasa mínima de 0.9% a una máxima de 30%, dependiendo de tus ingresos. ¿Quién paga la tasa de 30% hoy? El que gana arriba de 392 mil pesos al año o por ahí. Por los primeros 392 mil paga un componente fijo, está en la tabla. Si tú tomas este importe, el excedente calculado por 30% más el componente fijo, la tasa promedio efectiva es de 25%.

“Es un caso aplicable al 2% de la población. Pero mira lo que resulta: los que tienen una tasa efectiva de 25% de su ingreso, un asalariado, tienen hoy la posibilidad de deducir de manera abierta, algunos conceptos; los más importantes: los intereses reales de créditos hipotecarios, tus gastos médicos mayores –un gasto hospitalario, honorarios médicos, dentales– tu prima de seguro de gasto médico mayor, tu prima de seguro de retiro, o de la aportación que quieres hacer de manera individual, adicional a lo que tienes en tu esquema; las colegiaturas, y con un importe muy relevante…

“Entonces, en la medida en que tú sumas esas deducciones en tu declaración anual, disminuye tu carga impositiva… no sólo es directamente proporcional, que por cada peso que tú deduces, si estás en el rango de la tasa 30%, tienes 30 centavos de devolución o de saldo a favor o de disminución de tu carga impositiva.

“Entonces cuando haces tu declaración anual disminuyes tu impuesto a pagar, o bien tienes un saldo a favor. Entonces ¿en dónde se quedó tu tasa efectiva? Se disminuyó sustancialmente. ¿Por qué? Porque las deducciones le restan la progresividad. Y le dan un ingrediente de regresividad. ¿Por qué? Porque si tú en estos conceptos tienes mayor gasto empiezas a disminuir tu propia tasa.

“Entonces no se cumple la premisa de que quien más ingreso recibe más debe de pagar. Por eso se propone que esto se acote. No puedes deducir más que el que menos puede deducir. Si él puede deducir esto y es el que menos tiene, ese es tu tope.”

Donde no parece que Hacienda vaya a ceder es en la homologación de la tasa del IVA en la zona fronteriza, pasarla de 11% actual a 16% general, por mucho que han pataleado los empresarios, comerciantes, sobre todo, de la frontera.

Dice el jefe del SAT—quien ha desempeñado toda su vida profesional en el ámbito de la recaudación tributaria; subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Finanzas que comandaba Luis Videgaray Caso en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México– que hace mucho quedaron rebasados los propósitos de tener una tasa baja en las fronteras.

Los precios son más altos allí y la población tiene ingresos 27% más altos que las del resto del país. “El beneficio de una tasa de IVA más baja no ha sido para la población, con precios más bajos, sino para los intermediarios, que cometen una serie de abusos.

“Son pseudocontribuyentes que al manejar tasas diferenciadas simulan las ventas en la región fronteriza contra gastos e insumos pagados a 16% y en la diferenciación de las tasas, si pagan un IVA de 16% y, al vender, cobran un IVA de 11%, se quedan con un saldo a favor. Y ese saldo a favor el fisco está obligado a dárselos. Es una manipulación de las tasas; una ventana de abusos.”

Si bien este asunto del IVA en la frontera –que ha dividido incluso a los diputados del PRI, que anunciaron ya una votación diferenciada– parece que no va a “transitar”, la buena noticia es que empresarios y legisladores ya hicieron recular a la autoridad en otros temas.

De la reunión que tuvieron el miércoles pasado las cúpulas empresariales y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray y su equipo, resultó que el gobierno dará marcha atrás al IVA en colegiaturas y en diversos rubros que tienen qué ver con la

vivienda, así como en las importaciones temporales de las maquiladoras de exportación.
Funcionarios de Hacienda y diputados le dan forma ya a los ajustes del caso.

Televisoras y refresqueras, aliadas

Juan Carlos Cruz Vargas

En el debate de la reforma hacendaria propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto comienzan a salir a flote tanto los intereses de las compañías refresqueras –que se quejan por el gravamen que se les intenta aplicar– como los de las principales televisoras, cuyos dueños niegan sus espacios a quienes hablan de los efectos nocivos de las bebidas azucaradas en la salud de los mexicanos.

La semana pasada la asociación civil El Poder del Consumidor denunció públicamente que Televisa, Televisión Azteca y Milenio Televisión se negaron a transmitir el promocional "Impuesto a los refrescos para bebederos en las escuelas", que en 30 segundos alerta sobre la obesidad asociada al consumo de gaseosas y manifiesta su apoyo al gravamen hacendario a esos productos.

"La idea era salir antes de la reforma fiscal para influir en el presidente; sabíamos que la propuesta se estaba evaluando. Habíamos tenido reuniones en la Secretaría de Hacienda para promover el impuesto al refresco… La idea era salir con el anuncio dos o tres veces durante El Noticiero de (Joaquín) López Dóriga, no más, no había cómo pagarlo", relata a Proceso Alejandro Calvillo, director de la asociación civil.

Sin embargo, el monopolio de Emilio Azcárraga dio el portazo a la Alianza por la Salud Alimentaria –conformada por diversas organizaciones e integrantes de la comunidad científica y la productora del video–. De manera similar actuó TV Azteca, aun cuando había aprobado los contenidos del comercial, las condiciones de transmisión y el presupuesto. Al final sus directivos dijeron que "no tenían ni espacio ni horarios disponibles".

La transmisión del comercial implicaba un costo que oscilaba entre los 500 mil y 700 mil pesos que la Alianza por la Salud Alimentaria estaba dispuesta a pagar. Al final sólo se transmitió en CNN en español, Telefórmula, Dish y TVC, sostiene el entrevistado.

El asunto deja al descubierto "el gran poder" de las principales concesionarias del espectro, así como la ausencia de las autoridades y la violación del derecho a la información de los televidentes mexicanos, comenta Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), conformada por expertos en el tema.

"Si bien las televisoras tienen libertad contractual en materia de publicidad –ellos deciden los costos y a quién le venden–, debe tenerse en consideración que cuando se trata de una información vinculada con una política pública, el tema no sólo es impositivo, sino también de salud pública, por lo cual debe privar el interés público".

Hoy, el centro del debate es el impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende aplicar a las bebidas azucaradas (un peso por litro) como medida para contrarrestar el consumo de refrescos, que son causantes directos de la obesidad y diabetes, enfermedades en las que México ocupa los primeros lugares en el ámbito internacional.

Al presentar la iniciativa, la dependencia encabezada por Luis Videgaray aseguró que este “impuesto de salud” busca desalentar el consumo de calorías vacías con el propósito de reducir la incidencia de obesidad y sobrepeso, sobre todo entre los niños.
“Por esta vía mejorará la calidad de vida de la población, se elevará su productividad y se reducirán los costos de atender las enfermedades relacionadas al sobrepeso”, argumentó Hacienda, cuyos directivos esperan una recaudación adicional de 12 mil millones de pesos.

Las reacciones

La propuesta hacendaria molestó a la Coca-Cola, que de inmediato calificó de “discriminatorio y arbitrario” el gravamen. El director de la trasnacional refresquera en México, Francisco Crespo, respondió que eso “no resolverá el problema de la obesidad”.
–Es difícil reducir el consumo de refrescos con un gravamen, sobre todo si consideramos que México es el principal consumidor mundial. Además, en el caso de los cigarros, por ejemplo, está demostrado que aun cuando aumente su precio la gente sigue consumiéndolos –se le comenta a Calvillo.
–Los impuestos, cuando son representativos, afectan la incidencia del consumo. Por eso insistimos: que no sea de un peso, sino de dos; Hacienda se quedó corta. Además, no le estás poniendo el impuesto a las bebidas light; eso no lo dicen los refresqueros. Existe la Coca-Cola clásica, pero si se vende más cara, mucha gente va a irse a la light.
–¿Cuál sería el segundo paso?
–Toda la evidencia científica te dice que el tema de la obesidad es un problema ambiental.
Calvillo insiste: el Estado debe proteger a los niños de los anuncios publicitarios que presentan los alimentos procesados y los refrescos; incluso, dice, debe obligar a las empresas patrocinadoras para que pongan en sus etiquetas los componentes nutrimentales de los productos.
Por lo pronto ahí está el estira y el afloja de quienes están a favor del impuesto y quienes dicen que serán afectados, como la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), cuyos integrantes insisten en que si se gravan las bebidas azucaradas con un peso por litro, los consumidores terminarán pagándolo.
Del otro lado está el derecho a la información de la población a través de las pantallas, que es “limitado” por el duopolio televisivo, según la Amedi.
Su presidente, Agustín Ramírez, sentencia: “El tema es cómo, de manera deliberada, los consorcios mediáticos limitan un mensaje importante de salud pública (al negarse a transmitir el promocional). Yo creo que el derecho (a la información) debe privilegiarse”.
Pero la responsabilidad también recae en las autoridades, subraya. Y ese es el segundo problema, pues el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, ante una situación de esta naturaleza, por lo menos debería actuar de manera oficiosa

y hacer un señalamiento o emitir una opinión, aunque aún no tenga ley reglamentaria".

Y explica: "En estos tiempos, no sólo el Estado viola los derechos; también lo hacen los corporativos. Por el gran poder que tienen son susceptibles de ser llevados a juicios de amparo para obligarlos a ciertas conductas. Yo creo que en este caso se está violentando el derecho a la información, particularmente de aquella que podría verse beneficiada con el impuesto (a las bebidas azucaradas)".

Ante la negativa de Televisa y TV Azteca a transmitir el anuncio a favor del impuesto a los refrescos, dice Ramírez, "corresponde a la autoridad evaluar esa libertad de opinión de los grupos mediáticos para asimilar la contratación de publicidad. Del otro lado está el contrapeso social de los derechos de las audiencias, que también deben por lo menos emitir una postura". L

Pagaré más impuestos cuando...(Cantanta del evasor consciente)

Sabina Berman

1. Pagaré más impuestos cuando Raúl Salinas regrese su fortuna mal habida al fisco.
2. Pagaré cuando la fortuna que Arturo Montiel hizo en el Poder, más de mil millones de pesos, sea incautada.
3. Pagaré cuando Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, devuelva al erario los 33 mil millones que despareció, y sea encarcelado por las facturas falsificadas que presentó a la Secretaría de Hacienda.
4. Pagaré cuando cada burócrata de los primeros tres niveles de gobierno no resulte un millonario al final de cada sexenio.
5. Pagaré cuando los políticos cesen el saqueo de la Patria y ellos mismos no estén exentos de pagar impuestos. Aristócratas en una República. Príncipes en una Democracia. Anomalías imperdonables. ¿Debemos nosotros llenar el erario para que ellos lo vacíen?
6. Pagaré cuando tampoco aparezcan en el paisaje mexicano caprichos inservibles. Muros solitarios y sin uso. Presas construidas con piedra calcárea, que succiona el agua. Bibliotecas magníficas en la era del libro digital. Museos vacíos que a nadie interesan. Hospitales sin medicamentos cruciales. Telesecundarias sin televisores. Más que caprichos, coartadas de cemento y piedra: obras inservibles construidas porque donde hay una obra pública hay la oportunidad del pillaje del gasto público.
7. Pagaré más impuestos cuando deje de ser el sello de pertenencia a la clase política esta máxima infame: El respeto a la Corrupción ajena es la paz.
8. O esta otra: No mires el lodo de la Corrupción en el partido político ajeno cuando el tuyo es un pantano.
9. Pagaré cuando la Izquierda renuncie a vivir como los multimillonarios de la Derecha. En sus mismas colonias, con sus mismos automóviles y la misma cantidad de servidumbre.
10. Pagaré más impuestos cuando Televisa y Cemex y Jumex y Etcétera, paguen los impuestos que les corresponden.
11. Pagaré cuando pagar impuestos no sea bajar la cabeza como un cordero humillado. Cuando no sea pagar la cuota de la mansedumbre ante la injusticia. Cuando no signifique premiar a los ladrones de cuello blanco. Cuando pagar impuestos sea verdaderamente contribuir a la equidad en mi país.
12. Pagaré cuando Enrique Peña Nieto cumpla su primera promesa como presidente: crear el mecanismo para transparentar siempre y a toda hora las cuentas del Estado. Su Comisión contra la Corrupción que se esfumó en el olvido.
13. Pagaré cuando pueda ir con confianza a una clínica del Seguro Social a curarme del hígado.
14. Pagaré cuando se me olvide que Doña Mariana entró en zapatos de plástico un lunes al Seguro Social enferma del páncreas y salió el domingo tiesa y muerta y descalza y directo al cementerio.

15. No, no es que espere un gobierno perfecto. Un gobierno impecable. Una clase política de santos. No. Para nada. Es que espero lo natural en una Democracia civilizada. Simplemente el cese del robo al erario de los burócratas y simplemente una eficacia moderada en su ejercicio de mis impuestos.
16. Y entonces pagaré más impuestos. Oh sí, me vestiré de corbata –o no, recordé que soy mujer: me vestiré en vestido Chanel y zapatos de tacón– e iré con aire de fiesta a pagar lo que me corresponde para el bienestar de mis prójimos y de mí misma y de esa persona de la gramática que eriza la piel cuando de cierto existe: la primera persona plural: Nosotros.
17. Pero antes no pagaré más impuestos. Tal vez acate el consejo de mi médico y recurriré al trueque: algunas facturas no las haré: no declararé mis ingresos íntegros: cruzaré a la economía informal de la mano de una porción de la clase media.
18. No, no pagaré más impuestos antes de que todo esto suceda.
19. O al menos empiece a suceder. L

Mafias y mafiosos

Denise Dresser

Allí están. Allí siguen. Pese a las reformas aprobadas y los cambios prometidos. Los "grandes" líderes sindicales de México. Caciques, depredadores, dictadores, el club de la eternidad. Como los describe Francisco Cruz Jiménez en su nuevo libro, Los amos de la mafia sindical, son producto de una relación perversa con el poder que les ha permitido forjar una gerontocracia sindical antidemocrática. Producto de una anuencia gubernamental que les ha permitido erigirse en centros de veto ante cualquier intento por circunscribir sus "derechos adquiridos". Emblemas de antiguo régimen que no aceptan la crítica, no representan a sus representados, no se guían por principios sino por intereses. Contra ellos sólo queda la muerte o la cárcel.

Su éxito radica en la capacidad para mostrar lealtad y docilidad al presidente en turno. En su propensión a complacer a empresarios y contener a los trabajadores. En su poder para convertir a gremios enteros en ejércitos cautivos y temerosos. En su capacidad para utilizar todo tipo de artimañas, como la cláusula de exclusión, la lista negra y la manipulación de los estatutos para autorizar su reelección "por esta única vez". Para erigirse en líderes vitalicios, a perpetuidad. Encumbrados, poderosos, acaudalados, impunes. Y a cambio, el gobierno cierra los ojos y se lava las manos. Les mantiene sus prebendas, les permite engordar sus cuentas bancarias, les provee casas y departamentos en Miami o San Diego.

Allí están. Allí siguen. Enquistados en casi todos los sectores, reproducidos fielmente en los estados. Víctor Flores Morales, Francisco Hernández Júarez, Juan Díaz de la Torre, Napoleón Gómez Urrutia, Joel Ayala Almeida, Carlos Romero Deschamps, Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Fuentes del Villar. Siguiendo fielmente las lecciones de sus predecesores, como Fidel Velázquez, Leonardo Rodríguez Alcaine, Luis Napoleón Morones. Longevos, reelectos, inamovibles. Muchos de ellos con más de 30 años en el poder. Muchos de ellos con vidas lujosas, gustos caros, privilegios desmedidos.

Como Joel Ayala, líder de los burócratas federales –a través de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado–, quien vive obsesionado con los caballos de pura sangre. Quien ha acumulado una fortuna mayor a los 15 millones de dólares. Quien ha ocupado su cargo desde 1977, con mano férrea. Quien ha sido diputado federal dos veces y senador en tres ocasiones. O el caso de Joaquín Gamboa Pascoe, el líder sindical que celebró su ascenso al Congreso del Trabajo con un reloj de producción limitada en oro amarillo valuado en 70 mil dólares. Personajes –todos– asociados con la corrupción. Con la negociación de derechos sindicales. Con el uso clientelar de cargos públicos. Con la consolidación de una oligarquía sindical mexicana.

Y lo peor es que pocos cuestionan, airean, critican, someten a escrutinio a los eternizados en el cargo. La sociedad mexicana asume a la gerontocracia rapaz como un hecho folclórico e incambiable del escenario político nacional. Por ello

sus miembros pueden seguir eternizados en el cargo. Aguantan los periodicazos, aguantan la humillación, aguantan los escándalos, aguantan el descrédito, mientras se comportan como los peores enemigos de sus agremiados. Los trabajadores son una vaca a la cual ordeñar, la autonomía sindical es un cheque en blanco para robar.

Víctor Flores usa un reloj de 50 mil dólares en la mano derecha. Napoleón Gómez Urrutia construyó una casa en la punta del Cerro del Tepozteco valuada en 4 millones de dólares. Luis N. Morones usaba piedras preciosas en cada dedo de una mano. Carlos Romero Deschamps posee una "casita" en Cancún con un valor cercano al millón y medio de dólares. Mientras los trabajadores ganan 300 pesos al día. Mientras en 2011 el dirigente del sindicato petrolero recibió 282 millones de pesos por concepto de "ayudas al comité ejecutivo" del sindicato y 200 millones provenientes de cuotas sindicales.

Hoy la retórica oficial reza: "Mover a México al lugar que se merece". ¿Pero cómo lograrlo si no se mueve de su lugar a ninguno de los jerarcas sindicales? ¿Si las reformas auguradas o pactadas prometen "proteger los derechos de los trabajadores", o sea de quienes los expolian? ¿Si la reforma energética no contempla lidiar con Carlos Romero Deschamps, el autor de una maloliente historia de oscuras maquinaciones, dudosos negocios, tráfico de influencias y riqueza mal habida? ¿Si a través del sindicato le ha dado cobijo a hermanos, primos, cuñados, sobrinos y cuates? ¿Si aún no queda esclarecido el escándalo de los 500 millones de pesos que Pemex le prestó al sindicato y hasta la fecha sus agremiados no saben dónde quedaron? ¿Si nadie ha sido sancionado por el desvío de recursos multimillonarios de Pemex para apoyar la candidatura presidencial de Francisco Labastida? ¿Si la impunidad y el fuero protegen a Romero Deschamps adondequiera que va?

De allí la importancia de denunciarlo. De allí el imperativo de recordar a cada mexicano interesado en la reforma energética que Romero Deschamps administró de 2007 a 2010 unos 685 mil pesos diarios –poco menos de 30 mil pesos por hora– y nadie sabe cómo y para quién. Mientras tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto guarda silencio. Pemex guarda silencio. El sindicato guarda silencio. Y Paulina Deschamps exhibe en su cuenta de Facebook sus viajes por el mundo en aviones privados, sus paseos en yates, sus bolsas Hermes de 12 mil dólares. Y Carlos Romero Deschamps argumenta "estar tranquilo y con las manos limpias". Y así sigue viviendo la sagrada familia de líderes sindicales mexicanos. Escribiendo, día tras día, historias de mafias y mafiosos. L

Los veneros de petróleo…

Javier Sicilia

Para Álvaro Mutis, siempre en el corazón.

La discusión traída por la propuesta de reforma energética de Enrique Peña Nieto ha vuelto, como siempre que el tema del petróleo reaparece en el imaginario mexicano, a traer a la memoria los versos que Ramón López Velarde escribió en 1921 –el año de su muerte– en Suave Patria: "El niño Dios te escrituró un establo/ y los veneros de petróleo el diablo".

Los poetas suelen ser clarividentes. Sus imágenes revelan a veces el horror que nos aguarda. No son meras ocurrencias. Son visiones que el poeta padece y que, en el relámpago de su luminosidad, guardan revelaciones profundas que, por desgracia, pocos atienden y muchos reducen a anécdotas de sobremesa. Sin embargo, el verso, en su concisión, es terrible: el petróleo, que pocos cuestionan, que en la polémica que se ha vuelto a desatar es elogiado como fuente de riqueza y poder, en el poema de López Velarde es, si atendemos al sustantivo "diablo", motivo de perdición. Independientemente de que en esta polémica –y en el orden de la vulgaridad del pragmatismo económico que quizá también el diablo escrituró– la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas es la mejor contra la de Peña Nieto, quiero entrar en la verdad que guardan los versos de López Velarde.

Si algo tiene el petróleo es su tremenda capacidad destructiva. Para comprenderlo habría que leer un libro fundamental, Energía y equidad, que Iván Illich escribió en 1973, 52 años después de los versos de López Velarde. No entraré en la parte sustantiva de la tesis, que es la crítica de la desproporción energética. Me centraré sólo en el petróleo y en una de sus monstruosidades, el automóvil.

El petróleo es, en primer lugar, el principal responsable de la tragedia atmosférica. Un coche compacto que transporta a un solo hombre sobre 500 kilómetros consume 175 kilogramos de oxígeno, es decir, lo que respira una persona en un año. Las plantas reproducen suficiente oxígeno para los más de 7 mil millones de personas que hay en el mundo. Pero no pueden hacerlo para un mundo cada vez más automovilizado. La inmensidad de CO_2 que libera el coche está generando parte del calentamiento global, responsable de la virulencia de los huracanes que ha hecho más honda la tragedia que vive el país.

Esta es la parte evidente que la lucha por la riqueza económica del petróleo ha olvidado. Hay otra, no evidente, que, como lo demuestra Illich, genera una profunda inequidad y corrompe, al igual que la atmósfera, el ambiente social. El automóvil, cuya existencia depende ahora de la gasolina o del diésel –será igual con otro tipo de energías–, además de que es espantosamente caro –carburante, impuestos, seguro, estacionamientos, servicios, verificaciones, llantas y descomposturas–, causa desigualdades profundas: 1) consume tiempo inútil e inequitativamente: Mientras una clase privilegiada va al trabajo en su alfombra motorizada, la mayoría de la gente tiene que recorrer esas mismas y monótonas

distancias en asfixiantes transportes cuyo tiempo de desplazamiento, perdido en estrés, tumultos y parálisis (la circulación en la Ciudad de México en el transporte es de 15 kilómetros por hora para distancias enormes), es mayor; 2) destruye tejido social: Las autopistas, los viaductos y los aeropuertos cortan los accesos de un lado a otro del campo y del barrio, “las ambulancias empujan las clínicas más allá de la corta distancia que se puede cubrir llevando a un niño enfermo”, y vuelven al hospital un privilegio de ricos; los camiones que llevan a los pueblos productos industriales destruyen los mercados locales y desplazan a poblaciones enteras hacia las ciudades en busca de trabajo.

Por obra del petróleo articulado en transportes, hombres y mujeres quedamos paralíticos, necesitados de prótesis operadas con energías que nos desposeen de nuestro entorno y nos someten a horarios cuyos costos en tiempo, vida humana, vida común y violencia nadie parece ver. Culiatornillados a los asientos de los transportes, que nos bambolean de aquí para allá como mercancías, olvidamos que el tejido social, que sólo puede darse en un territorio, lo creamos con nuestro cuerpo y nuestras piernas. Cada vez más sometidos por la energía del petróleo –metáfora de cualquier desmesura energética–, destruimos la vida social de las calles, de los parques, de los comercios locales, y dejamos el territorio de la vida social a los criminales. “La órbita puntual y diaria” del motor nos “enajena –dice Illich– de cualquier territorio libre”.

Por ello, privatizado o no, el petróleo es, como lo reveló hace casi 100 años López Velarde frente al entusiasmo de la modernidad, el venero del diablo que se agotará, que nos tiene, como tantos otros dolores de la Patria, enfrentados y asfixiados. Su horror debería hacernos pensar más en establecer límites energéticos y equitativos, como el uso de la bicicleta –símbolo de la equidad en el trasporte–, y el empleo de otro tipo de energías que privilegien la lentitud de la vida sobre la prisa y la desigualdad atroz del consumo. Recuerdo, en este sentido, a la India: Un ejército hiperindustrializado,- que se movía con el poder del carburante, nunca pudo derrotar ni someter a un pueblo que se desplazaba al ritmo de las piernas, la bicicleta y la rueda de la charca.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón. L

El retorno de Fausto

Ernesto Villanueva

Michoacán, del que soy orgullosamente originario, enfrenta serios problemas de gobernabilidad en buena parte de sus municipios. El secuestro del estado de derecho se ha ampliado a grandes porciones de la entidad. En ese contexto, el gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, anuncia su posible retorno a la gubernatura. Esa aparente decisión tendría eventuales resultados de pronóstico reservado. Veamos.

Primero. Fausto Vallejo se presentó a las elecciones en Michoacán cuando padecía una enfermedad grave de la que no informó a los electores, quienes recibieron gato por liebre. Ya en Proceso abordé el tema del padecimiento que le ha impedido gobernar. (http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=317376&rl=wh)

Licencia tras licencia, por obvios problemas de salud, Vallejo permitió, por acción u omisión, que el estado de derecho se erosionara. La más reciente licencia que le fue concedida por el Congreso local se consideró como una vía para que por fin pudiera iniciarse la recuperación gradual de la entidad. Desde hace semanas la familia de Vallejo Figueroa, primero por Twitter y después a través de algunas entrevistas en radio con el propio Vallejo, ha empezado a anunciar su retorno con el fin de ver si existen las condiciones políticas para que ahora haga lo que nunca ha hecho: gobernar.

El transplante de hígado al que fue sometido es la expresión más grave de su diabetes avanzada, pero jamás supondría que esté debidamente recuperado. Tiene además problemas de riñón y páncreas, así como neuropatías, lo cual impide hablar razonablemente de que esté “como nuevo”, según ha declarado a los medios. ¿Qué especialista médico podría afirmar que el estrés de gobernar un estado como Michoacán es la mejor forma de atender la salud de Figueroa? Sólo un milagro, que no creo sea el caso, haría que esté “como nuevo”, pues sería algo inédito el hecho de curar una enfermedad que hasta ahora sólo puede ser controlada.

Segundo. Lo primero que habría que preguntarse es con qué recursos se fue a Estados Unidos a realizarse su transplante. ¿Lo pagó Vallejo con su propio dinero o cargó los gastos al pueblo michoacano? Cabe recordar que los seguros de gastos mayores de los altos funcionarios, como el del secretario de Hacienda, tienen una cobertura en territorio nacional, incluso con la potenciación que aumenta la cantidad del monto asegurado en territorio nacional y cubre emergencias en el extranjero. ¿El seguro médico de gastos médicos mayores de Figueroa incluye operaciones programadas en Estados Unidos? Eso lo debería responder el gobernador con licencia.

Vallejo Figueroa en realidad busca regresar al poder para proteger a un grupo político ineficaz y corrupto. Lo lamentable para los michoacanos es que anteponga su interés personal o de grupo al interés superior de Michoacán. El

gobernador interino, Jesús Reyna, no es precisamente santo de mi devoción, pero reconozco que deben hacerse a un lado filias y fobias para encontrar lo que se ha perdido en el estado con Vallejo poniéndole una camisa de fuerza a su secretario general de Gobierno.

En esa ruta, Reyna debe mantenerse como gobernador, no interino, sino como sustituto, por varias razones; entre ellas: a) porque como secretario general de Gobierno tiene mejor que nadie un mapa de lo que sucede en el estado; b) porque tuvo la valentía de pedir la renuncia a las peores expresiones del equipo de Vallejo, requisito básico para que pueda operar con la más amplia libertad en beneficio de la entidad, y c) porque existe una estrategia federal y local de rescate de Michoacán donde el operador de este proyecto es Reyna.

Tercero. Michoacán no puede vivir bajo el amago de Vallejo Figueroa regateando al gobernador interino Reyna espacios de poder ajenos al interés público. Una cosa es clara: El primero hará hasta lo imposible por retornar, aunque le cueste la vida en el intento por mayores complicaciones a la de por sí multifactorial y grave enfermedad que le aqueja. O en el siguiente escenario buscará negociar posiciones para su grupo político o establecer condiciones para su retiro de la escena pública estando sin estar.

Eso debe ser inaceptable. Los ciudadanos de buena fe, que constituyen la amplísima mayoría de los michoacanos, deben apostar a que se regenere el tejido social, a que se reconstruyan los espacios de interlocución, a que se recuperen los espacios públicos para la convivencia social, sin temor a que su integridad personal esté en riesgo.

Existen, por supuesto, las vías jurídicas para resolver el problema de fondo. Hay quienes consideran que el artículo 76, fracción V de la Constitución federal, es la solución bajo la figura de la desaparición de poderes. No me parece que es el camino adecuado. Creo, en cambio, que la norma aplicable a este caso concreto está en lo dispuesto por el artículo 57, particularmente su párrafo segundo, de la Constitución Política local, que se refiere a la falta absoluta de gobernador.

En ese sentido, si un panel independiente de médicos especialistas afirma que Fausto Vallejo está “como nuevo” –lo cual es muy improbable–, podría volver; pero, de no ser el caso, el Congreso, dada su condición de soberano, puede interpretar las licencias consecutivas como falta absoluta y actualizar la hipótesis normativa haciendo un análisis sistemático de la Constitución local con el fin de que Reyna pase a ser gobernador sustituto. Dejar que Vallejo Figueroa regrese a gobernar sería tanto como seguir alimentando la destrucción total del estado de derecho. El Congreso michoacano tiene la palabra. I

evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com

La guerra de Francisco

Bernardo Barranco V.

Es muy indicativo que, precisamente ante más de 100 miembros del Cuerpo de Gendarmería de la Santa Sede, el Papa Francisco haya confirmado la existencia de fuertes tensiones dentro de la Curia, al grado de definirlas como una "guerra civil". Así lo expresó: "Es una guerra que no se hace con las armas que conocemos, se hace con la lengua", con rumores y chismes, expresó en la gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos.

Agregó: "Pidamos a San Miguel que nos ayude en esta guerra: Nunca debemos hablar mal uno del otro, nunca abrir los oídos a los chismorreos. Es necesario frenarlos… Les pido que no sólo defiendan las puertas, sino la puerta del corazón de quien trabaja en el Vaticano, donde la tentación entra exactamente, como en tantos otros sitios, con un talante definitivamente negativo".

En realidad Francisco ha mostrado, desde su entronización, no sólo distancia de la Curia, sino incompatibilidad con los bandos y luchas palaciegos. En repetidas ocasiones ha externado su desaprobación y no ha optado por ninguna corriente rijosa, al grado de que en estos primeros meses se le ve hasta distanciado del aparato tradicional del Papa. Así, ante los religiosos latinoamericanos, confirmó la existencia de un poderoso "lobby gay"; en Brasil se refirió a la "psicología de príncipes" de muchos actores, y en sus dos últimas entrevistas –tanto con la revista jesuita fundada en 1850, Civilta Cattolica, como con el diario liberal de izquierda La Repubblica– señaló que la decisión de una profunda reforma en la Curia viene de un mandato de los cardenales que lo eligieron Papa. Ante el periodista italiano Scalfari cuestionó el narcicismo de muchos altos representantes de la Iglesia y los "halagos y exaltaciones de sus cortesanos. La corte es la lepra del papado", dijo contundente.

En los pocos meses que lleva en el Vaticano, ha descubierto un gran defecto. Es la visión vaticano-céntrica que "ve y atiende los intereses del Vaticano, que son todavía, en gran parte, intereses temporales. Esta visión vaticano-céntrica se traslada al mundo que le rodea. No comparto esta visión y haré todo lo que pueda para cambiarla. La Iglesia es o debe volver a ser una comunidad del Pueblo de Dios y los presbíteros, los párrocos, los obispos que tienen a su cargo muchas almas, están al servicio del Pueblo de Dios". Es decir, Francisco ha emitido el diagnóstico de un Vaticano que se sirve de la Iglesia en lugar de servirla. Estos intereses clericales someten a las Iglesias e impulsos locales, además de que muchos altos funcionarios de la Curia se sirven de la estructura para satisfacer sus intereses temporales y de poder.

La reunión de tres días que tuvo el Papa Francisco con los cardenales subrayó la puesta en marcha de la reforma de la Curia y del Colegio Eclesiástico. La comisión de ocho cardenales (G-8), procedentes de diversos continentes, ha recogido numerosas propuestas de episcopados nacionales y personas clave de todo el mundo, las cuales están siendo analizadas y darán pauta a cambios necesarios no sólo en la burocrática estructura cupular de la Iglesia, sino igualmente en la

recomposición de muchos episcopados, como el mexicano, cuya dependencia de las directrices de Roma han contribuido a una pérdida de vitalidad y rumbo. Hans Kung, en un reciente artículo publicado en El País, consideró a este momento como la prueba decisiva del pontificado del Papa Bergoglio; mientras que el Financial Times se preguntó hasta dónde podrá ir Francisco con sus reformas, ya que ha desafiado abiertamente al poder conservador.

Hasta ahora, los cambios y transformaciones en la vida de la Iglesia habían sido procesados con lentitud y consumían décadas para operarse. Sin embargo, en unos cuantos meses, el Papa Francisco ha transformado la noción del tiempo y de los cambios dentro de la cúpula de la catolicidad. A sus 77 años, el Papa parece llevar prisa. Bergoglio ha pasado de los gestos a las palabras y de las palabras a los hechos. Ha entusiasmado por su estilo pastoral de cercanía humana porque ha traído aires de renovación, en una estructura religiosa ahogada por las intrigas internas, las luchas de poder, los escándalos sexuales y la disminución porcentual de fieles en el mundo. Hay una evidente pérdida de capital moral, pues éste ha sido malgastado por la Iglesia en los últimos 10 años. Francisco habla de humildad y sencillez, y las ejerce.

Mientras tanto, a Francisco se le percibe solitario en la compleja estructura romana. El hecho de no haber tomado partido por ningún grupo en pugna, como los cuervos de Angelo Sodano, el lobby gay y los cortesanos de Tarsicio Bertone, le ha dado al Papa libertad, pero al mismo tiempo lo ha vuelto vulnerable porque no cuenta con un aparato propio ni con operadores. En su entrevista con Civilta Cattolica se demarcó del conservadurismo católico: “Jamás he sido de derechas”. Este deslinde resulta significativo, pues ha sido precisamente el conservadurismo lo que ha sumido en una profunda crisis de época a la Iglesia católica.

Francisco ha empezado a nombrar a su propio equipo, en el que sobresale el futuro secretario de Estado, Pietro Parolin, nuncio en Venezuela. Destacan también Beniamino Stella en la Congregación para el Clero y Lorenzo Baldisseri en el Sínodo de Obispos. En realidad pocos. La designación de Battista Ricca como persona de confianza de Francisco en el Banco Vaticano fue severamente impugnada por sus opositores al balconear su pasado gay en Montevideo y sus amoríos con un miembro de la gendarmería vaticana.

Cabe resaltar que en esta guerra intervienen los llamados “vaticanistas” –muchos de los cuales guardan proximidad y hasta complicidad con las corrientes en pugna en la Curia–, ahora amenazados por Bergoglio. En efecto, Sandro Maggister, reconocido analista en L’Espresso, se prestó para golpetear la designación del Papa en el Instituto para las Obras de Religión (IOR) o Banco Vaticano. Otros con mayor sutileza, como Andrea Tornielli, describieron a Francisco como el “Papa-párroco”. Algunos recibieron con recelo el populismo pontifical al sentenciar que hay “un peronista como Papa”, que no está a la altura intelectual de Ratzinger y que no posee el carisma de Wojtyla.

Pese a lo anterior, la fuerza de Francisco está en su enorme popularidad. Ganó con sus gestos de humildad y proximidad humana la aceptación de los italianos, y sobre todo, a partir de su visita a la isla de Lampedusa y su exitoso viaje a Brasil, Francisco se ha fortalecido. De modo que la fuerza de Bergoglio está fuera del

Vaticano: radica en su aceptación mediática y en el apoyo de numerosos cardenales que en el cónclave demandaron la reforma de la Curia y de algunos episcopados poderosos, como el alemán, el francés y el estadunidense.

Ante las resistencias, Francisco ha creado con sus numerosas y reveladoras entrevistas una atmósfera de cambio; una expectativa mediática de que son necesarias profundas modificaciones de forma, pero principalmente de fondo, en la vida de la Iglesia. El grupo de los ocho cardenales ha deliberado los primeros pasos de la reforma estructural de la Curia. Hay expectación y tensión en Roma. Muchos intereses en juego. El Papa empuja hacia una conversión pastoral de la Curia. Los cambios no serán sencillos ni se operarán con tersura. Los conservadores viven con sobresaltos porque Francisco ha abordado con notable distancia temas intocables, como el de los homosexuales, las mujeres, los divorciados vueltos a casar, la teología de la liberación, la transparencia en las finanzas, el Concilio Vaticano II, la obsesión de la Iglesia con su agenda moral, entre otros. Y, recientemente, mencionó su resistencia al culto a la personalidad de Juan Pablo II en su próxima canonización, así como su postura en torno a la figura de Juan XXIII.

Francisco está dispuesto a sacudirse los poderes fácticos y paralelos que dominan en el Vaticano. Por ello, y en este contexto, debe leerse la afirmación del Papa: “Yo sueño con una Iglesia madre y pastora. Los ministros de la Iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es Evangelio puro. Dios es más grande que el pecado. Las reformas organizativas y estructurales son secundarias, es decir, vienen después. La primera reforma debe ser la de las actitudes”. L

Otro año perdido

Axel Didriksson

Con todo y la aprobación de la reforma al 3° constitucional, lo que ha definido la política del actual gobierno es su empecinamiento en golpear a los trabajadores de la educación que no han aceptado la reforma laboral impuesta ni la centralización burocrática a la que se quiere volver, mientras pretende mantener los privilegios y las componendas del grupo en el poder del SNTE –aun cuando su otrora líder ha sido calificada como la cabeza de una "célula criminal"– sin atender la sustancia de la actividad educativa.

La evaluación universal al magisterio se pondrá en marcha, conforme lo tiene pensado la SEP, a mediados del próximo año, pero sus resultados empezarán a medirse en 2015. Sin embargo, para 2014, las probabilidades de mejorar la educación, en todos sus grados y niveles, no podrá ocurrir y sólo se reproducirán la actual situación de obsolescencia, la baja cobertura y calidad, el mismo bajo sitio en el índice de desarrollo humano (el World Economic Forum ubica la calidad de la educación en México en el lugar 102 entre 122 países), sobre todo porque el presupuesto para este sector en el próximo año mantiene la lógica inercial de ciclos anteriores y su desarticulación programática, además de que no destina recursos para programas que podrían mejorar la cobertura o el desempeño de los maestros, ni para reducir la desescolarización o el rezago educativo.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, todo lo correspondiente al sector educativo está sujeto a la negociación y a una eventual aprobación de las denominadas "reformas estructurales". Aún así, se proyecta un crecimiento del 3.9% del PIB respecto al año anterior, sujeto a una inflación de 3.0%, es decir, que se autoanula. Para el sector educativo en relación con el PIB se proyecta un solo punto de aumento respecto de 2013, con lo cual la retórica sobre la importancia de la educación para este gobierno simple y llanamente se desmorona.

De corregirse estas proyecciones generales, por efecto de la tragedia natural reciente y las corruptelas que han salido a la luz y que tendrán que taparse, más la recesión que se irá agudizando hacia el fin de año y principios del 2014, nada bueno espera a los bolsillos de los contribuyentes cautivos, sobre todo si se impone la reforma fiscal anunciada, y tampoco para los alumnos y maestros, porque con seguridad verán caer el escaso gasto educativo que se presenta.

Para el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) se prevé un aumento de 18.72% respecto a 2013; para el Conacyt, de 20.53%, y también suben ligeramente los subsidios dirigidos a la UNAM, el Politécnico, el posgrado, y los recursos para la compra de laptops (5º y 6º de primaria); aumenta el gasto en infraestructura y se propone una ligera mejoría para las universidades públicas de los estados.

De allí en fuera, todo va para abajo, o se mantienen las cifras destinadas en 2013. El problema es que se deja a la deriva, con reducciones severas o con aumentos cero, programas clave, como los de recreación y cultura (-34.88%), educación

para adultos (-53.38%) y educación normal en el DF (-11.45%); asimismo, los de edición de libros de texto y materiales educativos; educación de la población rural e indígena; los dirigidos a madres y jóvenes embarazadas, a la formación continua y a la superación profesional del magisterio; también, los de fomento a la lectura, desarrollo profesional docente, reforma curricular, telesecundarias, becas, inclusión y equidad educativa, educación intercultural y bilingüe. Inclusive, para el fondo de ampliación y diversificación de la oferta de educación superior no hay un solo peso de aumento.

Mucha apariencia de reforma y muy poco para la acción. Siguen igual la insuficiencia y la incertidumbre en las asignaciones presupuestales, y en general la política de financiamiento educativo no ha logrado (y no pretende hacerlo para el próximo año) hacer frente al incremento de la demanda educativa, mejorar las condiciones de acceso y de calidad del sistema, superar las diferencias locales y regionales, elevar los magros salarios magisteriales y las percepciones de las plantas académicas, ni propiciar su expansión y regulación.

Se advierte ahora la misma insuficiencia y rigidez de los gobiernos anteriores, tanto como la muy baja percepción de los rezagos y los atrasos harto evidentes. La prioridad es desgastar y amedrentar, dividir y confundir al magisterio disidente, y no darle solución al asunto. Lo educativo no tiene, de nuevo, tanta importancia.

L

Siria en su laberinto

Olga Pellicer

Hace un mes escribí en esta revista sobre la arrogancia e irresponsabilidad que conllevaba la decisión del presidente Obama de actuar militarmente en Siria. Al momento de elaborar ese artículo parecía que la decisión de lanzar ataques aéreos por parte de Estados Unidos en ese país estaba tomada. Se justificaba por la necesidad de cumplir el compromiso de Obama de actuar en caso de confirmar el uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Poca importancia se daba al hecho de que no estuviesen resueltos los costos en términos de vidas de civiles inocentes, la profundización de la situación de caos en ese país y, lo que es peor, la imposibilidad de terminar de tal manera con la presencia de armas químicas y su potencial de destrucción.

Hoy las circunstancias han cambiado. En un acto de gran habilidad diplomática, Rusia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, aprovechó un comentario casi casual del encargado de la diplomacia estadunidense, John Kerry, sobre la conveniencia de encabezar una negociación diplomática para tener control y eliminar las armas químicas existentes en Siria. Las pláticas que se iniciaron de inmediato en Ginebra permitieron encontrar, al menos a corto plazo, una opción distinta para Siria. El asunto terminó con el texto de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la eliminación de armas químicas en ese país, aprobada por unanimidad. Así, después de años en que el Consejo estuvo paralizado para actuar más decididamente en Siria, debido al uso del veto por parte de Rusia, la conducción ha regresado a las Naciones Unidas.

Esta historia tiene muchas lecturas, que tienen que ver con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, con la responsabilidad de los países occidentales en asuntos de paz y seguridad en el Medio Oriente, con el papel de las Naciones Unidas y, finalmente, con el desesperante laberinto de violencia en Siria, la cual empeora sin encontrarse el camino de salida.

Sin duda las negociaciones ruso-estadunidenses fueron buena señal en una etapa en que las relaciones entre los dos países se encontraban en uno de sus peores momentos debido, entre muchas otras cosas, al asilo concedido por Rusia a Snowden. Con esos antecedentes, los acuerdos logrados para poner en marcha al Consejo de Seguridad son muy positivos. Sientan un buen precedente para los problemas más complejos que vienen en relación con el programa nuclear de Irán.

No todos coinciden, sin embargo, en ver con buenos ojos el entendimiento alcanzado. La portada de la revista The Economist (21/09/2013) resume bien una visión crítica al presentar a los países occidentales como un león impotente que se detiene antes de cruzar las fronteras de Siria. Para los autores del artículo, Rusia sólo enmascara su apoyo a las dictaduras y su interés en mantener influencia en la zona. También opinan que el suspiro de alivio que han dado Obama, Cameron y Hollande refleja bien hasta dónde son conscientes del rechazo de la opinión pública en sus países a intervenir en los conflictos del Medio Oriente, y que los recuerdos negativos de Irak y Afganistán están todavía muy presentes. Quienes

aspiran a la democracia en el mundo, concluyen, “se acordarán de Siria y no tendrán fe en Occidente”.

El mando se encuentra ahora en las Naciones Unidas. Cierto que la resolución mencionada pasó sin problemas en el Consejo de Seguridad. Lo difícil es ponerla en práctica y saber cómo se reaccionará si Al-Assad no cumple con la entrega, en su totalidad, de las armas químicas. Deshacerse de ellas no es tarea fácil. Requiere, primeramente, confiar plenamente en la información que ha proporcionado el gobierno sirio. Después, el trabajo de los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas será localizarlas y destruirlas. Dado el escenario planteado por la violencia de la guerra civil en Siria, los peligros son múltiples. Nunca se ha emprendido una operación de tal envergadura en medio de una guerra. Fallar tendría un alto costo para la confianza en las posibilidades de acción por parte de la ONU. De acuerdo con la resolución del Consejo, las mencionadas armas deberán estar eliminadas para 2014.

Queda pendiente la gran interrogante: ¿Cómo afecta lo anterior la guerra civil en Siria? ¿Cómo queda el mapa geopolítico del Medio Oriente?

La destrucción de las armas, de lograrse, no aminorará el conflicto en Siria. La división en las filas de la oposición es cada vez mayor. Así lo ponen en evidencia numerosos grupos rebeldes de la Coalición Siria de la Oposición, establecida en Turquía y la cual tiene el reconocimiento de varios países occidentales. Ese faccionalismo y la presencia de sectores del islamismo ligados a Al Qaeda auguran, por una parte, pocas posibilidades para una acción exitosa contra el todavía poderoso ejército del gobierno, y por la otra, aumenta el recelo sobre lo que puede surgir al final de esta guerra civil.

Por lo que toca a los sentimientos de la población ante el entendimiento entre Rusia y Estados Unidos, reportajes realizados entre diversos sectores hablan de desencanto o indiferencia. Para grupos de la oposición se ha dado, simplemente, una oportunidad más a Al-Assad de seguir en el poder.

En resumen, la gravedad del conflicto en Siria no ha cambiado. Éste puede empeorar y prolongarse muchos años. Las armas siguen llegando. Lo que sí ha cambiado es la situación geopolítica en la región y la cercanía de una acción militar por parte de Estados Unidos. La presencia de Rusia se ha legitimado. Ambos son ahora un interlocutor inescapable para dialogar sobre los problemas del Medio Oriente. A su vez, el camino de la diplomacia, más cercano al estilo de Obama, tiene una oportunidad de alcances limitados, cierto, pero de menor riesgo.

L

La estrategia antidrogas condiciona la paz

Rafael Croda

Representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que negocian la paz en La Habana están a punto de abordar un punto clave: la "solución al problema de las drogas ilícitas". Expertos coinciden en que un eventual acuerdo transita por el replanteamiento de la lucha contra la producción y tráfico de estupefacientes, lo que dejaría atrás la fallida estrategia "represiva" impuesta por Estados Unidos con el Plan Colombia.

BOGOTÁ.- Ante el fracaso de la lucha global contra la producción, tráfico y consumo de drogas, las políticas alternativas para combatir ese fenómeno comienzan a tomar forma en el marco del proceso de paz puesto en marcha en La Habana por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante las próximas semanas los delegados del gobierno y de la guerrilla discutirán el punto cuatro de la agenda de negociaciones titulado "Solución al problema de las drogas ilícitas". Lo harán desde una perspectiva multidimensional a fin de reformular la estrategia de combate a las drogas seguida por este país en las últimas décadas y cuyo enfoque represivo –atado al Plan Colombia financiado por Estados Unidos– ha resultado ineficaz para atacar un problema cuya incidencia permanece inalterable a escala global.

El director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, Rodrigo Uprimny, dice a Proceso que el narcotráfico y la violencia asociada a éste han tenido un papel central en el conflicto armado colombiano. Para construir una paz estable y duradera, afirma, es clave avanzar en el desarrollo de políticas alternativas para enfrentar ese problema.

En los diálogos de La Habana pueden encontrarse salidas dentro del marco prohi-bicionista imperante en el mundo, pero éstas deben ser críticas, plantea el abogado. "Los colombianos –añade– no debemos creernos el cuento de que estamos haciendo un gran sacrifico por la salud mundial porque eso no es cierto. Somos víctimas de una política equivocada, y si tenemos conciencia sobre ese punto podemos encontrar políticas más razonables".

El director de Dejusticia fue uno de los expertos convocados por la Universidad Nacional de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para participar en el Foro Nacional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, el cual congregó en Bogotá a más de mil líderes sociales, académicos y dirigentes políticos. Luego de tres días de trabajo –entre el 24 y el 26 de septiembre últimos– los participantes pidieron a los delegados del gobierno y de las FARC en La Habana reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas, y acordar un replanteamiento de la estrategia antinarcóticos impuesta por Estados Unidos desde hace 50 años.

Representantes de campesinos, indígenas y afrocolombianos –cuyas comunidades se localizan en el corazón del conflicto armado interno y son las que

pagan el más alto precio en la guerra contra las drogas– demandaron suspender las fumigaciones aéreas; se pronunciaron por la no erradicación manual de las plantaciones de hoja de coca y exigieron la implantación de una política de desarrollo agrario integral que brinde opciones a las miles de familias involucradas en los cultivos ilícitos, así como la despenalización de la pequeña producción cocalera.

"Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con el narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Esto sólo ha traído dolor a nuestras comunidades, al igual que la llamada 'guerra contra las drogas' que el Estado utiliza para arrasar las tierras de indígenas, campesinos y afrocolombianos, sin brindarnos ninguna alternativa", dice el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias.

Enfoque alterno

El historiador e integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la UN, Carlos Medina Gallego, sostiene que en los diálogos de La Habana prevalece una mirada integral del problema de las drogas y el debate de la despenalización está presente en la mesa de negociaciones.

"No se puede creer que los eventuales acuerdos logrados por ambas partes en La Habana resuelvan el tema, porque se trata de un problema global. Sin embargo, en lo concerniente a Colombia, cuyo problema central es el de los cultivos ilícitos, las FARC y el gobierno pueden llegar a un acuerdo y desarrollar una acción mancomunada que apunte a una reducción importante del área de cultivos", afirma el doctor en historia y experto en seguridad y defensa.

Y puntualiza: "Un acuerdo viable en La Habana es dejar de criminalizar a los eslabones más débiles de la cadena: los pequeños productores (de hoja de coca) y los consumidores de drogas. Sería un gran paso descriminalizar la producción, darles a los campesinos alternativas productivas, con mucha inversión del Estado, y ver a los consumidores como un problema de salud pública, es decir, tratarlos como enfermos, no como criminales. Si junto con esto se suspenden las fumigaciones de las aérea de cultivos, estaríamos frente a un cambio muy importante de la estrategia contra las drogas".

Las FARC niegan estar involucradas en el narcotráfico, aunque aceptan que el fenómeno de los cultivos ilícitos de hoja de coca se da en sus zonas de influencia y cobran un "impuesto" por producción. El Ministerio de Defensa de Colombia responsabiliza al grupo rebelde de la mayoría de hoja de coca producida en el país, y afirma que esa planta constituye su principal fuente de ingresos.

El presidente Juan Manuel Santos dijo el pasado 24 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU: "Si logramos que la guerrilla, una vez desmovilizada, cambie de lado y se convierta en aliada del Estado para poner un dique al narcotráfico y terminar los cultivos ilegales, imagínense lo que eso significaría. Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible que ahora podemos hacer posible, para bien de los colombianos y del mundo entero".

El comandante de las FARC, Pablo Catatumbo, uno de los negociadores en La

Habana, acogió el planteamiento de Santos y en una entrevista con el Canal Capital el martes 1 dijo: “También para nosotros sería una aspiración vivir en una Colombia sin coca. Es posible alcanzar ese objetivo si se cambian las políticas represivas por un programa social de gran calado que permita a los campesinos sustituir esos cultivos sin que ello signifique una condena a la miseria y al hambre”.
Para el historiador Medina Gallego, tanto las FARC como el gobierno están en condiciones de lograr un acuerdo en el punto sobre drogas ilícitas que permita formular políticas integrales contra el narcotráfico. Éstas deberán ir más allá de la guerra contra los estupefacientes y brindar una respuesta social a las comunidades forzadas a involucrarse en la economía ilegal debido al abandono por parte del Estado y a la falta de opciones productivas.
“Las poblaciones latinoamericanas –enfatiza– se están yendo a las economías ilegales por sus propias necesidades primarias insatisfechas. La estrategia antidrogas debe tomar en cuenta esa realidad y los gobiernos deben asumir que la represión y el prohibicionismo han fracasado.”

Estrategia fracasada

El coordinador del Programa de Políticas de Seguridad Regional de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica (WOLA,- por sus siglas en inglés), Adam Isacson, sostiene que la obsesión de Estados Unidos por atacar la producción de drogas sin hacer demasiado por abatir el consumo tiene en el programa de fumigaciones aéreas con glifosato aplicado en Colombia una de sus expresiones más agresivas.
Entre 1996 y 2012, como parte del Plan Colombia, se fumigaron 1.6 millones de hectáreas de plantaciones de hoja de coca en Colombia. Esta estrategia militar impulsada por Estados Unidos ha contado en los últimos 13 años con inversiones por 9 mil millones de dólares por parte de Washington.
“Tanta fumigación ha dañado la credibilidad del Estado colombiano en muchas zonas remotas donde los pobladores piensan que el gobierno no es capaz de hacer presencia para solucionar los problemas de pobreza, pero sí está dispuesto a hacer llover veneno sobre sus cabezas para destruir sus cultivos, dañar la salud y afectar los ecosistemas”, señala Isacson.
Por su parte, el general retirado Rafael Colón, quien dirigió los programas oficiales contra los cultivos ilícitos, sostiene que la aspersión de plantaciones con el herbicida llamado glifosato es un mecanismo muy agresivo para las comunidades, que resulta inútil sin una política social para sacar de la miseria a la población rural. “Aquí tenemos un problema rural de pobreza extrema y de marginación social que el Estado no ha enfrentado de manera integral”, sostiene.
Según estimaciones del gobierno estadunidense, los cultivos de hoja de coca en Colombia se redujeron de 170 mil hectáreas en 2001 a 79 mil en 2012; no obstante, el rendimiento por hectárea creció más del doble y gran parte de la producción migró a Perú y a Bolivia.
La producción de cocaína pura también cayó en forma drástica en Colombia durante la última década, al pasar de 700 toneladas en 2001 a 175 toneladas en

2012; sin embargo, la producción del alcaloide aumentó en Perú y en Bolivia, pues saltó de 355 a 455 toneladas en el mismo lapso.
“En vez de reducir la oferta de drogas, la actual estrategia ha trasladado la producción de unos países a otros”, indica Isacson, y afirma que las más de 600 toneladas de cocaína que demandan cada año los países consumidores –con Estados Unidos a la cabeza– son abastecidas por los países andinos a pesar del alto costo en vidas, violencia, violaciones a los derechos humanos y exclusión social que han pagado estas naciones por la guerra antidrogas, en especial Colombia. En este país la cocaína ha alimentado el conflicto armado desde los ochenta, cuando ingresaron al negocio los grupos paramilitares que combatieron a la guerrilla en colusión con sectores de la fuerza pública y algunas élites regionales y nacionales.
De acuerdo con Uprimny, la guerra contra las drogas ha terminado por hacer más rentable el negocio, pues al aumentar el riesgo se elevan el precio y la ganancia del producto, lo cual se convierte en un poderoso incentivo para las organizaciones criminales. “Mientras la demanda persista esto no va a variar. En eso consiste el fracaso estructural del prohibicionismo”, afirma el director de Dejusticia.

Cambio de paradigma

La estrategia antidrogas ha ocasionado una excesiva criminalización de los delitos relacionados con drogas que tiene saturadas las prisiones de Colombia, donde la sobrepoblación carcelaria rebasa el 40%. Esta tasa se reduciría en más de la mitad al excluirse los delitos contra la salud.
Un estudio de Dejusticia encontró que 98% de personas privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas no tuvieron una participación importante en las redes del narcotráfico. Sólo 2% de los convictos por esos ilícitos son capos del narcotráfico y el resto son los eslabones más débiles, como campesinos cocaleros en extrema pobreza.
Los delegados de las FARC en La Habana piden acabar con la criminalización de los cultivos de coca, mariguana y amapola en Colombia y reorientar la mayor parte de esas extensiones de tierra hacia la producción de alimentos, con apoyo estatal. También demandan suspender las aspersiones aéreas y la erradicación manual de cultivos, por sus efectos nocivos sobre los campesinos.
Santos, por su parte, es –junto con su colega guatemalteco Otto Pérez Molina– el mandatario latinoamericano que con mayor vigor ha impulsado el debate regional sobre políticas alternativas para enfrentar el narcotráfico e incluso se ha mostrado a favor de “despenalizar drogas (como la mariguana), si el mundo lo acepta”. No se trata, ha dicho, de no combatir el problema, sino de hacerlo con estrategias diferentes a las que han fracasado.
Las conclusiones del Foro Nacional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas serán presentadas a los negociadores del gobierno y de las FARC en La Habana en el transcurso del mes en curso. Éstas apuntan hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las drogas mantenida a sangre y fuego por este país.

En Colombia se abre paso el consenso para que los diálogos de paz conduzcan a descriminalizar a los dos extremos de la cadena del narcotráfico: el pequeño productor de coca y el consumidor. Asimismo, a centrar la lucha antidrogas en la prevención social y en las partes más rentables del negocio: el procesamiento, el tráfico y, sobre todo, el lavado de dinero. L

Cárteles mexicanos esperan su turno

Rafael Croda

BOGOTÁ.- El sociólogo Ricardo Vargas, experto colombiano en temas de cultivos ilícitos y conflicto armado, considera que la eventual salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del negocio de las drogas tendría un efecto limitado en el narcotráfico regional, pues los vacíos serían llenados por otros actores, como las bandas criminales (bacrim) y los cárteles mexicanos.

"Habrá una recomposición en las zonas productoras de coca y el temor es cómo va a ser ese cambio. Es difícil preverlo, pero puede haber descomposición de elementos de las FARC que opten por seguir en el negocio; puede haber estructuras de las bacrim que se reacomoden y asuman más protagonismo, y también los cárteles mexicanos pueden aprovechar esa situación", dice a Proceso el investigador del Transnational Institute (TNI).

"La clave es quién va a controlar a nivel local la regulación, el acopio de materia prima o de cocaína, y ahí los cárteles mexicanos pueden asumir mayor control a través de sus socios colombianos; es perfectamente posible ese escenario", considera.

Adam Isacson, especialista estadunidense en drogas y seguridad, sostiene que los cárteles mexicanos ocupan cada vez más espacios en Colombia por los golpes sufridos por las bacrim y "están buscando meterse más en la cadena de producción, lo que puede verse reforzado con un acuerdo de paz" en el cual las FARC abandonen el control de los cultivos de coca.

"Si mañana desaparecen la coca y la cocaína de Colombia, eso no quiere decir que la demanda mundial de droga va a desa-parecer. El incentivo económico para que otros grupos, como los cárteles mexicanos, se encarguen de mantener el negocio va a seguir existiendo", comenta este experto, maestro en relaciones internacionales por la Universidad de Yale e investigador de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica.

Según reportes de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, emisarios de los cárteles mexicanos están presentes en varias regiones del país debido a su interés de "acercarse a las fuentes primarias de producción y procesamiento" de la cocaína.

En febrero pasado el presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó a los organismos de seguridad investigar la presencia de cárteles mexicanos en el suroccidental departamento de Nariño, el mayor productor de hoja de coca en el país, sin que hasta el momento se hayan hecho públicos los resultados de esas pesquisas.

El profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Romero, señala que los cárteles mexicanos tienen una gran dependencia de las fuentes colombianas de abastecimiento de cocaína, por lo cual "es natural que se preocupen por un escenario de posconflicto en el cual sus fuentes de suministro de droga puedan verse alteradas".

En una hipotética desmovilización, las FARC, agrega, seguirían teniendo poder

político en sus tradicionales zonas de influencia. “Si ellos son la fuerza que eventualmente va a gobernar algunos territorios, seguramente mantendrán una política frente al tema, y se ha dicho que puede convertirse en policía rural; entonces no necesariamente va a haber un vacío de poder”, sostiene Romero.

En cambio Vargas considera poco probable que esa guerrilla al desmovilizarse pueda contener a las mafias; para ello el gobierno debería desarrollar un programa para atender la crisis agraria y la marginación rural, así como una estrategia para garantizar un ataque eficaz a las prácticas y los poderes mafiosos, los cuales en Colombia –como en gran parte de la región– han actuado en simbiosis con el poder político y los organismos de seguridad del Estado.

De acuerdo con el sociólogo e investigador del TNI, incluso aunque una acción concertada entre el gobierno y las FARC termine con los cultivos ilícitos en Colombia, la pasta básica de cocaína podría llegar de Perú y Bolivia para ser procesada en territorio colombiano y enviada desde aquí a los centros de consumo, como ocurrió durante los ochenta y principios de los noventa.

Vargas puntualiza que los diálogos de paz en La Habana podrían tener un efecto limitado en el narcotráfico, aunque sí resolverían “el problema del involucramiento de las FARC en la producción y comercialización de narcóticos”.

Iván Márquez, comandante de las FARC, dijo el martes 1 al Canal Capital de la televisión colombiana que esa guerrilla está dispuesta “a cooperar para resolver definitivamente el problema del narcotráfico” en el país, pero advirtió que ese fenómeno es una industria criminal de alcance global cuyo combate requiere una acción multinacional concertada. L

La campaña que derrotó a Pinochet

Francisco Marín

Hace 25 años Pinochet fue vencido en las urnas. Un plebiscito para decidir si el dictador permanecía o no en el poder le fue adverso, pese a la maquinaria de terror que el militar encabezaba. El "no" de los chilenos enterró al general. Y ahora, prensa y analistas políticos le dan crédito al factor fundamental del repudio al general: la Franja del No, un programa de televisión que se mantuvo al aire un cuarto de hora diario durante un mes. Las dos figuras principales de ese segmento televisado –y quienes tuvieron destinos diametralmente opuestos en los gobiernos democráticos– hablan con Proceso.

VALPARAÍSO, CHILE.- Cuando aún resuena el recuerdo de los 40 años del golpe militar contra Salvador Allende, otro aniversario agita la memoria colectiva. Este sábado 5 se cumplieron 25 años del plebiscito de 1988, cuando las fuerzas democráticas aglutinadas en la Concertación de Partidos por el No derrotaron a la dictadura de Augusto Pinochet. De esa forma se impidió que el militar siguiera al mando ocho años más, como establecía la Constitución de 1980 aprobada en una fraudulenta consulta popular.

El recuerdo de ese 5 de octubre es utilizado en favor de sus propias agendas por el presidente Sebastián Piñera y por la expresidenta Michelle Bachelet, quien aspira a un nuevo mandato con el respaldo de la Concertación por la Democracia, hoy llamada Nueva Mayoría.

Piñera, sabedor del enorme desprestigio de Pinochet, en las semanas recientes ha intentado desmarcarse por completo del dictador y sus crímenes.

Y lo hace pese a que entre quienes lo llevaron al poder figura el filopinochetista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y a sabiendas de que muchos de los altos funcionarios de su gobierno lo fueron también de la dictadura, como su ministro del Interior, Andrés Chadwick, militante de ese partido.

El principal argumento de Piñera para distanciarse de la dictadura es haber votado por el no en el plebiscito de 1988. El pasado 18 de septiembre, en entrevista con CNN Chile, dijo: "Nunca me equivoqué en saber que bajo ninguna circunstancia se justifican los atropellos a los derechos humanos, y Chile debía recuperar la democracia lo antes posible", e incluso disparó "fuego amigo" contra la candidata de la UDI, Evelyn Matthei: "Ella votó 'sí' en el plebiscito y eso fue un error".

La derrota plebiscitaria de Pinochet –lo cual para muchos es una gesta histórica– también es aprovechada por Bachelet y su sector político: ella fue oradora única en el acto de conmemoración este sábado 5 en el estadio Lo Blanco, de la capital chilena.

Bachelet, con cerca de 35% de respaldo, es favorita de cara a las elecciones del próximo 17 de noviembre. Matthei, con 20% de apoyo, corre el riesgo de ser superada por otros tres candidatos: Marcel Claude (izquierda extraparlamentaria), Marco Enríquez Ominami (Partido Progresista, de centroizquierda) y el independiente Franco Parisi.

Aunque muchos aspectos influyeron en la derrota de Pinochet –como la protesta social, la desigualdad y el rechazo a las violaciones a los derechos humanos–, la prensa y la opinión pública han concentrado sus miradas en la Franja del No, espacio de propaganda en televisión el cual fue determinante en el plebiscito de 1988.

La Franja del No adquirió dimensión global gracias a la película No (2012), protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por el chileno Pablo Larraín. La cinta convierte en héroes a los creativos, publicistas y sociólogos de esa campaña, muestra cómo el equipo pudo imponer sus consideraciones publicitarias a las orientaciones políticas de los jefes de los partidos y señala que esa fue la clave del éxito.

Dos de los pilares de ese equipo fueron el conductor de televisión Patricio Bañados y el director de contenidos de la campaña, Eugenio Tironi, sociólogo de la Universidad Católica de Chile.

La suerte de ambos fue muy distinta después de la dictadura: mientras Bañados quedó marginado de todo protagonismo, Tironi se transformó en la estrella del nuevo gobierno. Fue director de comunicaciones del gobierno de Patricio Aylwin y se convirtió en el ideólogo de la agenda modernizadora impulsada por la Concertación en alianza con el empresariado. Ahora es un acaudalado consultor que asesora consorcios en materia de comunicación estratégica.

El consecuente

Bañados es uno de los pioneros de la televisión chilena. Fue el primero en transmitir –en 1962– la cuenta anual que cada 21 de mayo hacen los presidentes en el Congreso. Condujo los primeros noticiarios de la televisión chilena: Primer Plano (1961) y Chile TV (1962), ambos en el Canal de la Universidad de Chile. Tras el Mundial de Futbol realizado en este país en 1962 –y en el cual fue cronista–, trabajó en la BBC de Londres, la Agencia Informativa de Estados Unidos y en Radio Suiza Internacional.

Al volver al país en 1975 se reintegró al Canal de la Universidad de Chile, intervenido por la Junta Militar. En este y otros medios hizo gala de su independencia, por lo cual pagó un alto costo en términos profesionales.

En entrevista con Proceso, Bañados cuenta que fue invitado a participar en la Franja como conductor, en agosto de 1988, cuando quedaba menos de un mes para que ésta se grabara.

Entonces “llevaba cinco años cesante porque fui la única persona de la televisión chilena que se atrevió a enfrentar a la dictadura y me negué a leer noticias falsas y ofensivas para la oposición”, señala.

Quien lo contactó fue Genaro Arriagada, uno de los dirigentes de la Democracia Cristiana y coordinador del Comando del No, quien le explicó que se acercaron a él porque, según un estudio de opinión pública, era la persona con más credibilidad de la televisión chilena.

Bañados reflexiona: “Naturalmente, era un harakiri, porque aunque ganara el ‘no’ (la Constitución establecía que) el dictador seguía un año y medio en el poder. Y si

perdía, el poder económico, los propietarios de los canales de televisión y las radios, así como de las empresas auspiciadoras, continuaría en manos de gente que era partidaria del dictador.

“Es decir, en cualquier escenario yo iba a enfrentar una cosa muy dura. Y se lo dije a Arriagada. Y él me dijo que no iba a ser así... en fin... Lo pensé mucho. Pero la tentación de derrotar a un dictador sangriento a través de la televisión, para mí –hombre de televisión, fundador de la televisión– fue muy grande. Sería mi mayor desafío, así que acepté.

“Puse como condición ser dueño de mis palabras, que nadie me impusiera qué decir. Yo improvisaba en cámara sobre la base de las conversaciones previas con Ignacio Agüero (cineasta) y Eduardo Tironi (especialista en televisión, hermano de Eugenio), quienes estaban en el estudio y eran los directores. Con ellos conversábamos los aspectos generales: ‘Ahora viene un segmento sobre tal tema y tú podrías presentarlo de tal forma’. Y yo le decía: ‘Me quedaría mejor de esta otra manera’... y así íbamos construyendo.”

Consultado respecto a la importancia que le asigna a la Franja del No en el triunfo de esa opción, responde con una analogía:

“Es lo mismo que un equipo de futbol, digamos el Barcelona, ahora tan de moda. (...) Quien mete el gol es Messi. Pero eso no significa negar al equipo que viene detrás. Entonces es indudable que la Franja del No fue el golpe decisivo que permitió derrotar al dictador, pero eso no niega en absoluto la lucha de las organizaciones sociales, la tarea de años, el sacrificio que fue la resistencia para muchos (...) la Franja del No remeció al país, lo estremeció y le demostró que era posible oponerse y vencer al dictador.”

Al realizarse el plebiscito, dice, la gente estaba muy atemorizada. La represión de la dictadura había sido brutal y vencer el miedo era el principal desafío: “La gente no se atrevía a ir a votar porque creía que la iban a meter presa. Pensaban que iban a averiguar por quién habían votado y las iban a echar del trabajo, lo cual –por lo demás– sucedía. No era un miedo infundado”.

En ese contexto lo que la Franja del No se propuso fue dar confianza. A él le tocó la gran responsabilidad de transmitir esa confianza.

A pesar de la alegría que le provoca haber protagonizado aquella Franja y haberse representado a sí mismo en la película No, Bañados está muy decepcionado con la Concertación pues, según su parecer, la coalición de centroizquierda le entregó el país a los grandes grupos económicos.

“¿Qué cambió con la Concertación?”, se pregunta. Y se responde como en una ráfaga: “¡Pero si siguió el mismo modelo neoliberal, ultraliberal, impuesto por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, donde el mercado es Dios y Milton Friedman su profeta!”.

El periodista aclara que sus posiciones son moderadas y obedecen al sentido común: “No creo que el modelo haya que cambiarlo de raíz, pero sí creo necesario corregir aquellas distorsiones, aquellas exageraciones que permiten que en el país haya en realidad un traspaso de riquezas desde los pobres hacia los ricos”.

“Comunicación estratégica”

Eugenio Tironi fue otro de los protagonistas de esta historia. En entrevista con este semanario, el sociólogo cuenta cuáles fueron las claves de la Franja del No: “Con nuestro grupo de cientistas sociales, un poquito más de dos años y medio antes del plebiscito, veníamos realizando estudios para recopilar información que nos permitiera diseñar una estrategia viable a fin de ganar con el ‘no’, derrotar a Pinochet”.

Este experto en comunicación estratégica afirma que en el proceso “fuimos descubriendo que nuestro adversario real no era Pinochet, sino el sentimiento de impotencia de los chilenos, el sentimiento de castración que tenía como causa Pinochet y también el haber fracasado en la Unidad Popular”.

Refiriéndose a la propuesta de franja que hizo su equipo, dirigido entonces por el publicista José Manuel Salcedo, señala:

“Lo que planteábamos estaba en la antípoda de lo que conocíamos como propaganda política, la cual suponía un discurso más racional, normalmente destinado a contradecir al adversario, a denunciarlo. Los críticos nos decían: ‘Lo que ustedes están planteando parece publicidad de la Coca-Cola. Además tiene un tono demasiado católico, un poco gandhiano. Y aquí lo que necesitamos es aprovechar este espacio en televisión para denunciar a la dictadura, la violación a los derechos humanos, y hacer conciencia en la población, educarla, mostrar lo que nunca se ha podido ver’.”

Tironi señala que él y su equipo se opusieron a esa visión. “Les dijimos (a los dirigentes políticos): ‘Si hacemos eso lo que vamos a provocar es reavivar el miedo, y si hacemos eso lo que vamos a conseguir es que la población no participe en el plebiscito; y si no participa vamos a perder’.

“Finalmente –continúa–, los dirigentes hicieron confianza en nosotros, gente que veníamos de las ciencias sociales, de la publicidad y la televisión, y aceptaron esta propuesta.”

Agrega que la Franja no fue hecha en forma racional: “Buscaba combatir el sentimiento de castración, no con un contenido racional o programático, sino con el peso emocional”.

El sociólogo reconoce que la Franja “no se pronunciaba mayormente respecto a los proyectos, a los programas, a las políticas públicas del futuro. La promesa era: ‘Miren, si ustedes votan por el no, tengan la certeza de que se van a producir elecciones libres’”.

Tironi señala que el Comando del No carecía de medios “para dar a conocer su mensaje (...) porque no existían recursos para hacer publicidad”. En ese contexto, afirma, “la bala de plata que tenía el ‘no’ (...) era esta franja en televisión, este espacio de 15 minutos los 30 días previos al plebiscito”.

Respecto a las críticas a la Concertación, Tironi dice: “Quienes se hicieron la expectativa de que asumiendo un gobierno democrático íbamos a desmantelar la institucionalidad de la dictadura, íbamos a desmantelar el modelo económico o íbamos a encarar el tema de los derechos humanos en forma tal que fuera imposible cualquier reconciliación o cualquier entendimiento pacífico, se hicieron

expectativas equivocadas. Eso no fue lo que prometió la Franja del No, eso no fue lo que convocó a la población a votar por esta opción". L

Constitución espuria

Francisco Marín

VALPARAÍSO, CHILE.- El 11 de septiembre de 1980 la Junta Militar realizó un plebiscito mucho menos conocido que el de 1988 pero no menos importante: se definió allí la institucionalidad, la cual aún está vigente.
En aquella fecha se convocó a la población a manifestarse respecto a una Constitución propuesta por la Junta Militar y también se definiría la permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet ocho años más, así como un itinerario de transición a la nueva institucionalidad –durante el cual no regiría la nueva ley– también de ocho años. Estos tres asuntos deberían ser respondidos con un "sí" o un "no" en un solo sufragio.
La reciente publicación del libro El fraude, del doctor en ciencias políticas Claudio Fuentes, reavivó el recuerdo de este episodio.

La maquinación

La convocatoria al plebiscito la hizo Pinochet un mes antes en cadena nacional de radio y televisión: "Ha llegado el instante de decidir nuestro futuro, encontrándonos ante dos alternativas: volver paulatina pero inexorablemente a la noche de los mil días negros de Chile (alude al gobierno de la Unidad Popular 1970-73) o tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando".
Según el dictador, la Constitución se proponía proteger a los chilenos contra el terrorismo, defender la propiedad privada y el modelo de libre mercado, promover más autonomía de las fuerzas armadas y establecer el sufragio universal como mecanismo principal, aunque no exclusivo, para elegir autoridades.
Pinochet remató su discurso señalando que "si el 11 de septiembre de 1973 triunfó la heroica movilización del pueblo chileno para defender su libertad, este 11 de septiembre de 1980 será el día en que ese mismo pueblo afianzará su victoria, aprobando la Constitución de la libertad".
La convocatoria al plebiscito fue hecha mediante el decreto 3.465, dictado el 8 de agosto de aquel año. Según se reseña en el libro de Fuentes, ese documento establecía que "la participación en este acto sería obligatoria y la no concurrencia a votar sería castigada con pena de prisión en sus grados medio a máximo".
Como los registros electorales habían sido eliminados por la dictadura, la participación en el plebiscito podría hacerse en cualquier mesa del país con la sola presentación de la cédula de identidad. El decreto establecía que la organización de la consulta en las comunas era responsabilidad de cada alcalde (cuando todos ellos eran nombrados por la Junta Militar).
De acuerdo con el libro La historia oculta del régimen militar (1997, del periodista Manuel Salazar y otros), tras la convocatoria al plebiscito el entonces subsecretario general de Gobierno, Jovino Novoa (actual senador de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente), emitió la circular confidencial 112/6 en la cual instruía a los funcionarios públicos a "colaborar con los alcaldes

proporcionando listas de personas confiables para que sean designadas presidentes de mesa y promover la inscripción de personas de sectores favorables al gobierno para que participen en el sorteo de vocales".

La respuesta opositora

El anuncio de Pinochet encontró a una oposición diezmada por la brutal represión. La Democracia Cristiana (DC) era el único partido del arco opositor que podía moverse con algún grado de libertad.

El 27 de agosto de 1980 se realizó en el teatro Caupolicán, de Santiago, el único acto en el cual la oposición pudo manifestarse respecto de la consulta. El orador central fue el líder de la DC y expresidente de Chile Eduardo Frei Montalva.

Pese a la vigilancia policial, el Caupolicán se llenó con unas 10 mil personas e incluso mucha gente se quedó afuera. Allí Frei llamó a votar "no", a pesar de que en su propio partido y en los otros de la oposición muchos preferían la abstención. No querían legitimar el fraude: "El pueblo ya decidió votar no, aunque sabe que no tendrá medios de control verdadero sobre los escrutinios. Por eso nadie se hace ilusiones sobre el resultado".-

El "sí" se impuso con 67.04% contra 30.19% del "no". Hubo 2.77% de votos nulos. Los blancos se sumaron al "sí".

En su informe Sobre el plebiscito y el fraude (1980), el politólogo Genaro Arriagada subrayó algunas de las irregularidades de ese proceso. Lo que más le llamó la atención fue "el increíble aumento del cuerpo electoral". El total de electores inscritos en 1973 llegaba a 4 millones y medio; para la consulta aparecieron escrutados 6 millones 300 mil votos, lo cual suponía un aumento del padrón electoral cercano a 37% en sólo siete años, cuando cientos de miles de chilenos se habían exiliado en los años previos.

En muchas comunas hubo más votantes que electores. Por ejemplo en Renca, donde hubo 71 mil votantes cuando el padrón registraba 48 mil electores.

La explicación puede buscarse en el libro La danza de los cuervos (2012) del periodista Javier Rebolledo. Allí se narra la participación que tuvo en el fraude la Central Nacional de Informaciones (CNI, el organismo de espionaje y represión de Pinochet):

Los agentes de la CNI "desde muy temprano debían acudir a las comunas de Santiago y votar por el 'sí'. En seis autos recorrieron las calles de la ciudad en grupos de a cinco, en caravana. (...) Al llegar al primer lugar de votación ingresaron inmediatamente, nadie les pidió que se pusieran en la fila, nada. Los vocales de mesa debían haber estado al tanto porque nadie, pero nadie, se les interpuso en ese momento. Todos votaron y volvieron a partir".

El nivel de irregularidades detectadas hizo que un grupo de 46 políticos y catedráticos del derecho realizaran, el 4 de octubre de 1980, una presentación ante el Colegio Escrutador Nacional (CEN).

Según se expresa en dicho escrito, en el momento de la consulta "el país se hallaba en estado de emergencia, el que no fue suspendido en la etapa previa al plebiscito; el gobierno podía detener discrecionalmente a cualquier persona hasta

20 días, relegarla a cualquier punto del país hasta tres meses y expulsarla indefinidamente del territorio nacional; los partidos políticos estaban disueltos, y su actividad, terminantemente prohibida; en el llamado a plebiscito se sometió a consulta popular un proyecto sin alternativa, limitándose a decir que su rechazo significaría el caos".

Ante las irregularidades constatadas, los firmantes de dicho documento declaraban que el plebiscito carecía "de toda validez jurídica y credibilidad moral". Once días después el CEN respondía señalando "que carecía de atribuciones para emitir pronunciamientos sobre reclamaciones de tipo político-electoral".

Fuentes, exdirector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala a modo de conclusión de su investigación que a partir de 1984 las cúpulas opositoras fueron optando por una salida a la dictadura pactada con las autoridades militares. "La solución política fue olvidar el episodio (del plebiscito) y bloquear la cuestión de la legitimidad (...) Luego, el realismo y la medición de fuerzas hicieron que se produjera el acomodo". L

Lección de Chile para Egipto

Ariel Dorfman

Contemplo desde lejos la tragedia de Egipto y, en forma inevitable, pienso en Chile y su golpe militar. Pienso en Chile y en Egipto y me duelen los muertos y me duele la historia, esa historia que parece repetirse ina-gotablemente. De nuevo las masacres y las ejecuciones y los soldados en las calles y las prisiones desbordando con cuerpos torturados, de nuevo los exilios y la censura y la brutalidad, de nuevo un general con gafas oscuras justificando la violencia en nombre de la seguridad y la salvación de la patria, una vez más –¡hasta cuándo!– un general acusando de terrorismo a quienes se oponen a su reinado.

Al examinar, sin embargo, la reciente historia de Chile con menos desazón, me atrevo a predecir, aunque de un modo vacilante y tentativo, una salida posible para el dilema de Egipto.

Después de todo, tras casi 15 años de aquel golpe del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende, el pueblo chileno derrotó al general Augusto Pinochet en un histórico plebiscito, un proceso de recuperación de la libertad que se filmó con gran emoción en la película No. Llegar a ese día triunfal, el 5 de octubre de 1988, solamente fue posible porque habíamos creado trabajosamente la Concertación. Esta alianza vasta y variada de partidos y ciudadanos, que se unieron a pesar de discrepancias políticas mayores, impuso una transición a la democracia tan exitosa que este noviembre venidero Chile va a celebrar su sexta elección presidencial en 23 años. Mi país le ofrece a los egipcios, por lo tanto, una estrategia mediante la cual una población atemorizada y dividida puede derrotar a un régimen opresivo.

¿Es capaz Egipto de reproducir este modelo?

Le espera un camino empinado. Chile, a diferencia de Egipto, tiene una larga historia de institucionalidad democrática. Fue precisamente esa tradición la que permitió a Allende iniciar una revolución a través de medios pacíficos, el primer intento de construir el socialismo usando la vía electoral. Tampoco Allende persiguió y encarceló a sus detractores, como lo hizo Morsi, ni trató de adueñarse del poder absoluto. Y por cierto que Egipto, a diferencia de Chile, está carcomido por la discordia religiosa. Cuando un grupo cree que sus adherentes actúan bajo el mandato fundamentalista de Dios, es difícil llegar a un acuerdo con “infieles”, “apóstatas” y “heréticos”.

A pesar de estos contrastes, el desafío que enfrenta Egipto hoy es penosamente semejante al que los chilenos tuvimos que vencer en 1973, cuando empezaron a caer las bombas y los estadios se llenaron de disidentes. La asonada contra Allende fue posible debido a que las fuerzas a favor de la democracia y del cambio estuvieron profundamente divididas: Los democratacristianos, que debieron haber sido los aliados naturales y progresistas de la Unidad Popular, la coalición que encabezó Allende, terminaron (con algunas honorables excepciones) fomentando el golpe y celebrándolo, bajo la ilusión de que los militares pronto retornarían el país a un régimen constitucional. Este egoísmo y esta ceguera fueron nutridos y

cultivados activamente por la CIA, que deseaba destruir el experimento de justicia social de Allende que, de haber triunfado, hubiese afectado en forma significativa los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus multinacionales. Pero el antagonismo de los cristiano-demócratas también fue facilitado por el sectarismo y la arrogancia de demasiados militantes revolucionarios, entre los que me incluyo. Tampoco ayudó el hecho de que facciones de la ultraizquierda fuera y dentro de la Unidad Popular atemorizaran innecesariamente a buena parte de la clase media, alimentando el temor de patriotas intachables de que Allende –quien creyó toda su vida en el pluralismo– estaba, sin quererlo, abriendo el camino a una "segunda Cuba" en el hemisferio.

Podría adentrarme fatigosamente en este conflicto señalando (ya que fui y sigo siendo un entusiasta de Allende y su programa) que los democratacristianos tienen más culpa en este desastre que los de nuestro lado, puesto que rechazaron esfuerzos de última hora de nuestro presidente por hallar una salida constitucional para la crisis, obstruyendo la búsqueda de compromisos y reconciliación que auspiciaba el cardenal Raúl Silva Henríquez. Ellos responderían que nosotros fuimos insuficientemente democráticos y sordos ante las advertencias de nuestros adversarios. Pero tal arreglo de cuentas, imprescindible finalmente para esclarecer el pasado, no era lo que urgía hacer después del golpe. Lo crucial era encontrar un acuerdo entre los demócratas que se habían opuesto a Allende y aquellos que lo apoyábamos, es decir, la mayoría del país (entre la Unidad Popular y los democratacristianos alcanzamos casi 65% del voto en las elecciones de 1970). Esto significaba forjar un consenso acerca del tipo de país que soñábamos, el futuro compartido que era posible vislumbrar.

Tal evolución no fue fácil. Cuando una catástrofe aflige a una nación, no puede emerger a la luz sin que sus ciudadanos pasen por una noche oscura del alma, un alma que es tanto política como espiritual. No puede uno renacer sin preguntarse por la propia responsabilidad, lo que pudimos haber hecho para impedir tanto sufrimiento individual y colectivo, tanto dolor. Las tensiones desgarradoras que acompañan este renacer se ven multiplicadas por la tentación de excederse en autoflagelaciones y acomodos a los nuevos aliados, y por la tentación aún más grave de posponer los principios morales y aspiraciones de liberación que alimentaron originalmente nuestros sueños de justicia.

Esos años de dictadura fueron, entonces, años de oscuridad y desesperanza, de malentendidos y traiciones. Pero también estuvieron colmados de iluminaciones y autoescrutinio, una redención del pasado para que sus errores no se replicaran incesantemente. De parte de la izquierda, tuvimos que aprender que nunca debemos dar por descontada la democracia, nunca olvidar que podemos tener disconformidades con nuestros adversarios sin odiarlos. Aprender que siempre hay que denunciar aquellas violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran en el mundo, incluso (y especialmente) cuando vienen de gobiernos que, atacando injusticias milenarias, proclaman la revolución. Y en cuanto a los cristianodemócratas, se trataba de criticar su oportunismo, su indiferencia al dolor ajeno, su jactancia democrática, su cercanía con los poderosos en Chile y en el extranjero. Y ambos lados tuvieron que hacer este aprendizaje en la lucha

cotidiana, forjar la tolerancia día a día, purgar la rabia mutua en la medida en que se enfrentaba a la dictadura. Nos fuimos dando cuenta de que Pinochet no iba a caer hasta que llegáramos a crear un territorio común de lealtad, hasta que tuviéramos una visión de lo que podría reemplazar su dominio, poniendo énfasis en lo que nos unía y dejando cualquier desavenencia ulterior para las remotas mañanas del futuro.

Esta es la lección ardua y elemental de Chile para Egipto.

La Hermandad Musulmana debe entender cómo su estrechez y fanatismo corroyeron la democracia, excluyendo a los mismos actores que ahora son necesarios para restaurar ese partido a la legalidad y facilitar algún día, tal vez, una nueva participación en la esfera del poder político. Y la Hermandad Musulmana debe también evitar los cantos de sirena que insisten en una respuesta violenta (tal como la mayoría de la izquierda, aunque no toda, esquivó tal estrategia armada en Chile). Los egipcios liberales y seculares que ensalzaron el pronunciamiento militar deberían condenar severamente su propia conducta antidemocrática, su desatinada confianza en el ejército como salvador de la patria. Y no esconderse tras la justificación de que aceptar el golpe era algo que la historia los forzó a hacer (tal como, con el tiempo, la mayoría de los democratacristianos, aunque no todos, se arrepintieron de haber alentado a las fuerzas armadas en el derrocamiento de Allende). Tanto la Hermandad Musulmana como sus rivales democráticos tienen, indudablemente, razones para vapulearse, pero sería bueno que recordaran que quien está aplicando cotidianamente verdaderas golpizas es el general Abdel Fattah al-Sisi, el nuevo heredero de Augusto Pinochet.

Este proceso egipcio de exploración recíproca de errores y vicios pretéritos va a tardar un largo tiempo. Desafortunadamente, no hay garantías de que los dos campos hostiles lograrán superar su discordia y crear su propia Concertación, de que llegará el día en que de nuevo se encuentren lado a lado en la plaza Tahir confrontando un régimen despótico. Los esperan más obstáculos y suspicacias que los que dividieron a los chilenos, desconfianza y recriminaciones que tienen más hondas raíces en la historia y en la religión. Y teníamos nosotros la ventaja de ser parte de un movimiento irreprimible a favor de la justicia social en América Latina, además de encontrar un eco, en esos años, en otras transiciones a la democracia mundiales, como lo pueden atestiguar Corea y Sudáfrica y las naciones del Este de Europa. La Primavera Árabe no muestra un similar avance hacia la paz y la prosperidad, con Siria como el último horrible ejemplo de una falta, precisamente, de consenso entre aquellos que supuestamente están tratando de forjar un porvenir emancipado.

La turbulencia que se avecina parece enorme.

Si las fuerzas en Egipto que quieren crear una democracia soberana y popular no llegan a un entendimiento, van a vivir eternamente atrapadas por el pasado, permanentemente acorraladas por las pesadillas de ayer y los errores recurrentes de mañana.

Un consejo final, entonces. De hecho, una palabra: Paciencia.

Una palabra santa en el Islam, el atributo más sagrado de Dios, la exigencia más

difícil que Alá hace a hombres y mujeres, el mayor desafío para cualquier ser humano.
De todos los nombres de Dios, el número 99, As-Sabur, Dios como Paciencia, Dios más allá del Tiempo.
Y para los no creyentes, Shakespeare: “¡Cuán pobres son aquellos que no tienen paciencia! ¿Acaso las heridas no sanan siempre de a poco?”.
Y para ambos, para aquellos que rezan a un Dios y para aquellos que únicamente rezan a su propia humanidad, Jean Jacques Rousseau: “La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce.”
Paciencia con uno mismo, paciencia con el otro, paciencia para esperar el momento necesario para decir la verdad, paciencia para esperar a que los rivales escuchen nuestras palabras, paciencia para ver que la oscuridad no es, no puede ser, eterna.
Paciencia, porque el pueblo de Egipto, como el de Chile, no va a desaparecer en la noche y niebla del olvido y la opresión y la pobreza.
Aguardan algo mejor, merecen algo mejor.
Algún día, en un futuro no tan lejano, otro país desdichado encontrará que su democracia ha sido secuestrada por otro grupo de soldados a los que nadie eligió como gobernantes.
Ese día, espero que algún habitante de Egipto pueda escribir las siguientes palabras a los ciudadanos de aquella nación asolada: “Existe una salida. Se trata de aprender –dirá él, dirá ella– de las lecciones de Egipto. Conduélanse conmigo por la repetición de la historia y compartan también conmigo la certeza de que no tiene por qué ser así. Por favor, créanme –dirá esa mujer, ese hombre egipcio–, espero que sean capaces de murmurar y jurar que la paciencia es amarga pero que su fruto es infinitamente dulce”.

Ariel Dorfman es escritor chileno. Su último libro es Entre sueños y traidores: un strip-tease del exilio.

La reforma energética, vista por Krauze y Ackerman

John M. Ackerman

El presente ejercicio de debate crítico, facilitado por Proceso a instancias de ambos analistas, se da por concluido con estas últimas entregas.

Históricamente uno de los obstáculos más importantes para la materialización de los avanzados principios y compromisos enarbolados durante la Revolución Mexicana y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han sido los falsos discursos "liberales" que fingen apoyar las conquistas sociales pero que en realidad defienden los privilegios de la oligarquía. Los planteamientos de Enrique Krauze sobre la reforma energética dan continuidad a este liberalismo autoritario, hoy ya transmutado en un neoliberalismo trasnochado, que nada bueno ha dejado a la nación.

El 21 de mayo de 1911, en la firma de los acuerdos de Ciudad Juárez con el gobierno de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero traicionó el ala campesina de la Revolución y abandonó su compromiso con el reparto agrario originalmente incluido en el artículo tercero de su Plan de San Luis (véase: http://ow.ly/pqGAB). Más adelante, ante la huelga general estallada el 31 de julio de 1916, el entonces presidente Venustiano Carranza se olvidó de sus compromisos "Constitucionalistas", impuso la Ley Marcial e incluso se atrevió a establecer la pena de muerte para todos los "trastornadores del orden público".

En su discurso inaugural al Congreso Constituyente de 1916-1917 Carranza expuso las coordenadas básicas del liberalismo autoritario de donde hasta la fecha abreva el régimen político mexicano. El "Primer Jefe" dejó claro que la función más importante del gobierno "revolucionario" no sería propiciar la justicia social o garantizar los derechos colectivos, sino únicamente defender la "libertad humana" y la "libertad individual". No fue gratuito, por ello, que su propuesta para el nuevo artículo 27 constitucional fuera tan conservadora y que en relación con el artículo 123 el presidente no enviara propuesta alguna. Al parecer, la única "libertad" que le interesaba a don Venustiano Carranza era la que necesitarían los nuevos oligarcas para explotar sin obstáculos a los campesinos y al pueblo trabajador.

Carranza también demostró un profundo desprecio por el pueblo mexicano y una idealización de los sistemas políticos extranjeros. Se refiere a Inglaterra y a Estados Unidos como "los pueblos más grandes y más poderosos de la Tierra" y señala con entusiasmo la "grandiosidad de la Revolución Francesa". En contraste, tacha de "ignorantes" a quienes hicieron la Revolución Mexicana y establece que el pueblo necesita "gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más fútil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes". Carranza incluso recurre a los textos de Alexis de Toqueville para criticar la falta de la necesaria "cultura elevada" en México. De forma similar, Krauze hoy utiliza a George Orwell para descalificar los supuestos "dogmas" y "traumas" de la izquierda mexicana actual.

Madero y Carranza desde luego fueron grandes “patriotas” que amaban profundamente a México. También fueron “nacionalistas” que promovieron de manera firme, aunque con algunas inconsistencias importantes, los intereses nacionales sobre los extranjeros. Sin embargo, su limitada visión de la función social del Estado y su absoluto elitismo y clasismo dejaron sembrada la semilla para la eventual traición histórica de los principios revolucionarios y constitucionales.

Esta traición primero se materializa con los gobiernos de los líderes “sonorenses” Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Posteriormente, después de la bocanada de aire fresco del sexenio de Lázaro Cárdenas, la ideología del liberalismo autoritario se consolida durante el gobierno corrupto y oligárquico de Miguel Alemán y continúa sin descanso con los presidentes subsecuentes, incluyendo desde luego a Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo.

El neoliberalismo iniciado en 1982 con Miguel de la Madrid no implica entonces una ruptura con el proyecto original de Carranza, Calles y Alemán, sino su culminación y máxima expresión. La utilización del aparato estatal para empoderar a una pequeña élite así como para excluir y reprimir al pueblo ha sido la norma en México desde hace más de un siglo. Y hoy Enrique Peña Nieto busca que esa ideología finalmente rinda su fruto más venenoso: la devolución del petróleo mexicano a los intereses extranjeros.

No seríamos entonces quienes aspiramos a fortalecer y a limpiar Pemex los que seguiríamos el ejemplo soberbio e irresponsable de López Portillo, como señala Krauze. Al contrario, quien de verdad emula a este expresidente, uno de los más corruptos de la historia reciente, sería el mandatario actual, quien no ceja en su desesperado empeño por abrir nuevas oportunidades de jugosos negocios para sus socios y aliados.

No es pragmatismo sino mera ideología la base de la iniciativa de reforma energética de Peña Nieto (mi análisis: http://ow.ly/pqP7Q). Tanto la experiencia práctica con las privatizaciones de las últimas dos décadas como la corrupción de los contratos privados que ya inundan Pemex han demostrado sin lugar a dudas que el sector privado no es más eficiente u honesto que el sector público. Asimismo, el comportamiento de las empresas petroleras trasnacionales, ayer y hoy, deja muchas dudas respecto a su compromiso con el estado de derecho y el bienestar del pueblo mexicano (mi análisis: http://ow.ly/pqPU0). Resulta evidente que el primer paso para fortalecer la industria petrolera nacional debería ser aumentar la inversión pública y combatir la corrupción en Pemex en lugar de hacer la paraestatal a un lado y entregar sus responsabilidades a empresas extranjeras.

Carlos Salinas de Gortari utilizó engañosamente la figura de Emiliano Zapata para vender y envolver su reforma privatizadora al artículo 27 en 1992. Pero cuatro años después, la fiesta de su “zapatismo modernizado” fue arruinada por la reencarnación de los verdaderos ideales de Zapata en la figura del Subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy, Peña Nieto pretende burlarse de la inteligencia del pueblo mexicano al utilizar el legado del general Lázaro Cárdenas para justificar la privatización petrolera (mi análisis: http://ow.ly/pqQBa). Si sigue los pasos de su mentor político e insiste tercamente

en imponer sus reformas neoliberales, tarde o temprano Peña Nieto también tendrá que enfrentar la bravura del digno pueblo mexicano que sabe muy bien cómo revivir a sus héroes patrios para salvar a la nación. I

---

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

Fundamentalismo priista

Enrique Krauze

Agradezco al profesor John M. Ackerman la relativa civilidad de su respuesta. Lo que no le agradezco tanto es su lección de historia. Y es que (sin el solemne tono oficial que utiliza) casi todo lo que dice sobre Morelos, Zapata, el sentido social de los artículos 27º y 123º de la Constitución, está tratado en Siglo de Caudillos y Biografía del Poder, donde además me refiero a la Expropiación Petrolera como una reivindicación no sólo económica sino moral.

Lo que nos separa no es la historia sino el significado de la historia en el presente. Él cree que todas las claves de nuestro futuro están en nuestro pasado. Yo creo que nuestro pasado contiene lecciones perdurables (en particular, en el ámbito social) pero definitivamente no creo que, en pleno siglo XXI, todas las respuestas a nuestros grandes problemas nacionales estén en el texto original de una constitución que ha sufrido incontables modificaciones y de la cual Ackerman habla no como una legislación hecha por los hombres sino como un código intocable y sagrado.

Basado en ese esencialismo histórico, Ackerman cree más: cree en la excepcionalidad mexicana, como si las prácticas económicas del mundo entero no fuesen aplicables, por principio, a nuestro peculiarísimo país. Yo en cambio creo que México, con todas sus particularidades, puede y debe adaptarse a las realidades económicas del siglo XXI (tan distintas de los años treinta) y competir ventajosamente sin perder ni perderse en el camino.

Ni Ackerman ni yo somos expertos en petróleo, pero en este tema su texto parece sugerir que yo estoy empeñado en "cifrar nuestras esperanzas" en "Halliburton y Exxon-Mobil". Él, en cambio, es un baluarte frente "al embate del empresariado global en contra de los vestigios del Estado de bienestar y del socialismo realmente existente". No sé cuales sean esos "vestigios del socialismo realmente existente" que admira Ackerman pero sé que jamás he escrito una línea contra el Estado de bienestar. Y si favorezco en principio la participación privada en el sector energético, no es por una fe dogmática en el mercado sino porque creo que la participación mixta (como en Brasil o Noruega) es mejor para el país.

Mi adhesión razonada a la Reforma Energética no es doctrinaria ni absoluta. Menos aún se debe a una supuesta lealtad con el PRI, partido que combatí por tres décadas y cuyo regreso al poder lamenté públicamente. Mis reparos a la Reforma derivan sobre todo del temor a que se repita la borrachera petrolera de López Portillo. Ése era el sentido de la serie de cuestionamientos críticos que incluí en mi artículo y que Ackerman decidió no leer porque no cuadraban con su caracterización "neoliberal" de mis ideas. Pero las preguntas que planteé siguen en pie, y aún creo que constituyen una buena plataforma crítica para la oposición. De hecho, pienso que la Reforma abriría a la izquierda una posibilidad adicional y prometedora: colocar a uno de sus exponentes (Lázaro Cárdenas Batel, Marcelo Ebrard, Javier Jiménez Espriú) al frente de Pemex para mostrar lo que esa empresa (dotada para entonces de la necesaria autonomía de gestión y holgura

financiera) puede lograr con una administración eficaz y honesta.

No deja de ser extraño que Ackerman atrase el reloj cultural de México ochenta años y nos lleve a los tiempos en que surgió el nacionalismo revolucionario, ideología que –según ha escrito Lorenzo Meyer– "devino instrumento de manipulación del régimen y expresión tan conmovedora como ridícula de 'como México no hay dos'" (Nuestra tragedia persistente, Debate, 2013). Ahora Ackerman abraza esa ideología con pasión fundamentalista y, como ella, rechaza las "rebuscadas teorías" y los "autores extranjeros". ¿Quién presidiría hoy el comité de salud pública que juzgase cuáles teorías son "rebuscadas" y cuáles no? Tal comité ¿permitiría la publicación de libros de Ackerman donde cita autores extranjeros? ¿Apoyaría la condena del presidente Díaz Ordaz a Oscar Lewis por haber publicado Los hijos de Sánchez? ¿Quién es, entonces, el "trasnochado"?

De una cosa estoy seguro: con el nacionalismo que predica, ni John Mill Ackerman Rose ni Enrique Krauze Kleinbort estaríamos debatiendo en este país. Y es que a su lección le falta la herencia que nos permite estar aquí: la herencia liberal. L

Álvaro Mutis: Recuerdos del tiempo viejo (Con permiso de don José Zorrilla)

A finales de 1959 se necesitaba cierto valor para decir que uno admiraba a Borges. Todo el mundo parecía estar en contra de él, en particular los que poco tiempo después serían sus más fanáticos devotos.
La Revista de la Universidad ocupaba el décimo piso de la Rectoría. Desde allí podía observarse un cuadro pintado por un José María Velasco que hubiera salido del taller de Brueghel. El Ajusco intacto, el Pedregal casi deshabitado, el aire sólo estremecido en su transparencia por el humo que salía de la fábrica de papel.
Juan García Ponce llegó a decirme:
–Ven a ver cómo destrozan a tu ídolo –y me condujo a la oficina de la redacción. Allí se encontraba Álvaro Mutis. Repitió las objeciones consabidas y se ganó de inmediato mi hostilidad.
Ya no le dije cuánto me habían impresionado las crónicas que unos meses atrás le hizo Elena Poniatowska, con dibujos de Alberto Beltrán en nuestra Biblia de entonces, el suplemento México en la Cultura. En aquellos días Mutis estaba preso en Lecumberri por haber dispuesto del dinero que le daba para relaciones públicas una aerolínea. No actuó en su beneficio, sino en auxilio de jóvenes escritores y pintores sin blanca. El texto se recogió en un libro, Palabras cruzadas, que por razones desconocidas nunca se ha reimpreso.

El maestro perfecto

Francisco Cervantes editaba en Querétaro una revista muy humilde, Ágora. En ella publiqué unos poemas que ahora supongo malísimos. El profesor de literatura de Cervantes era hermano de Efraín Huerta. Gracias a Efraín, Francisco se hizo amigo de Elena y de Beltrán, y por tanto de Mutis. Él le dijo que quería conocerme debido a los textos de Ágora. Un domingo por la tarde nos recibió en su apartamento de avenida Coyoacán, muy cerca del parque hoy abolido que se consagraba a la memoria del mariscal Sucre.
Durante muchos años ese lugar fue, por la infinita generosidad de Mutis con un desconocido de más que dudoso porvenir, mi aula informal, mi taller literario, mi indicador y examen de lecturas. Mutis, que jamás dio clases, era el maestro perfecto capaz de suscitar en sus oyentes el mayor entusiasmo, el deseo de escribir, la voluntad de saber.
Como Fernando Benítez, Mutis fue incapaz de retener uno solo de sus libros. Su alegría era comunicar y compartir sus admiraciones. Yo salía de su casa con un volumen para mí inaccesible de La Pléyade o un libro o varios de Conrad en la serie editada para Emecé por Borges y Bioy Casares. Al mismo tiempo me regalaba textos colombianos y ejemplares de Mito, la gran revista de Jorge Gaitán Durán.

El viaje que no fue

En sus páginas me entusiasmó El coronel no tiene quien le escriba.
–Bueno, si le gustó (me habló siempre con el "usted" colombiano que es una forma de tuteo inaccesible para nosotros los extranjeros) le voy a regalar La hojarasca. Jamás lo presté porque en México no hay otro ejemplar.
La relación llegó a ser tan íntima que una noche le conté de mi tragedia. Para los demás no era ningún desastre sino una experiencia normal, dolorosa pero indispensable. Sin embargo, los 20 años son la peor edad de la vida. El mundo se me había acabado cuando me dejó A. Ella, a los 18, era de tiempo atrás una mujer nada dispuesta a lidiar con quien seguía siendo un niño.
–Tengo la solución. Usted se me va a trabajar con Gabo. Si se queda aquí seguirá sufriendo al pasar por los lugares que compartieron, al verla con otros, al entender que las puertas de su casa se le cerraron para siempre.
Todo parecía ir muy bien pero el posible trabajo se deshizo y fue García Márquez quien tuvo que venir a México. Carlos Fuentes siempre poseyó la habilidad para alquilar en cualquier parte del mundo casas de amigos ricos. Se creó en el imaginario del rencor la idea fantasiosa de un grupo delictivo que cerraba el camino a los buenos escritores, vivía en mansiones de San Ángel y se desplazaba en automóviles deportivos. En efecto, Fernando Benítez tenía uno que era su única posesión. Monsiváis y yo éramos la refutación viva de esas nociones pues habíamos entrado en el suplemento cuando éramos simples estudiantes sin familia rica ni poderosa, vivíamos sin dinero y empleábamos todas las líneas de camiones, tranvías y trolebuses.

Hemingway y García Márquez

En una reunión dominical en el jardín dije:
–Hoy llega a México Gabriel García Márquez.
–¿Quién es García Márquez? –preguntaron varios. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, Fuentes y yo contestamos:
–El mejor escritor colombiano.
Por la noche fui al cine Paseo con D., tan bella e inteligente como A. Su sola presencia había borrado todo vestigio de la tragedia. En el dominical Claridades vimos que en ese 2 de julio de 1961 había muerto Hemingway. Pasaron años antes de que el accidente se revelara como un suicidio. Para mí fue acto simbólico: la novela angloamericana dejaba el paso a la hispanoamericana.
Llegué a mi casa y me sorprendió hallar esperándome a Mutis y a García Márquez.
–Tienes el único ejemplar que hay aquí de La hojarasca. Es urgente que nos lo prestes. Te lo devolvemos de inmediato.
Les di el libro.
En honor de García Márquez debo decir que me lo devolvió seis años después, cuando bajo un diluvio fue a dejármelo junto con uno de los primeros ejemplares (sin la portada de Vicente Rojo, demorada en el correo) de Cien años de soledad.
Aquel domingo de julio lo prioritario era encontrar alguna fuente de ingresos. Ofrecí lo muy poco que estaba a mi alcance: una nota sobre Hemingway para

México en la cultura y un cuento para la Revista de la Universidad.

La última noche en el laberinto

Pasaron los años y no dejé de leer ni frecuentar a Mutis. Ya en los setenta nos invitaba a comer cada semana a Ignacio Solares, a Cervantes y a mí. Comenzó una larga época en que viví fuera de México la mayor parte del año. Se acabaron las reuniones semanales y muchas cosas más.

En 1986 fuimos a una reunión literaria en Toronto. Mutis estuvo tan lúcido, encantador y cariñoso como siempre. Nos hospedaron en la universidad de York en unos dormitorios estudiantiles desiertos por vacaciones: cien o mil edificios idénticos. No fue difícil dar con el cuarto asignado a Mutis. Me despedí. Él generosamente se ofreció a acompañarme hasta el mío.

Durante no sé cuántas horas erramos por ese laberinto sin luz, primero entre risas, después con un creciente e inconfesado pánico. No había nadie y los teléfonos de la universidad dejaban de funcionar a partir de las 12. El fantasma de Maqroll el Gaviero nos orientó por fin y Mutis pudo hallar el número de mi cuarto. Nos despedimos con un gran abrazo. Sin que mediara pleito ni discordia, jamás nos encontramos de nuevo.

Alvaro Mutis vive en mi memoria no como el Gaviero, sino el capitán que por lo menos tres veces me salvó del mar de los Sargazos, el estrecho de la ignorancia y el océano de las Tormentas. l

(JEP)

Indigna la "ocurrencia" de intervenir "El Caballito": Zaldívar

Judith Amador Tello

El arquitecto y restaurador Sergio Zaldívar no puede creer la idea de que se haya intervenido El Caballito de Tolsá, y considera que el daño causado a la superficie de bronce que está debajo de la pátina "sí es grave", pues se aplicó 33% de ácido. Pero cree que el dictamen de los expertos del INAH "va a contemporizar y a decir que no es tan grave, porque todos son responsables". Califica la escultura como "un hito, una obra de arte que debería tener ya, probablemente, un pabellón protegiéndola", y la coloca entre las cuatro o cinco más importantes estatuas ecuestres del mundo, al lado de El Gattamelata de Donatello, el Colleoni de Verrocchio y el Marco Aurelio de Roma.

Determinante, el arquitecto Sergio Zaldívar Guerra afirma que el bronce es un material que no requiere de restauración, si acaso una limpieza sólo con agua o combinada con un poco de vinagre. Por ello considera que la intervención de la escultura ecuestre de Carlos IV, conocida popularmente como El Caballito, además de parecer una ocurrencia hace pensar en un fraude:

"Parece que se intervienen obras y monumentos que no requieren restauración, pero ofrecen oscurecer el ejercicio del gasto del presupuesto."

El especialista en restauración, director del proyecto de rectificación geométrica de la Catedral Metropolitana, fue responsable del traslado en 1979 de la estatua de la glorieta de Reforma, Juárez y Bucareli a su actual sede frente al Palacio de Minería, en la calle de Tacuba, en el Centro Histórico.

Luego de visitar la Plaza Tolsá –a la cual él mismo rebautizó tras la llegada de la escultura realizada por el arquitecto y artista de origen valenciano Manuel Tolsá (antes llamada Plaza del Senado)– y tomar fotografías de la obra que dan cuenta de los daños que ocasionó la intervención contratada por la Autoridad del Centro Histórico, Zaldívar ofrece sus impresiones a Proceso, manifiestamente indignado:

"Desde luego, es muy desconcertante. La primera impresión es irritante. Indigna la banalidad, cómo de repente, por ocurrencia de alguien, se va a restaurar una obra que es un hito, una pieza muy simbólica del patrimonio de la Ciudad de México y del país, una de las grandes esculturas ecuestres del mundo. Está entre las cuatro o cinco más importantes: El Gattamelata, de Donatello; el Colleoni, de Verrocchio; el Marco Aurelio, de Roma."

Anticipa que, dada la concentración de ácido nítrico utilizada (33%), los daños podrían ser irreversibles, aunque el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (que al cierre de esta edición no se había emitido, pese a que se comprometieron a entregarlo el 26 de septiembre y desde entonces esto se ha ido postergando) pueda decir que no son tan graves, puesto que la institución es tan responsable como las autoridades de la ciudad.

Fue una banalidad, insiste, pues no se ha informado por qué ni cómo se iba a restaurar, tampoco hubo un consejo técnico previo para informar sobre los daños

que presentaba y la metodología para atacarlos. Parece más bien que algún funcionario, “que no ha de saber nada, quería que la limpiaran y que brillara”. Pero el bronce, cuando está a la intemperie, en un ambiente urbano, tiene una reacción y se va patinando con el tiempo.

Se le comenta que el director del Fideicomiso del Centro Histórico (FCH), Inti Muñoz, dijo a este semanario que la restauración, a cargo del despacho privado de Javier Marina, fue decidida por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos en la Ciudad de México, integrado por representantes de diversas dependencias del gobierno capitalino (Proceso 1926).

Entre ellas se encuentran la Autoridad del Centro Histórico, que coordina Alejandra Moreno Toscano, el propio FCH y los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Turismo, Educación y de Cultura, cuya titular, Lucía García Noriega, fue directora del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Muñoz dijo recientemente (El Universal) que en la reunión donde se tomó tal decisión participaron también el INAH y el INBA, así como otros integrantes del comité, como el arquitecto Francisco Serrano, Hilda Trujillo, Zelika García y Miguel Cervantes. Se sabe que forma parte también el arquitecto Vicente Flores, director de Desarrollo Inmobiliario del FCH.

A decir del arquitecto Zaldívar, no saben de restauración, “que me perdonen, aquí debe haber un consejo de especialistas puesto que se aproximan a una obra histórica, una obra de arte”.

Para él “restaurar una obra de arte impone previos y serios estudios para precisar sus daños y los agentes del deterioro a combatir, para restituir sus condiciones y estructura. En seguida, proponer la metodología para llevar a cabo el proceso. No hay nada de eso y se dejan al criterio de personal no preparado acciones delicadas de mucho riesgo”.

Al tiempo que golpea con el puño la mesa de su despacho, el arquitecto enfatiza que a una obra tan emblemática no debe dársele el mismo trato que a cualquier mobiliario urbano. Pregunta con ironía si la Autoridad del Centro Histórico habrá oído alguna vez que restauraron el Colleoni o El Gattamelata con ácido nítrico o con esmeril electromecánico. Ironiza:

“¿O simplemente tomaron una receta de limpiar chapas y metales de algún conserje que abrillanta jaladeras en la oficina de Miguel Ángel Mancera?”

–Inti Muñoz ha dicho que El Caballito tenía daños, incluso agujeros y grietas.

–Yo conozco los daños que tenía y el más grave era que la pata del caballo, por las vibraciones que soportó cuando estuvo en Reforma (y Bucareli), estaba fisurada. Pero cuando lo movimos fue intervenido y se decidió observarlo durante un largo tiempo antes de pretender una restauración, ahí en la pata, para no alterar la escultura.

“Esos son los daños. Si hay otros, que digan cuáles y luego qué se va a hacer, cuándo y cómo. Ése es el procedimiento de intervención en una obra de arte de cualquier naturaleza. Ésta, además de ser un hito, no es parte del mobiliario urbano, no son los botes de basura que se quiere que estén limpios y brillantes. Es una obra de arte que debería tener ya, probablemente, un pabellón protegiéndola.”

Proeza técnica

Si bien el arquitecto no se extiende en las cualidades estéticas de la escultura realizada entre 1795 y 1802 con 500 quintales de bronce del Mineral de Santa Clara del Cobre, según relata en su ensayo El Caballito, incluido en el libro Jahrbuch Für Geschichte Lateinamerikas, sí la pondera como una obra de gran calidad, pues “es un caballo formidable por la perfección de su movimiento”.

Habla también de la proeza técnica de su hechura, por ser la primera obra fundida en una sola pieza en la Nueva España, cuando Tolsá no era fundidor “ni había fundidores de ese calibre en México”. Describe cómo el escultor organizó durante varios años la fundición del modelo en cera con molde de arcilla, para trabajar con la técnica de la cera perdida.

Tolsá se encargó de crear los mecanismos de canaletas, ductos y chimeneas para el proceso hecho en una sola operación, con el fin de lograr que durante tres días el bronce candente fluyera de manera ininterrumpida; si se enfriaba o algo fallaba, tendría que regresar irremediablemente a la elaboración del modelo original.

“Fue una hazaña técnica extraordinaria. Un proceso excepcional. Muchas de las grandes esculturas están hechas en partes. Este caballo está fundido de una sola pieza… Dicen que a Manuel Tolsá se le cayeron los dientes, se enfermó por los gases y se estaba muriendo, y que quedó medio ciego después de esos tres días que estuvo el bronce corriendo para llegar a la fundición.”

Sin embargo, añade, generalmente los méritos técnicos no forman parte de las cualidades artísticas de una obra. Así puede haber un Picasso hecho en dos horas, tan o más valioso que un paisaje de José María Velasco realizado en más de seis meses:

“Pero El Caballito, es admirable, a todos nos gusta, todo mundo lo hemos visto y lo apreciamos, es un animal precioso, y el pobre de Carlos IV se deja ver que es un imbécil.”

La escultura fue mandada a hacer por el virrey Miguel de la Grúa Talamante y Branciforte. “Debe haber sido una ocurrencia políticamente obsequiosa”. Y, “como si se adelantaran las costumbres hoy prevalecientes”, se inauguró en 1796 sin estar hecha siquiera. Se colocó un modelo provisional de madera en tanto la obra definitiva se terminaba. La pieza original se colocó en lo que hoy es el Zócalo y se inauguró el 18 de noviembre de 1803.

Varias fueron –sigue Zaldívar– las guerras en las cuales El Caballito se salvó de ser fundido para fabricar cañones y balas, incluidas las de Independencia y de Reforma. Lucas Alamán sugirió, a mediados del siglo XIX, trasladarla de la Plaza Central al patio de la Real y Pontificia Universidad de México, que se encontraba donde hoy es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estuvo hasta 1852. En ese momento, Lorenzo de la Hidalga se encarga de su traslado al cruce del Paseo Nuevo o de Bucareli y el Paseo del Emperador (actualmente De la Reforma).

Y cuenta que se decidió su traslado y emplazamiento en la Plaza Manuel Tolsá porque el lugar donde se encontraba ya no permitía su aprecio y se había

convertido sólo en una referencia urbana, una parada de camión: “Bajamos en El Caballito”, pero la gente había perdido la vinculación con la obra de arte.
“En cambio acá logramos ponerla en diálogo con la arquitectura de Tolsá, y se puede ver, se pueden apreciar los belfos, la expresión del caballo, la fluidez de las crines, la anatomía del personaje. Es un placer la contemplación.”
Recuerda que el fallecido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez opinaba que debía estar al revés, con el Palacio de Minería detrás y viendo hacia el Museo Nacional de Arte (Munal)”, para formar un conjunto con las dos obras de Tolsá, pero “yo creo que no, Tolsá nunca pensó en juntar El Caballito con Minería, es mejor que dialoguen y que se vea la estatua como obra escultórica y el Palacio como obra arquitectónica”.

Responsabilidades

El arquitecto refiere que Tolsá logró también representar a El Caballito en movimiento, y a la vez ponerle tres puntos de apoyo, lo cual no consiguió Donatello, quien tuvo que poner una pata con una especie de bala de cañón. Por ello no concibe que pudiera tener daños como fisuras. Y concediendo que así fuera, la intervención con el ácido no los estaba atendiendo.
–Lo que usted observó o las fotografías que tomó, ¿hablan de un daño irreversible?
–Desde abajo no se puede ver totalmente pero, si la concentración del ácido nítrico es demasiado fuerte, es probable que sí le haya causado daño a la superficie del cobre. Quién sabe qué le pusieron, por eso se limpian con agua o, cuando mucho, agua con vinagre. Meterle ácido nítrico a una escultura es muy peligroso porque se puede lastimar la superficie que creó el artista.
–Se ha dicho que fue ácido nítrico a 33%.
–Se me hace una concentración muy alta para un tratamiento de limpieza. Arriba de 5% con ácido nítrico ya es muy alto para el bronce.
Zaldívar evoca que hubo un momento en el cual se puso una pátina nueva a la escultura ecuestre, pero quedó de un negro intenso. Las críticas y burlas señalaban que ya no era Carlos IV, sino Escipión el Africano. Entonces se sometió a un proceso químico para disminuir ese recubrimiento.
–¿Podrían argumentar ahora que la pátina que le barrieron no era tan antigua?
–La pátina probablemente no, pero si hay daño del ácido a la superficie de bronce que está debajo de la pátina, sí es grave. Y si hubo una alteración a la pátina del tiempo, tampoco es muy agradable. Las pátinas aportan elementos de gran riqueza plástica.
Considera que la pátina ya no existe porque se ve claramente el color del metal crudo, ni siquiera parece bronce, sino cobre; es posible que fuese un bronce muy rico en cobre, pues viró al rojo, y “eso es muy preocupante”.
“Y el dictamen de los expertos del INAH va a contemporizar y a decir que no es tan grave, porque todos son responsables.”
–¿El INAH, en qué medida? Ellos argumentan que el FCH inició los trabajos sin su autorización.

–¡Está bajo su cuidado! ¡Tengan o no autorización! Es el organismo que tiene la responsabilidad. ¿No se dieron cuenta de que había andamios de más de ocho días? Está frente a un museo de Bellas Artes, el Munal. El director del museo no puede decir: “Oigan ¿qué van a hacer en El Caballito?” Alguien debió preguntárselo, ¿no?

“Está enfrente de sus oficinas. Es más, ya podría considerarse como parte del museo esa figura, y al señor no se le ocurrió preguntar porque ya está afuera de las puertas de su museo. Son hombres del campo cultural, tienen obligación de hablar, de intervenir, de decir las cosas.”

–¿Se vuelve un problema la división del cuidado del patrimonio entre el INBA y el INAH? Porque el director del Munal puede argumentar que está bajo cuidado del INAH, y que el INBA no tiene responsabilidades.

–¡Exactamente! Pero es responsable hasta el policía de la esquina, porque debe preguntar: “Oigan, ¿qué van a hacer aquí, quién les dio permiso de poner andamios?”. La cadena es así. Para que funcionen las cosas en este país debe acordarse todo esto. Es responsable el delegado, Obras Públicas… “Es que vamos a arreglar El Caballito…”. “¡Ah! A ver sus papeles”. ¿No?

Con pesar, el arquitecto afirma que la gestión del patrimonio en México está muy mal. Dice que, aunque parezca exagerado por la situación del país, así como Enrique Peña Nieto fue a ver a los damnificados de Guerrero, aunque no “va a reparar los daños con sus manos”, los responsables de cultura, Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; María Teresa Franco, directora general del INAH, e incluso el mismo Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, debieron apersonarse en el lugar.

“Ir a ver qué ha pasado con la obra de arte más importante de esta ciudad, porque es su responsabilidad. Hacer un acto que implicara una especie de disculpa a la sociedad de parte de las autoridades responsables.”

Reconsidera que en el desastre en el cual se encuentra el país, con las carencias que hay, las reformas pretendidas, los bloqueos en las calles, la depresión económica y moral, quizá las cuestiones artísticas y culturales dejan de interesar. Para él es cuando más atención debería prestárseles.

Su primer comentario tras ver la escultura fue que alguna autoridad cultural debería renunciar, siquiera por vergüenza, pues un daño a una obra de arte de tal naturaleza tiene un responsable con nombre y apellido. El problema es que se diluye, no se sabe cuál es, si la Autoridad del Centro Histórico o el INAH, que es “responsable de todo y de nada”, cuando obras tan emblemáticas como ésta deberían tener un encargado, como lo tienen muchas de las zonas arqueológicas del país.

Piensa asimismo que los trabajos de restauración de este tipo de monumentos deben hacerse públicos y con respeto a la comunidad. Informar, mediante cédulas e imágenes fotográficas, qué se está realizando. Pero “ahora lo que van a hacer es encerrar El Caballito para que no se vea lo que se hace. Y lo primero que deberíamos exigir es ver cómo se trabaja, a los ojos de todo el mundo, es un bien que nos concierne a todos”.

Cuando se le comenta que siempre se trabaja a puertas cerradas, resalta que en algunas partes del mundo se hace a la vista de la ciudadanía. Lamenta que, como en el Claustro del ex Convento de la Merced, el primer paso haya sido cerrar. Nadie se entera de las obras y al final vienen las sorpresas, por las alteraciones o por hacer del patrimonio recintos para la “cultura de consumo”, “parques temáticos tipo Disneylandia”. L

La Esmeralda de Televisa

Blanca González Rosas

Sin internet para el uso y actividades académicas de los estudiantes, con una mediocre exposición en sus instalaciones promovida por el actor Facundo, de Televisa, y con una severa crisis estructural, la emblemática Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, cumple 70 años.

Fundada en 1942 por artistas tan relevantes como Diego Rivera, Frida Kahlo y María Izquierdo, entre otros, la escuela ubicada en la Ciudad de México y perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), evidencia la desorientación artística, ética e institucional que, en el contexto de las artes visuales, existe en ese organismo. Con la nueva administración, lejos de transformarse –como señala el discurso de presidente Enrique Peña Nieto–, ha optado por dar continuidad a la mercadológica gestión panista de la cultura.

La irresponsabilidad pedagógica de La Esmeralda bajo la dirección del artista Eloy Tarsicio se evidenció el pasado martes 1 de octubre, cuando un grupo de estudiantes se inconformó por la utilización de las galerías de la escuela para presentar la selección del concurso Arte 40, que promueve la estación radiofónica Los 40 Principales. Perteneciente al consorcio Televisa-Prisa, la estación organiza desde hace cinco años un evento publicitario disfrazado de fomento a la creación. Carente de calidad artística e impacto legitimatorio, el único atractivo del certamen es la cuantiosa cantidad de 200 mil pesos para el primer premio. Dirigido al mismo segmento generacional que la estación –consumidores de 18 a 40 años–, el certamen se caracteriza por la mediocridad de los concursantes. En la edición 2013, los abundantes lenguajes figurativos comparten su simpleza con la intervención de pequeñas figuras recortadas que, evocando la carrocería de un Peugeot, publicitan la marca automotriz bajo una sección denominada “El arte de tener un Peugeot”.

¿Cuáles son los beneficios académicos que obtienen los estudiantes con la exposición mencionada? Además de que usurpó el calendario de las exhibiciones de alumnos programadas previamente, la muestra tendrá una duración que, del 1 al 28 de octubre, duplica las rigurosas dos semanas de las muestras estudiantiles.

Descontentos no sólo por la exposición organizada por la radiodifusora de Televisa, sino también por la falta de transparencia y diálogo con las autoridades de La Esmeralda, un grupo de alumnos expuso su malestar y exigió respeto por la educación pública el pasado 1 de octubre en el contexto de la transmisión que hizo el programa ¡Ya párate! desde las galerías esmeraldinas. De manera burlona, el conductor conocido como Facundo les respondió: “Perdón si no hemos arreglado lo del internet, pero ese no es nuestro pedo” (http://www.youtube.com/watch?v=7-sAY9KkKV4).

Además de la sumisión ante Televisa y la indiferencia de Tarsicio ante los estudiantes, el evento evidenció una gran irresponsabilidad en la administración de los recursos públicos, por parte tanto del INBA como del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: ¿Cómo se justifica la subvención de 1 millón de pesos a

galerías de prestigio internacional, como la Kurimanzutto y la OMR, cuando los estudiantes de la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales carecen de internet en las instalaciones de La Esmeralda?

“La Cenicienta” de Rossini

Mauricio Rábago Palafox

León, Guanajuato.- El Teatro Bicentenario de León ya se ha convertido por derecho propio en sinónimo de calidad, pues desde su apertura no hemos visto ahí más que producciones de primerísima calidad, lo cual es un mérito doble tomando en cuenta que en un principio se carecía de lo más esencial. “La Cenerentola, ossia la bonta in triunfo” (1817) ópera cómica, fue compuesta cuando Gioacchino- Rossini (1792-1868) tenía sólo 25 años.

El cuento de la Cenicienta se pierde en la noche de los tiempos, hay rastros de él en China y en Egipto, el francés Charles Perreault (1628-1703) lo publica dentro de su colección Contes de ma mére l’Oye (Cuentos de mamá la Oca), y a partir de ahí su fama se vuelve exponencial. Tres versiones en la actualidad son las principales de La Cenicienta: La ópera de Rossini que hoy nos ocupa, el ballet (1945) de Prokofiev (que la CND presenta frecuentemente con gran éxito) y el largometraje en dibujos animados de Walt Disney (1950). Además de Rossini otros famosos (y no tanto) autores han compuesto óperas sobre este cuento, siendo la de Rossini la única que ha sobrevivido el paso del tiempo.

Hace algunas décadas la única ópera rossiniana que se representaba con regularidad era El Barbero de Sevilla compuesta un año antes que La Cenerentola, pero gracias a un movimiento internacional de revalorización de las óperas de Rossini, se han ido rescatando la totalidad de sus obras, se han grabado y escenificado y han surgido expertos en canto rossiniano, especialidad notablemente difícil por sus agilidades y sus retos técnicos aparentemente infranqueables.

Lo primero que hay que destacar de la reciente Cenerentola del Teatro Bicentenario, es la magnífica escenificación a cargo de Luis Martín Solís que modernizada, no trastoca ni deforma el cuento original ni la voluntad de los autores. El equipo formado por Jeridy Bosch (vestuario) Jesús Hernández (maravillosa escenografía e iluminación) y Érika Torres (coreografía) además del propio Solís, ofrecieron un espectáculo muy apreciable, verdaderamente memorable. Hicieron actuar y bailar a los cantantes de ópera lo cual no es nada fácil por una razón; cuando cantan están concentrados en la música y el canto.

México cuenta con un puñado de solistas de primera línea a nivel internacional especialistas rossinianos y varios de ellos se dieron cita en León. Lupita Paz, (La Cenicienta) bella, bien actuada y mejor cantada con un sonido relajado y ágil, una robusta y hermosa voz de mezzosoprano. Noé Colín (Don Magnífico) el padrastro malo hace un papel con una vis cómica sensacional, canta además de maravilla, no dudaríamos en llamarlo el mejor bajo mexicano de todos los tiempos. El Príncipe Ramiro fue interpretado por Ernesto Ramírez, clarinetista y cantante jalisciense, de gran solvencia canora en este personaje que hoy por hoy muy pocos en el mundo se atreven a cantar y lo hizo más que bien, además con verdad escénica, algo no muy común en la ópera. Josué Cerón en el personaje de Dandini, el camarero del príncipe, que se disfraza de su amo, para conocer las

verdaderas intenciones de Don Magnífico y las hermanastras, fue inolvidable tanto en su canto como en su depurada actuación que tenía al público divertidísimo, no paraba de reír. Las hermanastras interpretadas por Zaira Soria, magnífica soprano y Araceli H. Fernández joven mezzosoprano, muy destacadas en sus difíciles roles, también muy bien actuadas, así como el bajo Arturo López Castillo, (Alidoro, personaje que en cierta manera es el equivalente rossiniano al hada madrina en esta ópera).

El Teatro casi lleno; la vida cultural de León se ha visto enormemente enriquecida por estas actividades de primer mundo del Teatro Bicentenario. Hay que decir que el director concertador Sébastien Rouland (Francia) es el único extranjero entre los miembros del equipo, los demás nacionales pero de nivel internacional. El Coro dirigido por José Antonio Espinal, fue el del teatro Bicentenario y la Orquesta la Juvenil Universitaria Eduardo Mata quienes hicieron un gran esfuerzo y los resultados muy loables. Una función redonda.- l

“The Jöker, Jack. La última carcajada de Heath Ledger”

Estela Leñero Franco

Jack Nicholson y Heath Ledger se enfrentan la noche en que el intérprete joven de El Guasón muere por una sobredosis de pastillas para dormir. Tiene pesadillas, se aparecen sus obsesiones, los personajes que lo atormentan y su imposibilidad de derrotar al actor que dejó huella en la cinematografía estadunidense. Pero Heath Ledger se defiende y encuentra cualidades para tratar de superarlo, aunque su debilidad emocional es la que destruye a este actor australiano inmiscuido en el imaginario “gringo” que monopoliza el cine que vemos en nuestro país.

The Jöker, Jack. La última carcajada de Heath Ledger, es la obra de teatro escrita por Javier Márquez, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2012. Pareciera un texto con una estructura compleja, pero al ser dirigida por el mismo autor (quien carece de habilidad para resolver su pieza dramática), resulta una puesta en escena emborronada y básica en su presentación. Resalta, sin embargo, la capacidad interpretativa de los protagonistas, encarnados por Rafael Pimentel y Óscar Serrano; el primero, interpretando a Jack Nicholson interpretando al Joker, refleja el grado de locura a la que llegó este actor y responde a la exigencia que implica un personaje malévolo cuyo disfrute es hacer daño; el segundo transmite el estado atormentado de Ledger y la angustia que lo carcome. Sobresale la escena en la que ambos compiten para demostrar su supremacía sobre la premisa de si es mejor morir joven como estrella o sostener la fama hasta la decadencia.

Laura Muñoz interpreta a la expareja de Ledger, Michelle Williams, y también a Harley Quinn, su amante. La actuación es forzada y estereotipada, tanto por ella como por la dirección, al grado de que no se sabe si en la dramaturgia estos personajes son así. El director creyó que para darle fuerza a la obra la estridencia era la solución, pero olvidó lo difícil que es mantener una pieza en ese estado.

The Jöker, Jack. La última carcajada de Heath Ledger, de Javier Márquez, utiliza diferentes planos de realidad: el presente del insomnio, las pesadillas que cobran vida, los fragmentos de su diario –que el director resuelve con una incómoda voz en off– y el set de televisión, entre otros. Los personajes transitan en estas realidades, creando una atractiva atmósfera enrarecida con diversos vértices de conflictos. Los personajes representados ahí –el Joker de Jack Nicholson en la película de Batman en 1989 y el Joker de Heath Ledger en 2008– desarrollan la hipótesis de que fue Jack Nicholson quien ejerció una fuerte presión psicológica en Heath Ledger hasta llevarlo a ese estado de angustia.

En …La última carcajada de Heath Ledger son dos villanos los que saltan al escenario, utilizando el humor negro y una atinada ironía. En el caso de Nicholson, Pimentel se transforma con versatilidad en un loco, en un payaso o en ese personaje interiormente derrotado por el tiempo.

La obra de teatro premiada, que puede consultarse por internet (ya que los editores no lograron encontrar el formato para publicarlo en la antología de las obras seleccionadas), muestra variedad tipográfica, colores para los textos de

cada personaje, diseño para los escritos del diario o descolocación de las palabras. Eso hace suponer riqueza en la propuesta dramática, pero nos obstaculiza ubicarla en la realidad y más aún observar ese ingenio tipográfico en el escenario.

“Miradas múltiples”

Javier Betancourt

En la serie de estrenos de la Cineteca destaca el documental de Emilio Maillé, Miradas múltiples (México-Francia-España, 2012), declarado homenaje al cinefotógrafo Gabriel Figueroa, que combina imágenes de las películas que retrató con entrevistas a fotógrafos de cine de todo el mundo que comentan la obra de este gran artista mexicano.

Maillé selecciona escenas y secuencias heterogéneas de las películas de las décadas de los cuarenta y los cincuenta, la llamada Época de Oro, de las que extirpa el sonido y reedita de manera temática, en cierta medida de acuerdo con los comentarios de los entrevistados. El universo en blanco y negro se anima con los rostros de Dolores del Río, los ojos de María Félix, paisajes de Xochimilco, magníficos parajes, trágicos y devastadores cielos que amenazan con devorar a sus criaturas; grandilocuencia que apenas se salva por un auténtico sentido trágico de la condición humana; y quizá sea éste el gran secreto de don Gabriel, más allá del sentimentalismo y del esteticismo que le achacan sus detractores.

El resultado es una danza de imágenes que orquesta la música de Michael Nyman y de Manuel Rocha; la intensión evidente es dejar que destile la emoción de la fotografía, aunque resulta impensable que una imagen del colaborador de Emilio Fernández no produzca emoción alguna, en cualquier contexto donde aparezca. Pero el trabajo de edición de Maillé captura la tristeza y la nostalgia de las composiciones apoyado en los elogios de los entrevistados; el prestigio de los fotógrafos, condensado en pequeñas cápsulas que informan al público del nombre, y de los directores famosos con los que han trabajado.

Verdadera ofrenda a la efigie de Gabriel Figueroa construida con el mejor trabajo de edición que haya logrado Maillé (Rosario Tijeras), importa la ausencia de más cinefotógrafos mexicanos que tendrían mucho que compartir sobre la influencia o el rechazo a la obra de este emblema del cine y de la cultura mexicana, pero es innegable el logro del director. Miradas múltiples puede verse repetidas veces, es el tipo de cintas como aquellas en las que ha participado Christopher Doyle (fotógrafo de Wong Kar-wai) donde la imagen, de principio a fin, funciona a manera de frases musicales. Una paradoja del cine es que, en general, el responsable de la imagen de la película, el fotógrafo, queda siempre detrás de la cámara; aquí el cinéfilo obtiene el beneficio de conocerlos y escucharlos ofreciendo una pequeña cátedra.

Gabriel Figueroa trabajó en México con tres importantes cineastas, Emilio Fernández, Roberto Gavaldón (Macario) y Luis Buñuel, y algunas de la cintas de este último se hallan entre las mejores de la historia del cine; podría afirmarse que por malas que fueran otras, no habría desperdicio si la imagen estuvo a cargo de este gran fotógrafo. En sentido estricto, no es que el México que retrató haya desaparecido, sino que nunca existió; seguramente que él lo intuía, y en parte proviene de ahí la nostalgia que provoca su obra. Alguno de los fotógrafos entrevistados mencionan la sensualidad (en sentido erótico) de la imagen, otro

comenta sobre el aspecto casi religioso de su estética; dos cualidades inseparables del arte de Figueroa.

“Gastronautas”

Florence Toussaint

Los programas gastronómicos abundan en las parrillas programáticas, le gustan a la gran mayoría pues no encontrará discrepancias ideológicas, a cualquiera le agrada degustar aunque no guise, el alimento es lo que nos mantiene vivos.
Hablar de comida, escoger ingredientes, cocinar, sentarse a paladear un buen plato es algo que todos, aun los que no tienen televisión de paga en su casa, han hecho alguna vez. Es parte de un ser cultural básico, de una manera de relacionarse. Ocurre en todas las sociedades. De ahí el éxito de canales de cable como Gourmet.
Sin embargo hay distintos modos de acercarse al tema: desde un set convencional parecido a una cocina y con receta es quizá el menos divertido. Así lo han hecho durante años emisoras comerciales. Viajando, recorriendo el paisaje o las ciudades para luego llegar con las tradicionales cocineras de pueblo a la manera de Mochila al hombro que se transmitía por Canal Once del IPN. En la esquina de cualquier ciudad, en una avenida fastuosa con un banquete y los comensales sentados, en las fondas, los restaurantes de lujo, los de barrio, los de ciudades emblemáticas como París. También en el campo, en la playa, al lado de los acantilados, de los arroyos, lagos y lagunas. Tales recorridos y punto de destino podemos apreciarlos en series que el Gourmet produce. Aquí abundan los chefs especialistas en determinada preparación, los catadores de vinos o someliers. Los escenarios son espléndidos.
En Discovery Channel hay también programas de comida. Están entreverados con la historia, Benito Taibo conduce, platica y cocina. En Canal 22, en TVUNAM y ahora en Canal 30 de OPMA se realizan programas cuyo punto de partida es la gastronomía mexicana, una de las mejores del planeta. Y justamente OPMA ha elegido darle la vuelta a la temática haciendo de Gastronautas una ficción realista. Tres actores juegan sus papeles: un escritor busca elaborar un libro sobre comida, una chica fotógrafa registra los lugares del recorrido y los platos. La editora los presiona a ambos con los tiempos.
Si bien tiene la virtud de ser una novedad (pues hasta aquí los programas eran documentales con un guía-conductor que nos introduce con los cocineros y a los sitios en donde se adquieren los ingredientes o se consumen los platillos elaborados), el resultado no es feliz.
El hecho de que sean actores acartona los diálogos con los verdaderos cocineros, además de que el escritor no tiene la menor idea de cómo aparentar que sabe de las artes de la cocina. Se trata de un melodrama común, un trío amoroso. El pivote es el hombre, las dos mujeres están enamoradas de él. La anécdota es bastante machista, sin contar que la actriz Carmen Landa, que encarna a la editora, sobreactúa de tal manera que vuelve obvio e inverosímil a su personaje. Es una lástima porque las locaciones han sido buscadas con esmero, son hermosas, y la realización impecable.

“El policía”, de Rodríguez Castañeda

Miguel Ángel Flores

Una de las invenciones más notables de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana fue, sin duda, la invención del país legal, con su máximo fruto, la Constitución. Un país de leyes donde teóricamente no existía el abuso de las autoridades ni la tortura ni el crimen legalizado por parte del Estado. Un país legal que en algunos casos es admiración de otras naciones. Pero bajo esa apariencia está el país real, con sus bajos fondos, sus sótanos, donde al abrigo de miradas indiscretas se decide y se lleva a cabo el castigo para quienes se han atrevido a desafiar al sistema político, sobre todo si ese desafío se realiza por la vía violenta.

La búsqueda de cómo son esos sótanos y sus protagonistas ha sido el objeto del reportaje de Rafael Rodríguez Castañeda que intituló El policía, pues su investigación se centró en reconstruir a ese borroso personaje que se llamó Miguel Nazar Haro, uno de las más siniestras figuras de la policía llamada Dirección Federal de Seguridad (DFS) que tuvo a su cargo la triste misión de perseguir, torturar y matar, labor que realizó sin escrúpulos.

Rodríguez Castañeda nos informa que fue Miguel Alemán quien, a principios de su sexenio, tuvo la idea de fundar un cuerpo policiaco a cuyo cargo estaría la seguridad del señor presidente. Protegerlo sobre todo de atentados. Para ello confió a un antiguo amigo, de profesión militar, que le organizara una especie de “FBI de huarache”, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con el nombre de DFS.

De acuerdo con el autor, el periodo de Miguel Alemán coincidía con el comienzo de la llamada Guerra Fría: la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También en ese periodo se sentarían las bases del modelo económico favorable en gran parte a la clase empresarial y que iba a requerir de mucha estabilidad política, la que debía lograrse a cualquier costo. En cuestión de años se logró la industrialización del país y con ello su modernización mediante el autoritarismo político, que estableció un férreo control en las esferas del poder.

El movimiento del 68 fue la expresión del hastío por un sistema que había llegado al extremo del abuso en sus métodos autoritarios. La respuesta del gobierno fue la represión implacable. Ante ella, y en tiempos en que la revolución cubana gozaba de prestigio, ante el recuerdo de los hechos sangrientos sucedidos en Madera, Chihuahua (donde un grupo rebelde de profesores había sido suprimido sin miramientos), surgió en algunos jóvenes la idea de la guerrilla rural y urbana.

Rodríguez Castañeda reportea en su libro los hechos que paulatinamente hicieron posible que la DFS se convirtiera en el brazo ejecutor de la represión política, con su Brigada Blanca, dando así origen a un oscuro personaje que podía actuar sin ninguna limitación si de castigar se trataba, pues tenía garantizada la impunidad. Para él no había más regla que la ciega defensa de los hombres del poder. Ante los reparos legales afirmaba con energía que si de seguridad del Estado se trataba, no había constituciones ni leyes que valieran: nunca explicó qué entendía por seguridad, y cabe la duda de si alguna vez leyó la Constitución.

Rodríguez Castañeda fue en busca de dos testimonios fundamentales que informan con solidez cómo perseguía Nazar Haro, según lo vivió en carne propia Heberto Castillo, así como rescata también la experiencia de Eduardo Valle, El Búho, de cómo Nazar contaba con todos los recursos para actuar al abrigo de la institución militar, la cual muchas veces negó la existencia del Campo Militar No. 1 como centro de retención y tortura. Es, asimismo, trascendente la documentación que entrega el autor de los encargos que hacían al policía los políticos para resolver de forma ilegal, llegando al extremo del homicidio. Tal fue el caso del gobernador de Yucatán, Luna Kahn.

El reportaje de Rodríguez Castañeda se cierra con la decadencia de El policía. Ilustra el reportero cómo, en el tramado de la Guerra Fría, Nazar se convirtió en pieza importante para los servicios del espionaje estadunidense, hecho que incrementó su impunidad. Al amparo de ella montó un negocio: robar coches en Estados Unidos y venderlos en México. Una muestra de su cinismo y arrogancia fue la entrevista que concedió a Jacobo Zabludosky para defenderse de las acusaciones, que se transcribe en el libro.

Al final, Miguel Nazar Haro, después de una breve estancia en la prisión, murió en su cama eximido de culpas. La DFS fue corroída hasta lo más profundo: se convirtió en protectora de narcotraficantes. Así selló su fin el “FBI de huarache”. l

---

* Rodríguez Castañeda, Rafael: El Policía: perseguía, torturaba,- mataba. Editorial Grijalbo; México-, 2013.

Cervantino: Estrenan ópera inspirada en Verdi

Alejandro Saldívar

A 200 años del nacimiento del compositor Giuseppe Verdi se estrena por primera vez en México la ópera Verdi Ritrovato en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato.

Verdi Ritrovato tiene por inspiración dos piezas del músico italiano: “Alzira” (basada en la obra de teatro de Voltaire) e “I due Foscari” (de Byron). El montaje utiliza las voces de 15 jóvenes para crear reverberancias y combinaciones con postales de Busseto, pueblo natal de Verdi, para ejecutar la ópera en su conjunto.

“En estas piezas la música es muy buena, pero Verdi se dio por vencido y no las promocionó más, así que decidí inspirarme en algunos pasajes y me dejé guiar por un flujo psicológico para crear una nueva arquitectura musical”, cuenta Philip von Reutter, artista egresado de la Universidad de Wesleyan, Estados Unidos.

Como un náufrago que escucha el mar dentro de un caracol, el músico intenta desatrofiar el sentido del arte en nuestros días:

“En la ópera se presentan cada vez menos obras nuevas y se repite siempre el repertorio conocido.”

Von Reutter se aleja de las obras decimonónicas de Verdi, como Aida, Otello, Falstaff o incluso de la popular triada de Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore, para darle un aire nuevo al compositor italiano.-

La obra se estrenó el año pasado en el Teatro di Cestello de Florencia y fue bien acogida por la crítica peninsular. En la ópera, también dirigida por Philip von Reutter, participa la compañía Canto en Movimiento, un grupo de jóvenes especialistas en teatro cantado.

Las funciones serán en la terraza colonial de Casa Cuatro de la ciudad de Guanajuato, el miércoles 9 a las 17:00 horas, jueves 10 y viernes 11 a las 20:00 horas, y el sábado 12 a las 17:00 y 20:00 horas. L

El éxito de Derbez, por "abuso" del cine de denuncia

Columba Vértiz de la Fuente

En dos semanas de proyección en México, la película No se aceptan devoluciones se convirtió en la más taquillera de la historia nacional, mismo rango que alcanzó en Estados Unidos como película hispana. El cómico y director de esta ópera prima, Eugenio Derbez, atribuye su éxito, entre otros, al marketing, a su calidad, a que es familiar, pero también a que hubo "un abuso" de cintas de denuncia, lo cual "limitaba" la oferta. En entrevista el actor enfrenta cuestionamientos, como el de que se oculte tras un manto idílico la realidad de Acapulco.

El éxito en las carteleras de Estados Unidos y de México de su ópera prima No se aceptan devoluciones, "es una sorpresa" para el comediante mexicano Eugenio Derbez, pero justifica que trabajó 12 años en la película, "por lo cual está bien cuidada en todos los aspectos".

Se ha convertido en el largometraje hispano más taquillero en la Unión Americana, con una recaudación, hasta el pasado 30 de septiembre, de 38 millones 567 mil dólares. Le quitó el lugar a El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que durante el tiempo que permaneció en las salas percibió 37 millones 600 mil dólares.

En México ya es el largometraje nacional más visto. Hasta el cierre de esta edición había recopilado 396 millones 986 mil pesos. Superó a Nosotros los nobles, de Gary Alazraki, que captó en total 322 millones de pesos.

Derbez no sólo dirige y actúa en No se aceptan devoluciones, también es productor, junto con Mónica Lozano (Amores perros, Voces inocentes y Colosio, el asesinato), y guionista, junto con Leticia López Margalli y Guillermo Ríos. El filme costó 5 millones de dólares.

Derbez, a quien ya le están ofreciendo proyectos en Estados Unidos, antes de partir a esa nación para ver de qué se trata, accede a una entrevista con Proceso.

–¿A qué le atribuye el éxito en Estados Unidos y en México?

–Nadie tienen la fórmula del éxito. Sin embargo puedo decir que la película estuvo muy bien planeada desde un principio para que viajara, para que no se quedara en México. Siempre se cuidó para que tuviera la mejor calidad. Todos los procesos se cuidaron, el marketing, la promoción y demás. Es una de las campañas más grandes que se ha hecho de una película en México y en Estados Unidos.

"Además, es un filme familiar, oferta que faltaba en el cine mexicano. En los últimos años todas las películas mexicanas han sido para adultos, con temas muy fuertes, de violencia, narcotráfico, drogas, en fin. A No se aceptan devoluciones se puede ir con la abuelita, los hijos, los papás. Y hay que sumar que el largometraje conecta muy bien con la gente. No porque yo sea el director pero, la verdad, nunca me había tocado ver que las personas salieran de una cinta tan emocionadas y tan conectadas con la historia. Sabíamos que iba a conectar, pero no a ese nivel, sí ha sido una sorpresa… Creo que tener una película que

funciona, una buena promoción y una oferta de cine familiar, todo eso junto, hizo este fenómeno."
Su comedia bilingüe se estrenó en Estados Unidos el 20 de agosto en 347 salas. Ese día ganó 38.5 millones de dólares. Y en México inició su corrida comercial el 20 de septiembre en mil 500 salas. Ese día obtuvo 31.3 millones de pesos.
Enseguida el hijo de la actriz Silvia Derbez se centra en Estados Unidos:
"Allí, el primer fin de semana, todos los latinos acudieron a los cines, pero de una manera espectacular, más que en México. Con sólo 347 salas hicieron lo que aquí hicimos con mil 500 cines. Nunca había pasado que una película en español captara tanta gente. La prensa de allá sacó varios artículos en los que señalaban que un largometraje con únicamente 347 cines hizo los números contra películas que tenían 3 mil 200, 3 mil 500 y hasta 3 mil 800 salas. Eso hizo que los estadunidenses al siguiente fin de semana fueran a ver de qué trataba la película, además de los latinos. Por eso hemos llegado a esas cantidades.
"De toda la cartelera estadunidense, primero pasamos del quinto lugar al tercero, luego al sexto y después al tercero. Estamos entre las diez películas más taquilleras en ese país. Es un sueño que nunca imaginé."
En No se aceptan devoluciones, Valentín (Derbez), un soltero de Acapulco y sin compromiso alguno, recibe la visita de Julie (Jessica Lindsay), una casi olvidada conquista que le lleva a la hija de un año, Maggie, que tuvo de él. Julie le encarga la bebé mientras va a pagar el taxi, pero nunca vuelve.
La paternidad no estaba entre los planes de Valentín, quien intenta desesperadamente dar con el paradero de Julie para devolverle a Maggie. La única pista que tiene es una vieja fotografía donde Julie aparece dando clases de aerobics en un hotel de Los Ángeles, California.
Así Valentín, sin hablar inglés, sin visa ni dinero, se va a Estados Unidos. Allí encuentra a Frank (Daniel Raymont), productor de cine de Hollywood que le da trabajo como doble de cine para realizar escenas de peligro.

Filme internacional

Derbez es productor, director y protagonista de Al derecho y al Derbez, Derbez en cuando y XHDerbez, programas televisivos que han sido exportados a toda Latinoamérica y se repiten en el canal Comedy Central. Actuó en las películas La misma luna, de Patricia Rigen; No eres tú, soy yo, de Alejandro Springall, y Lack and Jill, junto a Adam Sandler, Al Pacino y Katies Holmes, entre otros.
Relata que siempre pensó que No se aceptan devoluciones sería una película internacional:
"Mi inspiración de alguna manera había sido La vida es bella, de Roberto Benigni. Era totalmente hablada en italiano y a pesar de eso ganó el Óscar como mejor película. Sabía que no iba a ser problema si No se aceptan devoluciones tuviera sólo un poco de español, siempre y cuando quedara bien. Mi tirada fue realizar una película y luego que me sirviera para dar el brinco a Estados Unidos.
"Siempre traté de que la historia fuera muy universal, que los chistes o que las situaciones graciosas fueran entendidas por cualquier tipo de audiencia, llámese

estadunidense o latinoamericana o europea, y que tuviera, ¡claro!, ciertos regalitos para la audiencia latina, como los cameos y algunos chistes locales, pero si alguien no está conectado con ese humor, esa cultura, no le afecta para entender la cinta. Siempre me he manejado así cuando hago programas también para toda Latinoamérica."

–¿Cómo se logró que fuera una película internacional?, ¿se hizo una investigación?

–Sí realizo investigación de algunas cosas. Pero en estos 12 años lo que hice básicamente fue analizar muy bien el guión. Por eso nos tardamos tantos años. Sobre todo en conseguir el dinero. Al mismo tiempo que lo conseguía, revisaba el guión.

–¿Por qué escogió una historia familiar, por qué no de denuncia u otro género?

–Denuncia no, y hablo como espectador y amante del cine mexicano. Estaba harto de ir a ver el mismo tema: pobreza, droga, narco, violencia, sexo, denuncia, en fin. Quería ver un cine diferente y creo que la gente también. Tan es así que le ha ido muy bien a Nosotros los nobles y a No sé si cortarme la venas o dejármelas largas, de Manolo Caro. Son filmes que sólo pretenden entretener. Para mí, hubo un abuso de las películas de denuncia, y no estoy diciendo que sean malas películas, en absoluto, porque han ganado muchos premios, simplemente que la oferta en México era muy limitada.

–Para los críticos, películas como Nosotros los nobles son comerciales, ligeras y frívolas, y están preocupados de que sean las más taquilleras.

–No soy experto, pero no creo que el cine sea para unos cuantos. El cine se hizo para ser visto. Yo estaba cansado de ver cine que sólo entienden los directores. No es el tipo de cine que me guste. Entonces, ¿quién va a decir qué está bien y qué está mal? Según yo, el público. Deberíamos tener un poco más de apertura y encontrar ese equilibrio entre no realizar una cinta demasiado sosa y tampoco una película demasiado profunda.

Sobre No se aceptan devoluciones, Luis Prados escribe en el portal de El País, de España:

"Cuenta con abundantes dosis de cursilería televisiva. El protagonista, interpretado por el propio Derbez, es un latin lover de Acapulco, que emigra a Los Ángeles en busca de la madre y allí encuentra empleo como doble de películas. Un héroe, de los 'de antes', es decir, un mexicano huevón, torpe, acomplejado y sentimental, para quien emigrar al norte no es sólo un paseo campestre, sino cosa de risa. Merece la pena detenerse en el Acapulco de Derbez. La ciudad turística es probablemente una de las más peligrosas en México, con mil muertes violentas en 2012, y atraviesa una grave crisis, pero nada de eso se ve en la película."

Derbez manifiesta:

"Yo sé que están juzgando la película porque viene de mí, pero el guión estuvo escrito también por Guillermo Ríos y Leticia López Margalli, gente de cine y televisión muy seria. Esta cinta fue revisada durante 12 años por gente importantísima de la industria, Eugenio Caballero, Luis Mandoki, Gustavo Loza, productores y gente de la industria de Estados Unidos, de México, en fin, y me pasaron notas y 90% de éstas fueron incluidas."

–¿No cree que su película está fuera de la realidad?
–No, no está fuera de la realidad. Ahora salgo a la calle y puedo comer en un restaurante y decir “qué bonita está la tarde”. No significa que no haya asaltantes a tres cuadras, pero estoy contando la historia de que estaba comiendo en el restaurante, vi una nube preciosa y entonces llegó una niña y me dio una flor. ¡Estoy contando una historia!, ¡estoy contando mi película!, mi historia es así, porque así se me ocurrió. Yo estudie cine, es mi carrera, y Rodrigo Prieto fue mi compañero de escuela. Antes de rodar el filme, me fui a Los Ángeles y a Nueva York a tomar cursos para refrescar otra vez todo. Estuve acudiendo con muchos directores a ver cómo dirigían, tomé clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica, con su director actual, Henner Hoffman. No hice un trabajo improvisado.
–¿Cómo le hizo para crear ese marketing de la película?
–Con trabajo de años. Las cosas no son gratis. También me duele cuando dicen “¡Ah!, ¡claro!, ahí está Televisa detrás, cómo no”. Si me apellidara Azcárraga, lo entiendo. Chequen todos los filmes de Videocine, pueden ver los números, y todos tienen a Televisa detrás, y pregúntense: ¿por qué las otras no han tenido este apoyo? Por una sencilla razón, porque llevo 12 años haciéndola. Me apoyaron porque firmé contratos, fui a copas mundiales, en fin. Ha sido una labor de muchos años para conseguir esta promoción. Hice contratos con el Grupo Slim. Les hice cosas internas, comerciales. Todo lo hice yo. Escribir, dirigir, conseguir el dinero, no sabes lo desgastado que estoy. Fui con la gente de Cinépolis y les enseñé la película.
“Ha sido un trabajo obsesivo para colocarla donde está. Todos los apoyos yo los conseguí, no fue Televisa. Lo hice yo a base de mucho trabajo.”
Tanto en Estados Unidos como en México, lo que recaudó en un día de taquilla su cinta, lo donará a los damnificados de Acapulco. Son cerca de 40 millones de pesos.

¿Qué cine queremos?

Víctor Ugalde*

El crimen del Padre Amaro, del Foprocine; Presunto culpable, del Imcine; Una película de huevos, del Fidecine, o Nosotros los nobles, del Eficine, sólo por citar las más exitosas películas de cada fondo o tipo de apoyo del Estado. ¿Por qué tipo de cine se inclinan los mexicanos?

Al recientemente nombrado director del Imcine (Instituto Mexicano del Cine), Jorge Sánchez, le resulta preocupante que el cine nacional en 2012 sólo obtuviera 4.8% de los espectadores nacionales, mientras que el número de estrenos fue 21% del total de las películas en cartelera.

Esa situación se muestra aún más preocupante cuando en el pasado Festival Internacional de Cine de Guanajuato el país invitado al encuentro bilateral, Colombia, demostró que con 10.6% de los estrenos logró obtener 8.21% de su público, y eso que su población es 60% más pequeña que la nuestra y el precio de sus boletos de entrada es 33% mayor, alrededor de 4.48 dólares contra 3.60 en México.

¿Qué pasa con nuestro cine que no logra comunicarse debidamente con nuestro público? ¿Estamos siendo víctimas de un complot de los grandes grupos de la comunicación nacional y transnacional? ¿Se producen filmes sin importar el gusto de los asistentes al cine? ¿Realmente los productores están capacitados para producir cintas que logren recuperar su inversión? ¿Las prácticas contrarias a la libre competencia están colocando en riesgo de extinción a nuestro cine? ¿Se produce sin pensar en las audiencias gracias a las ayudas públicas? ¿Se regresó a los tiempos de los empresarios privados privilegiándose de los dineros públicos? ¿Quién es el culpable de que 14 películas sólo sean vistas en la Ciudad de México? ¿Por qué sólo nueve cintas nacionales pudieron estrenarse en los 32 estados de la República? ¿Es benéfico para nuestro cine que sólo existan dos cadenas de cine?

Todas estas preguntas y muchas más deberán analizarse y responderse a la brevedad en diálogos y reuniones públicas con todos los integrantes de la cadena productiva, y en esto se debe incluir al público consumidor, ya que en 2010 sólo obtuvimos 6.1% del público con 17.9% de la oferta de los estrenos, y en 2011, 6.8% con 19.3%, cifras que marcan una crisis de comunicación que hay que resolver pronto.

Afortunadamente, en 2013 está mejorando nuestra situación y con sólo una treintena de estrenos se ha alcanzado a 8.9% de los espectadores, aunque este éxito se debe en realidad a sólo una película, la comedia Nosotros los nobles, del director Gary Alazraky con guión de Patricio Saiz, Gaz Alazraki y Adrián Zurita, que ha atraído a 7.1 millones de espectadores y ha obtenido ingresos en taquilla por más de 340 millones. Esta cinta logró superar los 5.3 millones de espectadores de Sexo, pudor y lágrimas y los 5.2 de El crimen del Padre Amaro, con sus 165 millones de pesos en taquilla; además se ha posicionado por encima de varios éxitos estadunidenses, como todos los Harry Potters, El señor de los

anillos, Batman, Piratas del Caribe, Iron Man, etcétera.

En su momento, la cinta de 2002 dirigida por Carlos Carrera y escrita por Vicente Leñero levantó un interés extraordinario del público nacional, producto del intento de censura que promovieron de manera conjunta la Iglesia y el gobierno panista que recién entraba a gobernar. Dado que al PAN le faltaban cuadros para administrar las instituciones culturales, estaban saturadas de funcionarios priistas que en ese momento sí exigieron el cabal cumplimiento de la ley de cine y afortunadamente se negaron a censurar las escenas solicitadas por el obispo de Morelia, como la imagen en la que se Ana Claudia Talancón se envuelve con un manto mientras Gael García le dice: "Pareces una virgen", o aquella en la que los gatos se comen unos recortes de hostia. La negativa de exhibición se debía a que este filme criticaba duramente los vicios y la corrupción de la Iglesia.

Ese año a la cinta se le conoció como "el milagro del Padre Amaro", ya que los exhibidores habían tenido un mal verano y andaban muy por debajo de sus expectativas económicas. Con el propósito de que El crimen… fuera lo menos vista posible, se organizó un complot de los exhibidores y se le estrenó en una mala fecha, septiembre. Y a pesar de que era la época de regreso a clases, las salas se empezaron a llenar milagrosamente gracias al talento del escritor y del director, tanto que los exhibidores lograron recuperarse de su bajo verano de filmes estadunidenses y no sólo alcanzar el crecimiento esperado, sino superarlo.

Ahora, en 2013, el caso es diferente. La cinta de Gary Alazraky gustó a los exhibidores y se preparó un buen lanzamiento en marzo. Para promocionarla con el boca a boca, que es la gran arma de nuestro cine, se pensó en realizar un pre-estreno una semana antes, mostrándola en 160 salas el fin de semana previo, hecho que la recomendó muchísimo entre la población.

La cinta está inspirada en la obra de teatro El gran Calavera, de Alfonso Torrado, que ya había sido adaptada al cine por Luis Alcoriza y su esposa Raquel. El filme fue dirigido a mediados del siglo XX por Luis Buñuel, quien con esa cinta logró recuperarse del gran descalabro que fue Gran casino, su debut en nuestro cine.

El éxito de Nosotros los nobles se debe en primer lugar a la sensibilidad del joven director, pero también a la excelente mancuerna que realizó con el nobel productor Leonardo Zimbrón, quien siempre se preocupó de que en la adaptación se pensara en el público. Leonardo ha producido cintas muy taquilleras, como Efectos secundarios (1.2 millones de espectadores) o No eres tu soy yo (2.9 millones de espectadores), entre otras.

Decimos que está inspirada, ya que el trazo de los personajes principales y los giros de la historia se cambiaron. El talento de los tres escritores logró reflejar el México actual y mejoró ostensiblemente las versiones anteriores. Según algunos de los asistentes, se consiguió mostrar claramente cómo algunos padres desearían poner a sus "ninis" a trabajar o estudiar, y otros más piensan que esta cinta fomenta el escapismo social al estilo Cantinflas o La India María, que permite que los pobres se burlen a sus anchas de los acaudalados y poderosos que los afrentan todos los días con su insultante riqueza.

Si volvemos al inicio de estas letras veremos que la comedia es uno de los géneros más exitosos, tal y como lo muestran Sexo, pudor y lágrimas, Una

película de huevos y ahora Nosotros los nobles. Este género es catárquico por excelencia y goza del favor del público, ya que le permite olvidarse por dos horas de su oprobiosa realidad.

De ahí la amplia aceptación entre el público, de ahí que haya sido criticada por diversos grupos sociales que consideran al cine como arte y factor de identidad, vieja polémica que viene desde los inicios del invento, a principios del siglo XX, y que ha enfrentado al cine de consumo con el de arte académico. Conflicto eterno que se repite desde la antigua Grecia, cuando se consideraba que las comedias eran para el vulgo, y la tragedia para la nobleza y las élites.

Esto nos regresa justo al centro de la discusión inicial: ¿Qué tipo de cine debe ser apoyado con los escasos recursos públicos que el gobierno actual le destina, ya que en 2013 se hizo un recorte de 175 millones de pesos, y tal y como se ve el desarrollo económico del año este desastre puede repetirse para 2014?

Todos los fondos han tenido fallas y aciertos, desde los éxitos comentados al inicio hasta cintas como Chamaco, que sólo reportó 176 espectadores y que recibió recursos del Fidecine (Fondo de Inversión y Estímulos de Cine); Río de oro, con 247 espectadores, apoyado por Eficine (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Nacional), y Flor en otomí, con 356 espectadores, promovido por Foprocine (Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad).

A decir del actual director del Imcine, el fideicomiso que ha fracasado es Fidecine, aseveración bastante temeraria, ya que este fideicomiso, con sus 169 cintas producidas de 2002 a 2012, ha logrado 39.9 millones de espectadores. A la fecha ha estrenado 81 filmes y ha obtenido el promedio más alto de espectadores por título, con 493 mil 601. Además ha reintegrado a sus arcas más de 115 millones de pesos.

Si este es el que fracasó habría que ver su criterio respecto al Foprocine, que ha producido 231 cintas de 1998 a 2012 y sólo ha captado 24.8 millones de espectadores desde su fundación, logrando un promedio de 263 mil 705 espectadores por filme. Hay que recordar que una de las razones por las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quería desaparecerlo desde principios del siglo XXI era por su bajo número de espectadores por título.

Eficine, por su parte, ha impulsado 230 filmes de 2006 a 2012, y ha obtenido 11.5 millones de espectadores con sólo 29 estrenos, y 396 mil 464 espectadores por título.

¿Por qué tipo de cine se inclinan los mexicanos? ¿Por cuál los funcionarios? ¿Por el cine documental, reflejo directo y crudo de la situación por la que atraviesa nuestro país? ¿Por el de autor y experimental, que impulsa el nombre de México a través de los festivales del mundo, pero que conecta poco con el público nacional? ¿Aquel con viabilidad comercial, sea impulsado por el Fidecine o el Eficine, como Nosotros los nobles? ¿El cine de crítica social, como El crimen del Padre Amaro o El infierno? ¿El contemplativo?

Mientras se discute el fondo de este asunto, no cabe duda de que el cine nacional ha obtenido un buen repunte desde el lejano 1997, cuando sólo se produjeron 14 largometrajes, hasta 112 en 2012. No obstante, en concordancia con el director del Imcine, es justo el momento de replantear qué tipo de cine se tiene que

impulsar con los dineros públicos y cómo. ¿Queremos más comedias, más cine de terror, más películas de crítica social?

Y además: ¿Las decisiones deben ser colegiadas por artistas o por todos los integrantes de la cadena productiva? Como diría Bob Dylan, “la respuesta está en el viento”. Y mientras tanto sólo podemos afirmar que, simple y llanamente, los mexicanos se inclinan por el buen cine. l

———————-

* Escrito en agosto por el cineasta y presidente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales.

El intento de asesinato a Díaz Ordaz

Columba Vértiz de la Fuente

El 5 de febrero de 1970, Carlos Castañeda (con 29 años de edad) intentó asesinar al presidente Gustavo Díaz Ordaz para vengar la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Ahora, 45 años después, vaga sin rumbo por las calles de la Ciudad de México pidiendo limosna. Alejandro Solar Luna logró encontrarlo para que a través de la cámara fílmica contara ese suceso y lo que le pasó después.

El resultado es el documental El paciente interno que se proyecta en las salas de cine del Distrito Federal desde el pasado 4 de octubre, con sólo 12 copias; después recorrerá varias ciudades del país. En París se presentará dentro de la primera edición de los Encuentros Cinematográficos "Viva México", que se efectuará del 8 al 13 de este mes en el cine Etoile Lilas.

Solar Luna acepta que el estreno respondió a una estrategia por los 45 años de la matanza de Tlatelolco:

"Es un documental que tiene vigencia en un país donde la democracia es simulada, la justicia no llega nunca y hay asignaturas pendientes de un gobierno con responsables claros y directos en la impunidad absoluta. El tema de la película es actual no sólo por el 2 de octubre, sino porque es la historia de un hombre que intentó vengar lo ocurrido ese día. Pero fue declarado enfermo mental, encerrado en el hospital psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, vejado, disminuido, y ahora camina por las calles de nuestra ciudad.

Se trata de una producción de la Universidad Nacional Autónoma de México, Difusión Cultural UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Fondo para la Producción Cinematográfica. Lo distribuye Eprocine.

–¿Cree que internan a don Carlos para que el asunto se olvide?

–Esa es otra de las enigmas, ¿por qué no desaparecerlo?, era lo que se estilaba, pero el castigo es desmedido. Hubo una rabia contra él manifestada desde el momento en que lo ingresan en el pabellón 5, que construyen casi para él. Lo encierran, lo aíslan y al mismo tiempo lo anulan en vida. Fue víctima de medicinas. En ese pabellón estaban los enfermos mentales que habían cometido crímenes atroces, ni siquiera se les juzgaba, y él era el único que no había ni siquiera asesinado.

–¿Cómo encuentra a este personaje?

–Yo comencé la investigación y el proyecto lo presenté a Imcine con el fin de que me dieran el apoyo para desarrollarlo con un hombre que buscaba en las calles de la Ciudad de México. De eso trataba el documental, de la búsqueda de este señor. Un antropólogo físico me hizo un retrato de cómo debería de verse hoy. Una tarde de 2008, cuando llevaba unos seis o siete meses de buscarlo, la abogada Norma Ibáñez, que vio el caso de Carlos Castañeda para sacarlo del hospital, me llamó por teléfono y me dijo que lo tenía enfrente. A ella le impactó mucho que don

Carlos estuviera en la calle. La misma abogada se lo encontró en Reforma y Amberes. En ese momento supe que estaba vivo. L

El teatrito se cayó

Beatriz Pereyra

La reaparición de Julio César Chávez Jr. –mediante la cual el pugilista supuestamente resarciría su maltrecha imagen– resultó un fiasco, a tal grado que incluso los cronistas de TV Azteca, que ha impulsado su carrera, coincidieron en que los jueces del estado de California que le dieron el triunfo por decisión unánime deberían avergonzarse por su falta de honestidad. Con esta debacle disfrazada de victoria se cierra un capítulo de la historia del boxeo en México, luego de que el duopolio televisivo se empeñó en construir ídolos al vapor: Televisa con El Canelo Álvarez y TV Azteca con El hijo de la leyenda.

“Hace muchos años dejamos claro que queremos a los boxeadores mexicanos, que creemos en nuestro proyecto y levantamos nuestra bandera para alegrarnos por las victorias, pero también hemos dejado claro que no somos porristas y no vamos a venir a fabricar resultados cuando la gente está viendo por televisión lo que sucede”. Esto dijo el analista de TV Azteca Eduardo Lamazón al concluir el combate en el que los jueces otorgaron a Julio César Chávez Jr., el triunfo por decisión unánime ante el estadunidense Bryan Vera.

Cuando el anunciador oficial leyó las tarjetas, los asistentes al StubHub Center de Carson, California, estallaron en abucheos. Carlos Aguilar, comentarista de la televisora, no se aguantó: “Yo no me trago ésta. Me quedo con la tarjeta de Eduardo Lamazón. La gente termina por protestar. Me parece que esto le hace daño al boxeo y que Julio debe recapacitar qué hace arriba del cuadrilátero”.

Como cada fin de semana, Lamazón anotó round por round, de acuerdo con su juicio, el número de puntos que cada peleador iba obteniendo. El especialista marcó 10 puntos para Vera en los rounds uno al cinco, ocho y nueve; sólo en el sexto, séptimo y décimo vio superior a Chávez Jr., para una suma final de 97-93 a favor del pugilista texano.

Ninguno de los 59 integrantes de la prensa estadunidense que cubrieron la pelea vio ganar a Chávez Jr., y menos por decisión unánime: 52 dieron el triunfo a Vera y otros siete marcaron empate.

Únicamente los jueces de la Comisión Atlética del Estado de California vieron ganar a Chávez Jr. Carla Caiz anotó 96-94 a favor de Chávez Jr., Marty Denkin 97-93 y Gwen Adair 98-92.

El mexicano enfrentó a Vera después de un año sin pelear. Traía a cuestas la derrota del 15 de septiembre de 2012, cuando Sergio Maravilla Martínez le arrebató el campeonato de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). También arrastraba una suspensión de nueve meses porque dio positivo a mariguana en el control antidopaje realizado al término de ese combate, así como una sentencia de libertad condicional por conducir bajo los efectos de drogas y alcohol.

El pasado 17 de julio la promotora Zanfer, de Fernando Beltrán, dio a conocer que

el 7 de septiembre Chávez Jr., regresaría a los encordados para una pelea de 12 rounds pactada en 168 libras. Una semana antes el boxeador reapareció durante una pelea de su hermano menor Omar. Lucía con sobrepeso.
Su tan anunciado regreso se convirtió en un circo. El ignominioso espec-táculo comenzó cuando los promotores de Chávez Jr. (Bob Arum, de Top Rank) y de Vera (Art Pelullo, de Banner Promotions) iniciaron las negociaciones.
En un principio la propuesta de Pelullo fue que la pelea se hiciera en 162 libras, pero los representantes del mexicano pugnaron libra por libra: 164, luego 165… hasta conseguir que el contrato se firmara en 168 (peso súper mediano: 76.2 kilos). El cuerpo de Chávez Jr., les decía a gritos que no habría forma de que pesara menos. El mexicano tenía sólo siete semanas para perder alrededor de 15 kilos.
Para su combate ante Vera ya no trabajó con Freddie Roach, el entrenador con quien se convirtió en campeón mundial, pero que en múltiples ocasiones se quejó de su indisciplina y falta de compromiso.
El lugar de Roach lo ocupó Julio César Chávez padre, el mismo con quien el boxeador ha estado a disgusto y que, según sus propias palabras, estorba más de lo que ayuda en los entrenamientos.
El 22 de julio el júnior declaró al diario El Universal: “Mi padre ya no seguirá más en mi esquina. Hemos llegado a un acuerdo para vernos sólo una vez por semana porque es muy difícil llevar esa relación familiar y profesional al mismo tiempo. Por ello, ya no estará más en los campamentos conmigo”.
Sin embargo, una semana después reculó.- Le pidió que se integrara a su equipo, en el que ya estaban Vladimir Baldenebro y el preparador físico Alex Ariza, a quien conoció cuando entrenaba en Los Ángeles con Freddie Roach. En entrevista con ESPN, Ariza declaró que Chávez Jr., no tendría ningún problema para dar las 168 libras. Luego de unos días, sorpresivamente, Ariza dejó de formar parte del llamado Chávez Jr. Team.
A mediados de agosto pasado, Chávez Jr., sufrió una ligera cortadura en el párpado derecho en un entrenamiento. Esto ocasionó que la pelea contra Vera se pospusiera para el 28 de septiembre. Así, tuvo dos semanas más para ponerse en forma.

El peso, una pesadilla

El lunes previo a la pelea, cuando los Chávez llegaron al hotel, el papá de Julito declaró públicamente que el límite de peso para la pelea no sería de 168 libras, sino de 173. El anuncio dejó boquiabiertos a los reporteros. Todos sabían que Chávez Jr., pasaba apuros para dar las 168 libras, pero de ahí a cambiar los términos del contrato había una gran diferencia.
La noticia también sorprendió a Bob Arum, Fernando Beltrán y Art Pelullo. Del cambio de peso se enteraron por los medios. En una teleconferencia, Arum aclaró que hasta ese momento no había ningún cambio, que el miércoles 25 se reuniría con Pelullo para discutir el punto y que ese día pesarían a los boxeadores para tomar una determinación. “Sé lo que dijo Julio padre, pero realmente creo que se

equivocó al hablar", sentenció Arum.
En el colmo del absurdo, ninguno de los promotores de la pelea quiso anunciar el nuevo peso límite. Cuando se le preguntaba al respecto, Arum reía y se limitaba a decir que el peso era un personaje que estaba haciendo más atractivo el combate.
El 26 de septiembre, un día antes de la ceremonia de pesaje, se filtró a la prensa que el pleito estaba pactado en 173 libras, pero todos debían esperar hasta el viernes para tener la información oficial, por si Chávez Jr., no daba el nuevo peso. Era obvio que el problema se arreglaría con dinero; el peleador mexicano debía pagar por cada una de las cinco libras sobrantes. Por su parte, el equipo del estadunidense pidió que la pelea se hiciera en 10 rounds y no en 12.
Por esos días la prensa de Estados Unidos hizo escarnio de la promoción del pleito con que Chávez Jr., pretendía, supuestamente, restablecer su maltrecha imagen. Uno de los analistas de boxeo más eminentes, Dan Rafael, de ESPN.com y exreportero del diario USA Today, publicó en su cuenta de Twitter: "Hay esperanza de que Chávez dé las 168 (libras). Oí decir a uno de sus colabo-radores que ya cambió a Tecate light".
El viernes 27, Chávez Jr., marcó 172.4 libras. Vera pesó 171.2. Mientras el estadunidense se dio el lujo de desayunar y comer lo que le vino en gana, el mexicano sudó hasta la última gota. De acuerdo con Dan Rafael, pasó horas pedaleando en una bicicleta fija, corriendo en una caminadora y sentado en el sauna. El pugilista llegó exprimido al pesaje.
Con todo y que no dio las 168 libras –por lo cual terminó indemnizando a Vera con 100 mil dólares adicionales a la bolsa de 400 mil firmada por el texano–, Chávez Jr., alardeó en conferencia de prensa de que puede bajar a 160 libras con tal de hacer el pleito de revancha con Maravilla Martínez. También desdeñó enfrentar otra vez a Marco Antonio Veneno Rubio, y retó a Saúl Canelo Álvarez para que suba de división y pelee contra él.
"Los boxeadores –dijo– buscamos peleas que gusten a la gente. Canelo tiene problemas para dar las 154 libras. Dio 152 pero no tenía piernas, así que si quiere otra pelea grande tiene que ser conmigo porque a todos nos conviene, a la gente, a los promotores, a él y a mí. Yo regresaría a las 160 libras sólo para una revancha contra el Maravilla. El Veneno Rubio es el rival ordenado por el CMB y quiero cumplir con eso, pero también pienso que haría un gran sacrificio para pelear contra alguien que ya derroté y, la verdad, no vale la pena."
Durante semanas, Chávez Jr., declaró una y otra vez que ante Vera borraría sus errores del pasado, recuperaría la credibilidad perdida y encontraría el rumbo perdido. No paró de decir que es humano, que los humanos se equivocan, que le dará al boxeo la seriedad que merece, que corregirá esto, que enmendará aquello.

Indignación

La noche del 28 de septiembre, más de 5 mil personas acudieron a la arena para animar al mexicano. El desencanto comenzó desde el primer round. Chávez Jr., lucía fuera de forma, se veía pesado. Estuvo agazapado de principio a fin, tratando de cazar a su rival con un golpe para noquearlo. Éste, con mejor condición física,

atacó todo el tiempo, pero el júnior lo hizo tambalear en un par de ocasiones.
Vera no es un gran boxeador. Tiene 31 años y poco más de la mitad de las peleas (29) que acumula Chávez Jr. (48), quien cumplió 27.
En un hecho inusitado, los comentaristas de TV Azteca cuestionaron a El hijo de la leyenda. Hablaron de su ineficacia, de que le afectó pasarse un año sin pelear. Desde el micrófono lo animaban a ir al frente y tirar golpes. Con la última campanada quedaron a la espera del resultado y mostraron indignación, entre una ola de abucheos, cuando se anunció el triunfo del pugilista.
De acuerdo con CompuBox, Vera tiró 734 golpes (de los cuales conectó 24%), contra 328 de Chávez Jr. (que concretó 38%). También en golpes de poder fue proporcionalmente más efectivo: 98 de 186 tirados (53%), contra 109 de 343 (32%). Según los especialistas, incluso un empate hubiera sido injusto. Lejos de silenciar las críticas, Chávez Jr., volvió a iniciar una controversia sobre su reputación.
Al Bernstein, veterano periodista y miembro del Salón de la Fama del Boxeo, publicó un análisis de la pelea en el que fustigó a los jueces y al mexicano:
“El viernes predije en Twitter que Brian Vera le ganaría a Julio César Chávez Jr. Resulta que yo tenía razón. Vera fue mejor peleador y Jr., fue mucho mejor quejándose. Al parecer los tres jueces valoraron más las quejas que el boxeo. Determinaron que Jr., fue el ganador. No se equivoquen: las tarjetas 98-92 y 97-93 son deshonrosas y los jueces que las presentaron deben estar muy avergonzados. Prácticamente toda la prensa y otros conocedores de boxeo que estaban en primera fila o viendo la televisión apuntaron que la pelea fue para Vera. Yo anoté 96-94. ¿De verdad es concebible darle al Jr., siete u ocho rounds?
“La inexistente ética de trabajo de Chávez Jr., ha dañado gravemente su repu-tación. Su comportamiento durante y después de la pelea ha diezmado aún más su prestigio. La única excusa que le faltó dar en la entrevista posterior a la pelea fue: ‘Mi perro se comió mi tarea’. Su mal desempeño lo atribuyó a tácticas sucias de Vera, una lesión en la mano, al ‘mal arbitraje’ de Lou Moret. Nunca mencionó lo que él dejó de hacer para tener un rendimiento tan deficiente. De hecho, según él, no tuvo un pobre rendimiento. Fue firme al declarar que ganó y llegó a decir que habría golpeado a Vera si no fuera por todas estas circunstancias ajenas a su voluntad.”
De acuerdo con el reporte de la televisora HBO, 1.4 millones de personas vieron la pelea en Estados Unidos. Lo reporta como el rating más alto de la empresa en lo que va de 2013. L

Termina un cacicazgo, comienza la incertidumbre

Raúl Ochoa

La remoción de Rafael Herrera Lemus como titular de la Comisión de Box Profesional del Distrito Federal acabó con “la peor” gestión en la historia de ese organismo. Seis años sin ingresar un peso, en los que se le acusó de todo: venta de clasificaciones, licencias y certificados médicos, hasta autorización de funciones ilegales… Hay aplausos a su salida, pero ahora viene la incertidumbre, toda vez que el gobierno capitalino, a través de su Instituto del Deporte, aún no designa al nuevo presidente de la Combox.

El director del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF), Horacio de la Vega, removió al titular de la Comisión de Box Profesional del Distrito Federal (Combox), el expugilista Rafael Herrera Lemus, pero hasta la fecha no se ha nombrado a su reemplazo.

El exboxeador ejerció el cargo del 16 julio de 2007 al 23 de septiembre último. Su salida deja un vacío administrativo en la comisión de boxeo más importante del país. Este hecho causa preocupación en el pugilismo capitalino, e incluso el grupo opositor a la gestión de Herrera plantea la urgencia de nombrar –incluso por encima del reglamento– a un presidente interino o encargado del despacho que ponga orden y autorice las salidas médicas de pugilistas con peleas ya firmadas.

Junto con Herrera también salieron los comisionados. Hasta ahora sólo los integrantes del servicio médico permanecen en sus puestos.

El extitular de la Combox José Luis Espetia comenta que aun cuando no existe tiempo reglamentado para la designación del nuevo titular del organismo “se está cayendo en una anarquía impresionante porque la actividad boxística del Distrito Federal no se frena. Si algún accidente se llegase a presentar no habrá ningún responsable”.

Espetia, quien durante los primeros cinco meses de la gestión de Herrera se desempeñó como comisionado, advierte: “Se está soslayando la importancia del boxeo como una actividad económica”. Se olvidan, dice, que gracias a este deporte muchos jóvenes se han salvado de las drogas y de caer en actividades ilícitas. “En este momento el gobierno del Distrito Federal está perdiendo la perspectiva”.

Y añade: “El peleador que requiere una autorización para ganarse unos pesos podría no estar médicamente apto, pero no hay quien valore su condición para afrontar un combate. Si le ocurre un accidente no habrá ningún responsable”.

Durante más de seis años Herrera no se preocupó por la transparencia ni por la rendición de cuentas. En sentido estricto, los últimos tres años de su gestión incurrió en usurpación de funciones, pues el entonces jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, no lo ratificó en el cargo, tal como lo establece el reglamento interior de la Combox, vigente desde el 4 de noviembre de 1994.

En este instrumento –a todas luces anacrónico– se indica que el presidente será

propuesto por “la Dirección General de Promoción Deportiva” –hoy IDDF– y nombrado “por el jefe del Departamento del Distrito Federal”, en cuyo cargo durará tres años y podrá ser reelecto.
El 16 de julio de 2007, Herrera fue designado titular de la Combox por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Sin embargo, tras cumplirse su primer periodo de tres años el mandatario capitalino omitió formalizar su reelección. Por ello, afirma el manager Carlos Rosales, cofundador del Grupo de Managers (Gruma), “se mantuvo en el cargo usurpando funciones”. No obstante, Herrera siempre se ufanó de que fue “ratificado de palabra” por el secretario de educación del Distrito Federal, Mario Delgado.

Números rojos

El pasado 30 de agosto, el director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Horacio de la Vega Flores, aplicó el reglamento existente y le pidió a Herrera la entrega de su cargo con base en los artículos 3 y 4 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal.
En el oficio IDDF/DG/573/2013, el responsable del IDDF le planteó al expugilista que debía abandonar la presidencia de la Combox, pues ya cumplió dos periodos al frente del organismo, tiempo máximo establecido en el artículo 4 del reglamento.
El pasado 24 de septiembre, el titular del IDDF rechazó el acta administrativa presentada por Herrera. El motivo: reportó que dejaba en ceros a la comisión.
Para De la Vega este hecho es increíble pues la Combox recibe dinero de manera constante, ya sea por sancionar combates o por el otorgamiento de licencias a managers y peleadores. Por ejemplo, por una pelea de campeonato nacional cobra 7 mil 500 pesos.
En promedio se realizan 40 funciones al año, sin contar las funciones estelares, como la llamada Fiesta de los Campeones del Bicentenario, realizada el 11 de septiembre de 2010 en la Plaza de Toros México. En este evento –en realidad un megafraude– organizado por Villuendas Promociones y Grupo Matiz, con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y del gobierno capitalino, los pugilistas, así como los jueces, médicos y comisarios no recibieron pago alguno.
En enero de 2011 este semanario abordó el tema del fraude, estimado en 12 millones de pesos. Entre los afectados estuvieron los boxeadores Erick El Terrible Morales, Édgar Sosa y Ana María La Guerrera Torres. Como principal responsable del sainete aparece el promotor José Luis Villuendas (Proceso 1785).
La Combox también cobra por las llamadas peleas populares, en las que no se disputa ningún título, pero producen de 4 mil a 5 mil pesos por función. Al año se realizan entre 15 y 20 combates de esta índole.
En teoría, la suma recabada se reparte entre pagos a oficiales y en general a los participantes en la función –campaneros, directores de encuentro, médicos–, si bien sus percepciones no superan los 400 pesos por persona.
En vez de que el dinero se depositara en una cuenta concentradora de la Combox, pasaba directamente a las cuentas personales del titular, Rafael Herrera, y del

director de encuentros, Julio César Sandoval Ortiz.

Imprevisión

El pasado 19 de abril, Daniel Tremendo Estrada expuso su título plata de peso ligero del CMB ante el uruguayo Sebastián Cristian Faccio en el Win Win del Distrito Federal. Por sancionar este encuentro la Combox cobró 19 mil pesos, que el promotor Flavio Bustamante Abed, de Ring Side América, pagó mediante el cheque número 00000386014 de CIBanco, sucursal Palmas. Este documento –que resultó sin fondos– se libró a nombre del director de encuentros de la Combox, Julio César Sandoval Ortiz, cuyo hermano Marco Antonio era uno de los comisionados.

Durante su presidencia, Herrera enfrentó numerosos señalamientos: desde la presunta venta de clasificaciones, de licencias y certificados médicos hasta la autorización de funciones ilegales (Proceso 1892).

Al ahora extitular de la Combox también se le acusa de alterar los récords de los boxeadores; incluso le achacan responsabilidad en la muerte de Daniel Aguillón, joven peleador que falleció en octubre de 2008 tras ser noqueado por Alejandro Sanabria.

El abogado de Gruma, Jesús Montiel Jaime, celebra la caída de Herrera y asegura que después de cuatro años de ardua lucha, en la cual acudieron ante varias instancias –la Jefatura de Gobierno del DF, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el IDDF–, finalmente alguien le pidió la renuncia al expeleador. No obstante, deplora que no se haya previsto quién se quedaría al frente de la Combox.

El litigante revela que durante su reunión del martes 1 con el asesor jurídico de la dirección general del IDDF, Francisco Torres, éste le hizo saber que ese organismo carece de facultades para designar directa o provisionalmente al nuevo encargado de la Combox. “Sucede que el reglamento es muy obsoleto: indica que el presidente de la comisión será propuesto por la desaparecida Dirección General de Promoción Deportiva, “pero no dice textualmente Instituto del Deporte del Distrito Federal”.

La Combox es un “cuerpo técnico, autónomo y dependiente administrativamente del Departamento del Distrito Federal”, de acuerdo con el reglamento vigente desde el 11 de marzo de 1996, cuando Juan José Torres Landa encabezaba la comisión.

El problema, alerta Montiel, es que hay boxeadores del Distrito Federal que pelearán este fin de semana y para ello necesitan forzosamente las salidas médicas y administrativas. “Al menos un promotor de Tijuana ya amenaza con demandar a estos pugilistas si no pelean”.

Como el IDDF argumenta carecer de facultades jurídicas para designar al nuevo titular de la Combox, Grupo Gruma, presidido por el manager Carlos Rosales, solicita a ese instituto urgir al jefe de gobierno para que designe a un encargado de despacho o a una comisión de transición.

Ésta es la primera ocasión en la que el mayor cargo de la Combox queda acéfalo.

“Ha sido la peor Comisión de Box de la historia con Rafael Herrera al frente. Se manejaban muchos intereses. Los peleadores, principales protagonistas de este deporte, simplemente no tienen seguro social ni ninguna clase de garantías de nada”, comenta a su vez el réferi internacional Lupe García.

Advierte que si el gobierno del Distrito Federal no designa al titular de la Combox, “entonces la familia boxística nombraremos a un interino para que de inmediato resuelva los problemas que hay con las salidas médicas y administrativas de los boxeadores y con ello puedan pelear, que de eso viven”.

Por su parte, el IDDF informó que el proceso de entrega-recepción de Herrera se encuentra “en proceso de integración, de conformidad con la normatividad vigente, que establece 15 días hábiles a partir de la conclusión de su gestión”.

De los estados financieros presentados por el exboxeador, el IDDF confirmó que aún no posee “conocimiento puntual de dichos datos”.

Asimismo, adelanta que la nueva mesa directiva de la Combox ya “está siendo conformada y se dará a conocer a la brevedad mediante una rueda de prensa”.

Acerca de Un líder "vendido" y un movimiento que continúa...

Del profesor Rubén Núñez Ginez

Señor director:

Por este medio, solicito la publicación de la siguiente carta aclaratoria, en relación con la nota: Un líder "vendido" y un movimiento que continúa… firmada por el reportero Santiago Igartúa y publicada en Proceso 1926 el 29 de septiembre de 2013.

En dicha nota se me presenta como un traidor al Movimiento Magisterial Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) haciéndose alusión a un descontento generalizado de nuestros representados con la dirección seccional que encabezo, y desvirtuando con ello la heroica lucha que estamos dando como Sección 22 desde el 19 de agosto, cuando, por acuerdo de nuestra asamblea estatal, decidimos iniciar un paro indefinido y trasladarnos a la Ciudad de México, donde mantenemos nuestra demanda de abrogación de la reforma constitucional a los artículos 3° y 73 y de las leyes secundarias que se derivan de ella, por atentar contra la educación pública y los derechos laborales de los trabajadores de la educación del país.

Nos sorprende que la revista Proceso, que ha sido desde sus orígenes un espacio informativo y analítico veraz, crítico, al servicio de la sociedad, se una hoy a la campaña mediática de denostación y calumnias que la mayoría de los medios de comunicación han lanzado contra la justa lucha que nos tiene movilizados.

Primero quiero aclarar, como secretario general de la Sección 22, que las negociaciones que hemos tenido con diversas autoridades federales, estatales y con el CEN del SNTE se han realizado con la presencia de todos los integrantes de la Comisión Política y con el aval de nuestros órganos de gobierno; que no han sido a título personal y se han obtenido algunas respuestas por escrito sobre problemas añejos, específicos, de la Sección 22, las cuales se han dado a conocer a nuestros compañeros y a la opinión pública; que en ningún momento se ha pactado con las autoridades el levantamiento de la movilización que todavía mantenemos, y que la asamblea estatal del pasado 27 de septiembre acordó continuar con la Jornada de Lucha a Nivel Nacional de manera masiva a partir de una segunda consulta que se realizó a nuestras bases movilizadas en el Plantón Nacional.

Al respecto, es necesario aclarar que, de acuerdo con nuestros principios rectores, no corresponde a los líderes la toma de decisiones, sino consultar a las bases, y esto fue precisamente lo que hicimos, y no un "arreglo", como supone el reportero, para desmovilizar a nuestro contingente movilizado.

A partir de opiniones personales de compañeros que participan en el plantón, construye el reportero, de manera subjetiva, la historia de la traición. Al respecto, es necesario señalar que al interior del MDTEO se dan distintas expresiones y puntos de vista incluso encontrados, dado que es un movimiento plural, donde existe la libertad de expresión y de pensamiento, se practican la crítica y la

autocrítica y se tienen órganos de gobierno sindical donde se toman las decisiones trascendentales a partir de cumplir con el sentir de las bases. Precisamente la última asamblea estatal, cuyos resultados conoció el reportero, acordó “brindar el respaldo total al CES y al profesor Rubén Núñez Ginez, secretario general de la Sección XXII, en base a las denostaciones que hacen algunos medios de comunicación escritos con el propósito de golpear al MDTEO”, por lo que la hipótesis de la traición registrada cae por su propio peso.

Es lamentable que el autor del reportaje no valore que ha sido la Sección 22, como parte de la CNTE, la que ha venido encabezando la lucha nacional contra la mal llamada reforma educativa, que actualmente involucra a 26 entidades de las 32 de la República, ante un SNTE que, como siempre, ha sido sometido por el gobierno y ha aceptado sus políticas educativas, que agravian a la educación nacional y a los trabajadores, al despojarnos de nuestra materia de trabajo, dejándonos en la indefensión laboral, al desaparecer arbitrariamente los derechos laborales y convertirlos en derechos administrativos, donde el gobierno patrón (la SEP y los organismos descentralizados de las entidades) asume el control unilateral de las relaciones laborales.

Es cierto que la revista Proceso me solicitó una entrevista, pero por razones de mi agenda de trabajo no se pudo concretar; sin embargo, tal situación no le da derecho al comunicador aludido para que difame a mi persona y al movimiento, dado que es su obligación constatar los hechos que señala, y no lo hizo, por lo que pido también un reportaje en el que se informe a la opinión pública nacional que los trabajadores de la educación de la Sección 22 y la CNTE seguimos luchando de manera unitaria, que mantenemos nuestra Jornada Nacional de Lucha y que estamos ya iniciando un movimiento nacional de resistencia organizada y desobediencia civil pacífica ante estas leyes injustas que fueron impuestas con la fuerza del Estado, sin el consenso social y sin tomar en cuenta las propuestas que formulamos. Hasta la fecha, el gobierno mexicano y los legisladores solamente han venido administrando el conflicto, mismo que no está resuelto, razón por la cual entramos a la séptima semana de paro indefinido y no abandonaremos nuestra demanda central.

Espero, señor director, que, con base en el derecho de réplica, sea publicado mi disenso en la sección correspondiente.

Atentamente
Profesor Rubén Núñez Ginez
Secretario general de la Sección 22del SNTE-CNTE

Respuesta del reportero

Señor director:

En el texto mencionado no hay valoraciones ni adjetivos por parte del reportero. Todos los señalamientos en torno al profesor Rubén Núñez Ginez, como se indica en la nota, provienen de integrantes del movimiento que lo eligió como representante.

Los mismos entrevistados, perfectamente acreditados, pidieron omitir sus nombres completos por miedo a represalias ya que, afirmaron, en varias ocasiones la dirección de la Sección 22 ha prohibido a las bases hacer declaraciones a los medios de comunicación.

En el texto publicado no hay acusación alguna en contra del MDTEO, y el semanario no se ha sumado a una campaña mediática para denostarlo y calumniarlo. Por el contrario, en estas páginas se documentó el diseño de dicha campaña en contra del magisterio (Proceso 1923).

El profesor reclama ahora un derecho de réplica que en su momento, advertido de que se habían hecho una serie de acusaciones en su contra, descartó. El martes 1 de octubre se le propuso nuevamente una entrevista para responder a las imputaciones de los maestros de las bases, aquí reflejadas, y para esclarecer públicamente su gestión en el mismo espacio que el reportaje del que disiente. Optó por escribir una carta.

Atentamente

Santiago Igartúa

Advierte sobre los usos ilegales del nombre "Topos"

Señor director:

Por este medio, mi representada, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, A.C., hace de su conocimiento la siguiente información relacionada con el viaje de la señora Laura Bozzo a la zona de desastre afectada por el huracán Manuel, así como con algunas declaraciones que realizó derivadas de este hecho y que involucran el nombre "Topos".

El 19 de septiembre, la señora Laura Bozzo hizo un llamado a través de su cuenta personal de Twitter a los "Topos mexicanos" para que la ayudaran a rescatar a la gente.

El 25 de septiembre realizó las siguientes declaraciones en su cuenta de Twitter y en su programa de televisión transmitido por la cadena Televisa: "…Topos mexicanos, con quienes he trabajado mucho (…) Los Topos vinieron de Perú por mí y han trabajado allá y en Chile (…) He sido rescatista desde toda mi vida… He trabajado con los Topos en Perú, en Chile y en muchos lugares…".

Como se desprende de las copias que se adjuntan a la presente, mi representada es la titular y, por lo tanto, la única legalmente autorizada para utilizar el signo distintivo "Topos", tipo de marca nominativa y marca mixta, conforme al registro y marca números 1070694 y 813984, respectivamente, ambas aplicables a servicios de operación de rescate y salvamento de todo tipo de personas dentro o fuera de la República Mexicana.

Por ello manifiesto que ningún otro organismo, ya sea local o federal, persona moral, pública o privada o persona física cuenta con facultades para utilizar, y mucho menos explotar, comercializar o hacer uso en cualquier forma del signo distintivo, marca nominativa, así como de la marca mixta, sin la previa autorización por escrito de su titular, la "Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, A.C.", so pena de incurrir en diversos ilícitos contemplados en la legislación mexicana.

Lo anterior obedece a que diversas agrupaciones hacen uso del signo distintivo y/o marca nominativa "Topos" sin la previa autorización otorgada por mi representada, apelando a la buena fe de la población en general y obteniendo con ello recursos económicos y/o materiales en acciones que ocasionan una serie de perjuicios a la persona moral que represento.

Anexo a la presente carta una copia de la averiguación previa entablada por mi representada ante la Procuraduría General de la República, en contra de cierta agrupación que ha utilizado y lucrado con el nombre de mi representada.

Por lo anterior, mi representada se deslinda de cualquier vínculo con dicha persona, que no forma ni ha formado parte de la plantilla de rescatistas que la conforman, como tampoco ha colaborado en ningún operativo donde la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, A.C., haya prestado su auxilio.

Hago énfasis en que la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, A.C., únicamente acepta donativos entregando siempre una constancia a los donantes, toda vez que cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir recibos deducibles de Impuesto sobre la Renta.

En virtud de todo lo anterior, esta agrupación, por conducto de su representante, solicita atentamente de la revista Proceso que se haga del conocimiento del personal correspondiente (jefes de redacción, reporteros, etcétera) el contenido de la presente con la finalidad de que sea de mayor exactitud la información proporcionada al público.

Sin más por el momento, seguro de la atención que le sirva otorgar a la presente, quedo de usted.

Atentamente

“Proteger, Alertar, Socorrer”

Licenciado Antonio Álvarez Méndez
Director jurídico de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, A.C.
044/55/287-87-91
info@brigada-rescate-topos.org

Una profesora recomienda a Peña Nieto consultar a los maestros

Señor director:

Le agradeceré publicar en la sección Palabra de Lector la presente carta, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto.

Señor presidente: Hurto una idea de los ilustrados catedráticos de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rebsamen” de la ciudad de Xalapa, en relación con un postulado de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Así reza la meditación: “La evaluación aplicable a los maestros debe incidir para encontrar posibles debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y subsanarlas, pero jamás para impedir su permanencia en el servicio magisterial”.

Por mi parte, puedo opinar que en pueblos con culturas milenarias, como China y Japón, se confirma el mandamiento expuesto, ya que los maestros son profesionistas con muy altas remuneraciones.

Asimismo, cabe advertir que los factores corresponsables en la educación e instrucción de las generaciones de un país son el contexto socioeconómico, los padres de familia, los alumnos, el gobierno y los maestros.

Padres y madres de familia entienden esta dinámica y comprenden la preocupación de los profesores ante la dureza de la ley en cuestión, que no debe responsabilizar a los padres de familia, alumnos, docentes y directores de construir edificios y conseguir materiales.

Conocemos la vulnerabilidad económica del grueso de la población. Los profesores que deseen ingresar al servicio magisterial también merecen la oportunidad de un trabajo formal y con prestaciones; con las consabidas evaluaciones y las debidas retroalimentaciones: culturales, intelectuales y metodológicas con las escuelas normales y las universidades de donde egresaron.

Queda mucho por comentar de esta Ley General del Servicio Profesional Docente. Pero esta redactora no es la indicada para hacerlo. Sólo le pido con el debido respeto, señor presidente, que no mire a otras instancias para dar solución al rezago educativo de nuestro país. Simplemente pregunte usted a todos y cada uno de los maestros mexicanos: ellos le darán la respuesta. (Carta resumida.)

Atentamente

Profesora Margarita de la O Lavalle

Pide aprobar iniciativa ciudadana sobre la energía eléctrica

Señor director:

Le solicito publicar la presente carta, dirigida a los senadores y diputados de la LXII Legislatura:
Señores legisladores: En el artículo 1º constitucional se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1956 consagra los derechos civiles y políticos. Para que éstos sean posibles se requiere que los humanos de cualquier raza, credo, género y nacionalidad tengan derecho a la salud, el trabajo, la educación, los avances científicos y técnicos y la vida misma. Es requisito para todo ello el uso de la energía eléctrica. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 define que el derecho a la vivienda pasa por el acceso de cada una de éstas a la energía eléctrica; por lo tanto, el derecho al acceso a la energía eléctrica es un derecho humano.
La justicia distributiva es el acceso de todos a los recursos necesarios para ser. Ser, hoy en la complejidad del mundo, es acceder a la energía eléctrica.
El uso de la energía eléctrica es igual de importante para todos, ricos y pobres, gobernantes y gobernados; por ello, debe existir una tarifa social justa para el servicio doméstico y debe ser igual para todos, porque todos somos iguales ante la ley.
Hemos entregado en ambas cámaras del Congreso de la Unión nuestra iniciativa ciudadana con el objetivo de modificar el artículo 4° de nuestra Carta Magna, elevando a rango constitucional las cláusulas necesarias para que la energía eléctrica sea un derecho humano y para que el Estado proteja y garantice el cobro del suministro con una tarifa social justa.
Somos algo más de 32 millones de usuarios domésticos en el país, pero estamos, con las actuales tarifas eléctricas fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –con las lecturas estimadas en la mayoría de los casos por la Comisión Federal de Electricidad–, en la disyuntiva de comer o pagar la luz eléctrica.
Por lo que desde este medio exigimos a los senadores y diputados de la LXII Legislatura que aprueben nuestra iniciativa ciudadana, que en una primera entrega respaldamos con 317 mil 517 firmas de varios estados de la República.

Atentamente
“Salud y Revolución Social”
Fernando Amezcua Castillo